CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 17 de noviembre de 2003

ORDEN DEL DÍA:

Primero

Actas:

— Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2003.

Segundo

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

— De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 147, de fecha 24 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000147). (Número de expediente C. D. 121/000147).

— De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 149, de fecha 27 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000149). (Número de expediente C. D. 121/000151).

— De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de igualdad de oportunidades, y no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 150, de fecha 24 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000150). (Número de expediente C. D. 121/000152).

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

ACTAS Página
9943

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2003 Página
9943

Se aprueban las actas por asentimiento de la Cámara.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Página
9943

De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social Página
9943

El señor Ruiz Rivero, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Sesnilo i Rius defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista. La señora Martín Mendizábal consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesnilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Romero Calero, por el Grupo Socialista, así como la señora Martín Mendizábal, por el Grupo Popular.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 69 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 123 en contra y 3 abstenciones.

Comienza el debate de la enmiendas al articulado.

El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 1 a 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 5 a 10, del Grupo Entesa Catalana

de Progrés. El señor Sesnilo i Rius defiende las enmiendas números 23 a 40 y 42 a 47, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 11 y 13 a 22, del Grupo Socialista. El señor Fernández Sánchez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesnilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Romero Calero, por el Grupo Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 73 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 3 y 4, del mismo grupo parlamentario, por 15 votos a favor, 182 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 5 a 10, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 23, 26, 28 y 33, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 20 votos a favor, 181 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 25, 27 y 45, del mismo grupo parlamentario, por 14 votos a favor, 130 en contra y 59 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 71 votos a favor, 129 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 11 y 13 a 22, del Grupo Socialista, por 70 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones.

Se aprueba una propuesta de modificación, firmada por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el artículo 1, apartado 2 del dictamen por 131 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones.

Se aprueba el resto del dictamen por 132 votos a favor, 15 en contra y 56 abstenciones.

El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

	Página	
De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud	9963	<i>Se rechazan las enmiendas números 9 y 10, del mismo grupo parlamentario, por 1 voto a favor, 135 en contra y 68 abstenciones.</i>
<i>El señor Encinas Casillas presenta el dictamen.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas números 11, 18 y 20, del mismo grupo parlamentario, por 1 voto a favor, 187 en contra y 17 abstenciones.</i>
<i>Se inicia el debate de la propuesta de veto.</i>		<i>Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 130 en contra y 76 abstenciones.</i>
<i>El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor García-Talavera Casañas consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; López Carvajal, por el Grupo Mixto, y García-Talavera Casañas, por el Grupo Popular.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas números 28 y 31, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 130 en contra y 67 abstenciones.</i>
<i>Se rechaza la propuesta de veto número 1, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 135 en contra y 70 abstenciones.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas números 29, 30, 32 y 33, del mismo señor senador, por 5 votos a favor, 130 en contra y 68 abstenciones.</i>
<i>Comienza el debate de las enmiendas al articulado.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas números 39, 40, 43, 48, 52 y 56, del mismo señor senador, por 6 votos a favor, 131 en contra y 69 abstenciones.</i>
<i>El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 27. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 28 a 66. El señor Rodríguez Díaz defiende las enmiendas números 77 a 83, 85, 90 y 92 a 99, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 67 a 76, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 104, 106 a 108, 110, 111, 114, 115 y 121 a 125, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Beguer i Oliveres defiende las enmiendas números 191 a 196, 198, 199, 204 a 206 y 208 a 210, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Socías Puig defiende las enmiendas números 126 a 190, del Grupo Socialista. La señora Simonelli Muñoz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Socías Puig, por el Grupo Socialista, y la señora Font Bonmatí, por el Grupo Popular. El señor Socías Puig y la señora Font Bonmatí intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas números 60 y 61, del mismo señor senador, por 6 votos a favor, 131 en contra y 69 abstenciones.</i>
<i>Se procede a votar.</i>		<i>Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 131 en contra y 75 abstenciones.</i>
<i>Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 19, 25 y 27, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 130 en contra y 71 abstenciones.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas números 81, 82 y 83, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 130 en contra y 66 abstenciones.</i>
		<i>Se rechazan las enmiendas números 78, 80, 85, 94 y 99, del mismo grupo parlamentario, por 19 votos a favor, 128 en contra y 60 abstenciones.</i>
		<i>Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria por 14 votos a favor, 131 en contra y 62 abstenciones.</i>
		<i>Se rechazan las enmiendas números 67 y 68, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 130 en contra y 58 abstenciones.</i>
		<i>Se rechaza la enmienda número 74, del mismo grupo parlamentario, por 19 votos a favor, 187 en contra y 1 abstención.</i>
		<i>Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 16 votos a favor, 130 en contra y 61 abstenciones.</i>
		<i>Se rechazan las enmiendas números 114 y 125, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 61 votos a favor, 128 en contra y 17 abstenciones.</i>

Se rechaza la enmienda número 123, del mismo grupo parlamentario, por 76 votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 115 y 121, del mismo grupo parlamentario, por 61 votos a favor, 128 en contra y 16 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 56 votos a favor, 127 en contra y 21 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 191, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 131 en contra y 58 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 193, del mismo grupo parlamentario, por 13 votos a favor, 130 en contra y 63 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 192, 204 y 208 a 210, del mismo grupo parlamentario, por 14 votos a favor, 130 en contra y 62 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 10 votos a favor, 131 en contra y 66 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 128, del Grupo Socialista, por 67 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 131, del mismo grupo parlamentario, por 65 votos a favor, 129 en contra y 11 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 132, del mismo grupo parlamentario, por 62 votos a favor, 130 en contra y 15 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 135 y 172, del mismo grupo parlamentario, por 72 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 134, 171, 173, 174, 180, 182, 186, 188 y 189, del mismo grupo parlamentario, por 63 votos a favor, 130 en contra y 14 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 141, 142 y 150, del mismo grupo parlamentario, por 57 votos a favor, 134 en contra y 15 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 57 votos a favor, 130 en contra y 20 abstenciones.

Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen, firmada por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueban los artículos 37, apartado 2; 42, apartado 1, y 48, apartado 2 del dictamen por 141 votos a favor, 3 en contra y 63 abstenciones.

Se aprueban los artículos 38, 42, apartado 2; 43 y 49, apartado 1 del dictamen por 141 votos a favor, 7 en contra y 58 abstenciones.

Se aprueba la disposición transitoria sexta, apartado 2, del dictamen por 143 votos a favor, 6 en contra y 58 abstenciones.

Se aprueba la disposición derogatoria, apartado 1, del dictamen por 144 votos a favor y 61 abstenciones.

Se aprueba el resto del dictamen por 144 votos a favor, 2 en contra y 61 abstenciones.

El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de igualdad de oportunidades, y no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 9985

El señor Ruiz Rivero, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de la propuesta de veto.

El señor Sesmiló i Rius defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora San Baldomero Ochoa consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesmiló i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Díaz Sol, por el Grupo Socialista, así como la señora San Baldomero Ochoa, por el Grupo Popular.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 65 votos a favor y 133 en contra.

Se suspende la sesión a las veintidós horas.

(El debate de este proyecto de ley continúa en el «Diario de Sesiones» número 160.)

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

ACTAS:

— LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 28, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2003.

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 28, 29, 30 y 31 de octubre del 2003. ¿Alguna observación? (*Pausa.*) ¿Pueden aprobarse por asentimiento? (*Pausa.*)

Quedan aprobadas por asentimiento.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (S. 621/000147) (C.D. 121/000147).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, senador señor Ruiz Rivero.

El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 21 de octubre, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales solicitó de su presidente que presentara en el Pleno de hoy el dictamen emitido por la referida comisión en relación con el proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. Con ese honor me dirijo a sus señorías para señalarles que la tramitación en el Senado se inició tras la remisión por el Congreso de los Diputados del texto del proyecto de ley el día 20 de septiembre de 2003. Tras distintas solicitudes de prórrogas, el plazo de presentación de enmiendas se cerró con fecha 8 de octubre del presente.

Durante ese período, el registro del Senado dejó constancia de la presentación de dos propuestas de veto, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 63 enmiendas parciales, 6 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 25 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 4 del Grupo

Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 12 del Grupo Parlamentario Socialista y 16 del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, designada en la sesión de la Comisión de Trabajo del día 2 de octubre, se reunió el 13 del mismo, decidiendo aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados con las modificaciones fruto de la incorporación de las enmiendas números 48 a 58 y 60 a 63, del Grupo Parlamentario Popular, y de la transaccional presentada por el mismo grupo parlamentario sobre la base de la enmienda número 59, que, consecuentemente, fue retirada.

En la convocatoria de la comisión del día 21 de octubre, y como consecuencia del debate del texto, y de las enmiendas mantenidas vivas, se aprueba como dictamen el informe de la ponencia modificado por la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como por dos enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, una de ellas sobre la base de la enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Socialista, que en consecuencia fue retirada.

Dictaminado el proyecto, se han presentado 5 votos particulares. Procede ahora la discusión en el Pleno del dictamen sobre el proyecto de ley, que se somete a su consideración.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Se han presentado dos propuestas de veto que se debatirán a continuación.

Para la defensa del veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Sesmiolo.

El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un veto a este proyecto de ley, pero me permitirán que inicie mi intervención con una breve referencia a la jornada de vivida ayer en Cataluña con las elecciones al Parlamento catalán. ¿Por qué voy a hacer esta referencia? Porque es el día en el cual finaliza de una manera definitiva una legislatura, en la que, por lo que hace referencia a Cataluña, el Gobierno se comprometió a mejorar el sistema de financiación y el autogobierno.

Por lo que respecta a la financiación, se logró un acuerdo satisfactorio; supongo que para ninguna de las dos partes fue totalmente satisfactorio, pero eso es lo que hace bueno un acuerdo, que todo el mundo se deja algo en la negociación. Pero nosotros hemos reconocido siempre que fue un paso adelante en una situación de profunda injusticia hacia la financiación autonómica.

El aumento del autogobierno no se pudo ni abordar. Hará ya un par de años que el presidente de la Generalitat insistió sobre esta cuestión. No ha habido respuesta y en mi opinión sí un cierto desprecio o cuando menos una desidia total a la hora de tratar estos temas. Empezó con aquello de las famosas matrículas, a quien alguien llamó chapas o chapitas, y después se invitó a Convergència i

Unió a entrar en el Gobierno para llevar a cabo el programa del Partido Popular. No sé si se era consciente de que toda esta acción política del Gobierno del Estado hería la sensibilidad de los catalanes en general —yo creo sinceramente que era así—, de ahí que si alguna cosa podemos deducir de estas elecciones —y repito que éste es el único comentario que voy a hacer al respecto— es que se ha manifestado de un modo patente un desengaño, por decirlo de alguna manera, una falta de atención en relación con el criterio de los catalanes, y más concretamente con el de *Convergència i Unió* —aunque no quiero arrogarme la representación de todos los catalanes porque sería injusto—. Creo que es evidente que a veces no se tienen en cuenta las propuestas constructivas de lo que podríamos llamar un nacionalismo colaborador y, si me lo permiten, amable. A veces uno se puede encontrar con que sembrando vientos se recogen tempestades.

¿Y por qué traigo esto a colación? Porque está clarísimo que se puede aplicar a este proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. ¿Y qué motivos tiene el Gobierno para hacer estas disposiciones específicas? El Gobierno sabrá, pero también nosotros somos libres de interpretar que esto van dirigidas básicamente a evitar que las comunidades autónomas —en este caso Cataluña— puedan establecer un complemento de pensión a las viudas, un complemento que representa tan sólo unas 4.000 ó 5.000 pesetas, lo que no significa que a partir de este momento las viudas en Cataluña vayan a atar los perros con longanizas, como se dice vulgarmente. Se trata de un complemento de nuestro presupuesto, de lo que dejó de margen el nuevo sistema de financiación que, como he dicho, reconozco que fue un acuerdo positivo con el Gobierno del Partido Popular. Esa cantidad se puede emplear para arreglar unos baches de una determinada carretera o para hacer un túnel o un puente, pero en virtud de nuestra capacidad de autogobierno también podemos decidir destinarla en este caso concreto a las viudas y viudos con pensiones más bajas.

Supongo que el argumento para estar en contra del veto no será que es inconstitucional puesto que hay diversas sentencias que dicen que esto es perfectamente constitucional. El Gobierno recurrió la primera vez a la Junta de Andalucía, después a la Generalitat de Cataluña, y repito que es constitucional, lo que no quiere decir que todo aquello que sea constitucional se tenga que llevar a cabo ya que hay diversas maneras de ver una misma cosa. Pero repito que no es posible en este caso esgrimir que no es constitucional.

Otra razón que puede aducirse es la igualdad y solidaridad para con todas las viudas, y ahí efectivamente, ya se llega a la discusión de si el IPC en Cataluña es más alto o es más bajo, si hay más o menos dificultades para encontrar personal para atender a las viudas, si los alquileres son...

En definitiva, no sé por qué hemos de dar tantas explicaciones. Existe, simplemente, una voluntad política de que unas pensiones que hoy en día rozan la dignidad —no digo que no sean dignas— se puedan complementar. En cuanto a la igualdad, ¿es que hay igualdad en todo el Estado respecto de otras cosas? ¿Es que un señor de Palencia

o de Cáceres tiene el mismo sistema de paro que uno que viva en Ciudad Rodrigo? En el Estado hay diversas zonas geográficas que tienen un tratamiento específico para algunos temas concretos, lo que me parece lógico. La igualdad no es la uniformidad, sino la capacidad de adaptarse a los distintos problemas que puede haber en los territorios. Y en cuanto al autogobierno —estoy ya un poco cansado de repetirlo porque veo que no se me hace caso—, no es una descentralización administrativa sino la capacidad de cada gobierno para decidir. Hay unos parlamentos, que no diputaciones provinciales, donde se elaboran leyes y unos gobiernos que, dentro del más estricto respeto a la Constitución y ejerciendo no su derecho, sino su obligación de gobernar, se preocupan, en este caso, de las viudas y viudos con pensiones más bajas, pero luego el Gobierno del Estado hace una ley «ad hoc» para evitarlo.

Sinceramente, no lo entiendo, o quizá sí pero prefiero hacer como si no, porque nosotros siempre hemos mantenido una posición constructiva y hemos creído que la negociación es lo que debe imperar. Lamentamos que en dos años no hayamos podido negociar nada en relación con la mejora del autogobierno y que la respuesta haya sido, a nuestro juicio, ir aplicando los principios recogidos en la LOAPA sobre la armonización, la coordinación y la uniformidad, pero repito que para mí y nuestro grupo esto es sembrar vientos.

A estas alturas del debate, supongo que no ya no hay oportunidad de rectificar y atender nuestra petición, como supongo que el veto será rechazado, en el turno de defensa de nuestras enmiendas intentaremos dar alguna otra explicación, pero quiero que quede claro que presentamos un veto porque entendemos que la ley vulnera nuestro derecho al autogobierno. Repito que lo que proponemos es perfectamente constitucional, pero parece que no hay voluntad política de aceptar que en cada comunidad autónoma puedan existir diferentes —no mejores— sensibilidades y no permiten que cada uno utilice la parte del presupuesto de que dispone, que tampoco es demasiado, de la forma que considere oportuna ni opte por políticas distintas. Ello no debería suponer ningún problema respecto a lo que es la cohesión general del Estado, porque insisto en que cada zona tiene su problemática, sus servicios sociales, sus precios de alquiler y compra de vivienda, su IPC, etcétera.

Termino diciendo que estoy dispuesto a demostrar que, en cuanto a regímenes de prestaciones sociales, hoy España no es uniforme ni idéntica —y ya saben ustedes a qué me refiero—, y no sólo en un tema sino en varios.

Lamento que hayamos tenido que vernos obligados a presentar el veto, y saben que no es costumbre de nuestro grupo recurrir a este tipo de iniciativa parlamentaria y que siempre hemos preferido el diálogo, si existe capacidad y voluntad de llegar a acuerdos, pero en este caso no lo hemos visto. Como parece que se trata de mantenella y no enmendalla, nosotros mantenemos el veto, esperando el apoyo de los grupos sensibles al autogobierno y a lo que se pactó en la Constitución.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista y para presentar la propuesta de veto número 1, tiene la palabra el senador Romero Calero.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Atravesamos tristes tiempos en los que uno tiene que reafirmarse en lo obvio, pero para que quede constancia en el «Diario de Sesiones» tendré que repetir, una vez más, que los socialistas nos reafirmamos en la defensa de los principios que conforman el sistema público de la Seguridad Social, y lo hacemos sin ninguna reserva; principios, además, que están recogidos de manera expresa en todo nuestro ordenamiento y en el proyecto de ley que esta tarde debatimos. Insisto: principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad que sin ningún género de dudas los socialistas volvemos a reafirmar nuevamente.

El veto que el Grupo Parlamentario Socialista del Senado mantiene a esta ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social no tiene que ver con estos principios, señorías. Este veto tiene que ver con las competencias que las comunidades autónomas tienen para establecer sus propias políticas sociales, competencias que, como ha señalado hace un momento el senador Sesmi, están recogidas expresamente en la Constitución de 1978. No hay que recordar que el artículo 148.20ª de la Constitución establece de forma expresa e inequívoca las competencias de las comunidades autónomas para establecer de manera específica sus propias políticas sociales—. Por tanto, el veto —me interesa mucho resaltarlo— tiene que ver con la capacidad que tienen las comunidades autónomas en el Estado de las Autonomías, que se deriva de la Constitución de 1978, de establecer sus propias políticas sociales.

Hemos planteado un veto en el Senado sin que el Grupo Socialista del Congreso haya presentado una enmienda de totalidad a la ley y un texto alternativo porque hemos hecho todos los esfuerzos posibles —créanme sus señorías— para que se pudiera llegar a un acuerdo que condujera esta posición inicial del Grupo Parlamentario Popular de modificar el artículo 38 de la Ley General de Seguridad Social. Esta ley, a la que se presentaron varias enmiendas pero no fue objeto de una enmienda de totalidad en el Congreso de los Diputados, es objeto de un veto en el Senado, en tanto que Cámara de carácter territorial, porque consideramos que de aprobarse en los términos en que el proyecto de ley está propuesto supondría una agresión al artículo 41 de la propia Constitución Española. No hay que recordar a sus señorías que el artículo 41 de la Constitución, al establecer la obligación del Estado de mantener un régimen público de Seguridad Social, al mismo tiempo, con el mismo rango y al mismo nivel señala también de forma expresa literalmente: «La asistencia y prestaciones complementarias serán libres» —repito, artículo 41 de la Constitución Española.

Por tanto, el pretender restringir las competencias de las comunidades por el subterfugio de extender a los principios a los que antes me he referido las posibilidades de

complemento de determinadas prestaciones de la Seguridad Social supone, en mi opinión, una agresión directa a la Constitución. Para más inri, tal como se ha señalado también anteriormente, la sentencia 239/2002 del Tribunal Constitucional establece también de manera expresa e inequívoca que los posibles complementos a determinadas prestaciones de la Seguridad Social tienen carácter de asistencia social, no es Seguridad Social, señorías, no es Seguridad Social. El propio Tribunal Constitucional, máximo garante de la interpretación de la Carta Magna, establece de manera rotunda, sin ningún género de dudas, que los posibles complementos que las comunidades autónomas puedan establecer en relación con determinadas prestaciones de la Seguridad Social entran en el ámbito de la asistencia social y, por tanto, en el ámbito del 148.20ª de la Constitución de 1978. En consecuencia, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se puede argumentar que estas políticas de algunas comunidades autónomas pueden no ya chocar con la Constitución, ni siquiera rozar la interpretación de la Constitución.

Señorías, en el uso de sus competencias las comunidades autónomas establecen determinadas políticas sociales e identifican los colectivos destinatarios de las mismas en función de riesgos de exclusión social o de volumen de ingresos, y lo hacen, como digo, en el ejercicio del autogobierno que la Constitución Española y los estatutos les otorgan. Una vez identificados dichos colectivos, éstas aplican las políticas sociales que consideran deben aplicar. Las comunidades autónomas tienen un presupuesto que administrar, y son sus electores quienes tienen que sancionar a los gobiernos autonómicos por un más o menos adecuado uso de los presupuestos que se administran en cada una de ellas. Pero en ningún caso puede el Gobierno de la nación restringir las competencias autonómicas a la hora de establecer sus propias políticas sociales.

Podría darse el caso de que hubiera dos personas pertenecientes a distintos colectivos del territorio nacional, una con un nivel de ingresos procedente de una fuente distinta a la Seguridad Social y otra con ese mismo nivel de ingresos, pero procedente de una prestación de la Seguridad Social, para las que, en un caso, el gobierno de la comunidad autónoma de turno pudiera establecer, dentro de su ámbito de política social, complementos a dichos ingresos, en tanto que en el otro, por ser su origen una prestación de la Seguridad Social, no pudiera hacerlo. Y es más, señorías, lo cierto es que ese caso ya se da actualmente en no pocas ocasiones.

Pero les voy a exponer un único ejemplo para que vean ustedes hasta qué punto es una sinrazón lo que plantea el proyecto de ley de modificación del artículo 38 de la Ley General de Seguridad Social. Como ustedes saben, el personal docente puede acceder a un modelo de jubilación anticipada que, como es natural, conlleva necesariamente una merma en la pensión, y todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, desde Andalucía hasta Galicia, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Rioja, tienen establecidas prestaciones complementarias. Al Gobierno esto no le ha parecido una sinrazón, y de hecho las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popu-

lar también lo han implementado. Se puede argumentar que se trata de prestaciones no provenientes del sistema de Seguridad Social, pero lo son de una mutualidad, en este caso de Muface. ¿Qué sucede entonces, señorías, que cuando los ingresos proceden de una determinada fuente los colectivos que los perciben pueden ser discriminados en relación con otros que los perciben de la Seguridad Social aunque sean, como es el caso que nos ocupa, pensiones no contributivas muy pequeñas que cada vez se van quedando más desfasadas?

Lo que ustedes pretenden, señorías de los bancos de la derecha, no es otra cosa que poner puertas al campo. No se pueden limitar las competencias de política social de las comunidades autónomas, ¿o es que quieren que las políticas sociales de las comunidades autónomas se restrinjan a lo que podría ser un ropero de caridad? Las comunidades autónomas tienen que establecer sus propias políticas sociales porque éste es el Estado de las Autonomías que consagra la Constitución Española de 1978. A unos les gustará más y a otros menos, pero, como digo, ésta es la forma de Estado que España adoptó a partir de 1978 y que a todos obliga. Nadie puede ni debe poner restricciones a esto. Por tanto, el hecho de que las comunidades autónomas puedan establecer políticas sociales de forma autónoma no atenta en modo alguno contra los principios de la Seguridad Social que los socialistas —reafirmo, una vez más, porque aunque es obvio parece que es necesario repetirlo—, en ningún caso ponemos en cuestión.

¿Por qué razón una comunidad autónoma puede complementar ingresos de una pensión anticipada de jubilación de un docente y no puede complementar ingresos de una pensión no contributiva? ¿Por qué razón? Es injusto, señorías, y en primer lugar —y por encima de todo—, las normas deben perseguir la justicia.

Además, ustedes pretenden poner puertas al campo porque actualmente, en el ejercicio de sus legítimas competencias, las comunidades autónomas con competencias en materia fiscal, han fijado complementos de esta naturaleza. ¿Cómo califican ustedes la disposición adicional segunda de la Ley 16/2003, de la Comunidad Foral de Navarra —donde, por cierto, no gobierna el Partido Socialista—, que habla expresamente de la deducción en el caso de pensiones de viudedad, a partir de 2004? La Comunidad Foral de Navarra tiene competencias relativas a la normativa fiscal y, por ello, en este precepto se establece que, a partir del día 1 de enero de 2004, se pondrán en marcha determinadas deducciones para las pensiones de viudedad. ¿Acaso no es eso un complemento de las pensiones de viudedad? Naturalmente que sí. No es un complemento universal para todas las viudas o viudos sino solamente para aquellos que presentan declaración de la renta, que podrán efectuar una serie de deducciones en virtud de una normativa aprobada por la Comunidad Foral de Navarra

Señorías, insisto que no estamos hablando de cuestiones relacionadas con los principios de la Seguridad Social sino de política social; son asuntos relativos a la capacidad de las comunidades autónomas para fijar sus prioridades de gasto. Habrá comunidades autónomas que establezcan estas prioridades a la hora de subvencionar los libros de

texto, por ejemplo, pero también habrá comunidades autónomas que establecerán la prioridad de gasto para complementar prestaciones mínimas no contributivas o incluso, como en el caso de la Diputación Foral de Álava, prestaciones contributivas.

En este sentido, se han manifestado de manera inequívoca el Tribunal Constitucional y el Consejo Económico y Social porque, además, con la modificación del artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social que ustedes están proponiendo —y que seguramente aprobará la mayoría del Partido Popular—, ¿qué va a ocurrir con los funcionarios públicos, el personal estatutario o aquellos empleados de empresas u organismos públicos que, en el marco de sus relaciones laborales, tienen establecidos complementos, por ejemplo, de ILT? ¿Qué va a ocurrir ahora con esos complementos? En puridad, si una comunidad autónoma no puede establecer esos complementos porque ustedes los sitúan en el ámbito de los principios recogidos en el artículo 1 del proyecto de ley que nos ocupa, mucho menos lo va a poder hacer una empresa o un organismo público. Dentro de poco vamos a debatir una ley que afecta al personal estatutario, ¿van ustedes a decirles que, a partir de ahora, no pueden negociar complementos de esta naturaleza, en el ámbito de sus relaciones de trabajo? Señorías, esto es un despropósito desde todos los puntos de vista pero, además, tengo que señalar que la política que están ustedes desarrollando propicia una deriva antiautonómica que nos está llevando a una situación de falta de cohesión territorial que —como convendrán conmigo—, es verdaderamente preocupante. Y esto es así en aras de lo que interesa a España y a los españoles, no de lo que interesa a las comunidades autónomas. No se debe a que Andalucía haya adoptado una iniciativa de esta naturaleza, que recurrió el Gobierno en un conflicto positivo de competencias y respecto del que el Tribunal Constitucional dio la razón a la Junta de Andalucía, ni es así porque Cataluña lo haya hecho, porque la Constitución es mucho más que llenarse la boca todo el día hablando de la misma. La Constitución es mucho más que eso. Significa respetar todos y cada uno de los aspectos que emanan de la Carta Magna.

Por eso, porque de ninguna manera pone en peligro los principios de la Seguridad Social, es por lo que los socialistas hemos planteado este veto y por lo que rogamos muy encarecidamente a todos ustedes que reflexionen sobre ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Martínez Mendizábal.

La señora MARTÍNEZ MENDIZÁBAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para manifestar las razones que nos llevan a votar en contra de los vetos presentados a esta ley por el Grupo Socialista y por el Grupo de Convergència i Unió.

Agradezco al Grupo Parlamentario Socialista que haya manifestado —aunque ya las conocíamos— las bases, los

principios donde se asienta nuestro sistema de Seguridad Social. Lo que ocurre es que nosotros entendemos que con esta ley precisamente se defienden estos principios. Y traemos este proyecto de ley a esta Cámara porque es obligación y responsabilidad del Gobierno y del Grupo Popular que sustenta al Gobierno mantener nuestro sistema de Seguridad Social, basado en dichos principios: el principio de universalidad —para todos los españoles—, el principio de unidad —es decir, es único—, el principio de solidaridad entre todos los españoles y el principio de igualdad, lo que supone igualdad de requisitos entre todos los españoles para las prestaciones e igualdad en la cuantía de la prestación. Y esto, señorías, figura en el Pacto de Toledo y esto, señorías, está en el acuerdo social.

El propio acuerdo de 2001 ratifica su compromiso con el mantenimiento del principio de igualdad tanto en prestaciones contributivas como no contributivas. Y esto es lo que hace el Grupo Popular con este proyecto de ley. Y estarán conmigo, señorías, en que las prestaciones, bien contributivas, bien no contributivas, son prestaciones del sistema, por lo que siempre debemos tener en cuenta que el sistema es único e igual para todos los españoles.

Cuando empecé a preparar mi intervención para el anterior Pleno, miré qué había pasado en la tramitación referente a las pensiones no contributivas y vi cómo el ministro Martínez Noval defendía estas prestaciones integradas en el sistema y con las mismas características propias del sistema, y veía cómo el señor Cercas, diputado en aquel entonces del Grupo Socialista, hablaba de solidaridad nacional, y cómo el señor Chaves, en aquel entonces, enero del año 1990, ministro de Trabajo, defendía en el Congreso de los Diputados la universalización en la Seguridad Social del derecho a una modalidad no contributiva de pensiones —se refería a las PNC.

Sin embargo, tengo que decir que posteriormente ha debido cambiar de opinión, ya que el letrado de la Junta de Andalucía, siendo ya representante del señor Chaves, al defender la postura expresada en el Decreto de la Junta de Andalucía en el año 1999, dice que la legislación del Estado en materia de Seguridad Social supone un desarrollo inadecuado en cuanto que ha incluido en su seno prestaciones no contributivas, con absoluto desconocimiento de las competencias autonómicas en materia de Seguridad Social. Y prosigue el letrado de la Junta de Andalucía, en aquel momento representante del señor Chaves, presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley 26/1990 altera el concepto existente hasta ahora de Seguridad Social, desbordando el ámbito del artículo 149.1 y menoscabando el correspondiente de asistencia social competencia de las comunidades autónomas.

Quiero decir con esto, señorías, que una cosa que tenía el señor Chaves bien clara siendo ministro parece que cuando es presidente de la Junta de Andalucía ya no lo tiene tan claro, y no entiendo con quiénes está el Grupo Parlamentario Socialista, si está con la postura del letrado de la Junta de Andalucía o con la postura del señor Chaves cuando era ministro. Mi grupo, señoría, opinaba y opina lo mismo antes que ahora. Las pensiones no contributivas son Seguridad Social, son competencia exclusiva

del Estado y han de estar basadas en esos principios de unidad, igualdad, universalidad y solidaridad nacional de los que hablaba el señor Cercas. Eso sí, esos principios tienen unas consecuencias; tampoco se puede alegar los principios y luego no aplicarlos. Para eso hay que ser fuerte y firme, señoría.

En este punto tengo que reconocer que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* siempre ha esgrimido aspectos competenciales. Lo hizo en la tramitación de las PNC —incluso creía que era inconstitucional, aunque es una ley que lleva 13 años de vigencia perfectamente constitucional— y hoy los sigue esgrimiendo. Reconozco su coherencia.

Se dice en el veto —no lo ha dicho hoy aquí— que este proyecto de ley es una extralimitación del Ejecutivo. Tengo que decirle, señoría, que no creo que eso sea en serio, porque en ningún sitio la Constitución Española, ni el Pacto de Toledo, ni los acuerdos sociales dicen que tenga que haber diferentes tipos de cuantías de pensiones en función de diferentes territorios. Podríamos llegar a tener 8.017 sistemas de pensiones, cada pueblo podría suplementar cada una de las pensiones, porque no habría un sistema, sino 8.017 sistemas de pensiones, y lo que dice la Constitución Española es que hay un régimen público de Seguridad Social, no 8.017 regímenes públicos de Seguridad Social.

El senador Romero habla de los complementos privados, pero no tiene nada que ver. La ley habla de prestaciones públicas, no de complementos fruto de planes de pensiones, etcétera, que de forma privada e individual cada ciudadano realice. Habla, repito, de un régimen público de Seguridad Social, sin perjuicio de la cobertura de otras situaciones de necesidad. Eso no es cohesionar, por mucho que lo digan, porque bajo la invocación de un título de asistencia social lo que se hace es romper en un determinado territorio la unidad y la igualdad protectora del sistema, consecuencia de establecer diferencias de trato entre beneficiarios del sistema en función del territorio donde vivan. Modificar la cuantía por la vía de la suplementación de las prestaciones —porque es darle más dinero—, entra dentro de lo esencial, dentro de lo básico. En una prestación económica hay dos partes esenciales: los requisitos o las condiciones y la cuantía. Cualquiera de las dos cosas que se modifique significa adentrarse en el sistema de Seguridad Social. El año 1999 los sindicatos, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, y también representantes de la Administración manifiestan que por estar estas prestaciones incardinadas dentro del sistema de Seguridad Social la determinación de su cuantía corresponde en exclusiva a las Cortes Generales con la finalidad de preservar la unidad del sistema, el mantenimiento de un régimen público y unitario para todos los ciudadanos y que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social. Por tanto, con esta ley se da cobertura simplemente a esa demanda de solidaridad y de igualdad.

En ambos vetos se hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional para el caso de la Junta de Andalucía. Pero, señorías, tendrán que estar conmigo en que

leen dicha sentencia por donde quieren, porque junto a la admisión en ese caso concreto y basado, entre otras razones, en el carácter extraordinario de la ayuda a la Junta de Andalucía en un momento determinado, también dice que el Estado podrá adoptar las medidas que resulten convenientes para evitar los posibles efectos disfuncionales que puedan producirse como consecuencia de la acción normativa de las comunidades autónomas. ¿Y a qué medidas creen ustedes que se refiere la sentencia? ¿Les parece inadecuado que cuando hablamos del sistema de la Seguridad Social y de prestaciones económicas, se traiga a esta Cámara un proyecto de ley sobre una competencia del Estado que es la Seguridad Social? Se trata de prestaciones de Seguridad Social y, por lo tanto, su cuantía es competencia del Estado.

El señor Cercas, que la verdad es que me ha ayudado mucho en esta intervención, decía que el Estado tiene que regular la Seguridad Social, y es claro que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de asistencia social. Y proseguía el diputado socialista: «No se vacían de contenido las competencias asumidas por las comunidades autónomas en función del artículo 148 en materia de asistencia social, salvo que por rizar el rizo nos empeñemos en mantener unas definiciones confusas sobre lo que es asistencia social». Señorías, si antes era competencia exclusiva del Estado, también lo es ahora. Si las pensiones no contributivas son competencia del Estado, éste tiene competencia para determinar sus requisitos y su cuantía, porque si una cuestión es importante en una prestación económica es el cuántum de esta prestación.

Pero es que, además, sus argumentos son bastantes similares, por lo menos, en su presentación. Se dice que es antiautonómico. La sentencia en la que se han basado los dos grupos parlamentarios recoge de forma expresa la posibilidad de adoptar medidas cuando se produzcan disfuncionalidades. Y una disfuncionalidad, insisto, es una diferente cuantía en función del territorio cuando hablamos de un régimen único y público de Seguridad Social. El propio Consejo General del Poder Judicial dice que la cuantía de las pensiones es competencia exclusiva del Estado y entra en el ámbito de lo básico, de lo esencial. Mi grupo parlamentario cree en ello y lo defiende, con todo respeto, pero también, señoría, con toda firmeza, porque creemos que el respeto de esos principios es fundamental para nuestro sistema.

También han mencionado las prioridades de gasto dentro de la comunidad autónoma, y es cierto, pero dentro de sus competencias. No se trata de que por poner dinero cada comunidad pueda hacer lo que quiera; puede hacer lo que quiera con el dinero de la comunidad, pero dentro de sus competencias.

Después se habla de lealtad constitucional y creo que hay refrescar un poquito la memoria. En el año 1990 se aprueban las pensiones no contributivas y quedan configuradas dentro de la Seguridad Social. Después hay varias sentencias del Tribunal Constitucional, pero yo he recogido dos que me parecen las más claras, la de 1986 y la de 1998, del mismo Tribunal Constitucional que ahora ustedes aducen. Todas las sentencias insisten en declarar que el

título contemplado en el artículo 148.1 de la Constitución abarca una técnica de protección fuera del sistema de Seguridad Social. Y existiendo esa ley y esa sentencia, el señor Chaves en Andalucía publica un decreto que, por cierto, modifica en el ínterin para evitar el efecto suspensivo de la admisión del recurso, y todo eso sin dialogar. Yo no creo que eso sea lealtad, señorías. Pero, una vez más, la semántica nos envuelve en el engaño, porque esas ayudas no complementan el sistema, sino que suplementan dichas pensiones, porque la única condición para recibir las es que los destinatarios sean beneficiarios bien de PNC, bien de viudedad; es decir, no se establece un mínimo de pobreza, sino que el destinatario sea o bien receptor de PNC o bien de pensión de viudedad, para cubrir además la misma situación de necesidad que cubre la prestación de la Seguridad Social. Eso, señorías, no es lealtad.

Se habla del informe del CES, que además está conforme con los principios que informan esta ley, apoya su fortalecimiento y ve en la norma el ejercicio de las facultades del Estado. Es verdad que expresa ciertas dudas, pero no sobre estos aspectos, sino en cuanto a si con esta ley se van a ver reforzados estos principios.

Por otra parte se habla de cohesión la sociedad; ya le he dicho, señoría, que no creo que se cohesione la sociedad cuando en el mismo Cataluña existen diferencias entre Barcelona y Tarragona; existen diferencias entre Toledo y Cuenca, entre Granada y Almería; es decir, para la misma pensión, generada con los mismos requisitos, existen diferentes cuantías.

Se habla de un vaciamiento de competencias. Yo creo que con un poco más de esfuerzo y con un poco más de imaginación se pueden atender las situaciones de necesidad sin modificar las cuantías. Por ejemplo se me ocurre pagarle a esa viuda el recibo de la luz, o modificar sus impuestos; pero, establezca usted unos mínimos de pobreza, y no me hable sólo de viudas o de beneficiarios de pensiones no contributivas. Y vamos avanzando, porque primero fueron las PNC y después las pensiones de viudedad, pero podríamos seguir con pensiones de jubilación, por qué no, e incluso podríamos llegar a que un beneficiario con quince años de cotización por vivir en un territorio cobre más que otro que tenga más años cotizados —me estoy refiriendo a idéntica cuantía evidentemente—. ¿Eso no es una disfuncionalidad del sistema? ¿No se altera el sistema? ¿No se altera el sistema, existiendo un equilibrio entre pensiones no contributivas y contributivas, si usted incrementa la pensión no contributiva porque desincentiva la cotización hacia la pensión contributiva? ¿Eso no es disfuncionalidad? ¿Eso no es desequilibrar el sistema?

Por último, me hablan del carácter social. Yo no dudo de ello, y mucho menos de su buena voluntad, sólo les voy a recordar unos datos: Andalucía, en diciembre de 1998, crea una ayuda extraordinaria de 9.325 pesetas; pago único para el año 1999. En el año 2000 hay elecciones. Durante los años 2000, 2001 y 2002 ya no parece que haya situación de necesidad. En diciembre del año 2002 se crea una ayuda extraordinaria, como pago único para el año 2003 de 73,78 euros. En el año 2004 hay elecciones. Señoría, no creo que eso sea precisamente algo pensado para acción

social. Cataluña, en septiembre de 1999 crea el pago de una cantidad a tanto alzado para las viudas; en otoño de 1999 hay elecciones a la comunidad autónoma. En los años 2000, 2001 y 2002 no hay ayudas; parece ser que ya no hay necesidad; en abril de 2003 se crea de nuevo la ayuda —que por cierto ha sido en septiembre cuando yo la he visto publicada en los periódicos, pero está creada desde abril— y sólo para las viudas, cuando hay pensionistas por jubilación que perciben la misma cuantía que la pensión mínima de viudedad, es decir, todos aquellos jubilados sin cónyuge; para ellos no hay ayuda, sólo la hay para las viudas, y con el carácter de consolidable, apartándose así totalmente de la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que una de las razones por las que lo admitía era precisamente por su carácter extraordinario. Si lo pagamos todo el tiempo, tampoco es extraordinario. Además del carácter consolidable, a pesar de la sentencia, da un paso al frente y eso sí, prevé una pensión para el año 2004 y una para el año 2005. No tengo que recordar que ayer fue día de elecciones en la Comunidad Autónoma Catalana. Porque, señoría, con todo respeto, tengo que llegar a la conclusión de que esta acción social no es fruto del ejercicio de una responsabilidad, sino de concebirla como una opción más o menos generosa de las comunidades autónomas.

Señorías, por todas estas razones y porque este proyecto de ley da cobertura real, no de palabra, sino real —con firmeza, es verdad, porque defendemos lo que creemos— a un sistema de Seguridad Social basado en esos principios de unidad, de igualdad y de solidaridad, y porque lo que a nosotros de verdad nos interesa es que exista una mayor coordinación entre el sistema de Seguridad Social y otros sistemas, planes o programas asistenciales de otras administraciones al objeto de cubrir el mayor número de situaciones de necesidad de todos los ciudadanos, por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de los vetos.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Denegaciones.*) Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (*Denegaciones.*) Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Denegaciones.*) Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? Tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.

Por razones que no viene al caso detallar, este grupo no presentó veto en su día, pero estaba en su ánimo, y estará en su posicionamiento político, dialéctico y en su voto apoyar total y plenamente y sin ninguna reserva los vetos que han presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, pues comparte todos los argumentos que en

ellos estaban contenidos y los que nos han ido desgranando ambos oradores, el senador Sesmielo y el senador Romero. Por lo tanto, no voy a repetir los argumentos que ellos han utilizado. Los hago míos. Podría añadir algún ejemplo más, pero creo que tanto el señor Sesmielo como el señor Romero han puesto suficientes ejemplos para rebatir el argumento del que no se ha apartado ni un milímetro en toda su exposición la senadora Martín Mendizábal, esto es, igualdad es igual a uniformidad. No es éste el tema, señora senadora. La igualdad puede y debe estar en asegurar un mínimo, que es el que se considera constitucionalmente igual, y valga la redundancia, para todos los españoles, pero a partir de este acuerdo constitucional y legal puede haber, en el uso de la arquitectura constitucional de la que se dotó España a partir del año 1978, diversas formas de complementación, suplementación, etcétera. Usted misma ha facilitado algún ejemplo, que no voy a repetir porque ya lo ha dicho usted. Ha dicho: Podrían ustedes haber ido por otro tipo de prestaciones en especie. Por supuesto que sí, y también las hay, señora Martín Mendizábal. Y estas prestaciones originales de las que usted hablaba se dan en función de la soberanía política, limitada pero soberanía política, que tienen las comunidades autónomas, y también la pueden y la deben tener para complementar con mejor o peor fortuna, con más o menos interés ligado a posibles procesos electorales por parte de sus gobiernos —y ahí puedo compartir parte de sus argumentos—, las pensiones. Porque, en definitiva, son gobiernos con suficiente capacidad normativa y política para producir estos complementos sin poner en duda —insisto— este nivel de igualdad, unicidad y solidaridad —y como el señor Romero yo también me pongo la venda antes de la herida y le ruego que no vaya por ahí— que nosotros también aceptamos total y plenamente y sin ninguna reserva para el sistema único público —que así lo queremos— de Seguridad Social. Pero, como dice el Consejo Económico y Social, como dice el Informe del Consejo General del Poder Judicial y, a mayor abundamiento, uno de los votos particulares que lo acompañan, esto no empece que lo que de verdad están haciendo ustedes sea delimitar competencias constitucionales y estatutarias por vía de una ley ordinaria y lo están perpetrando —si se me permite la palabra— en el Senado, contraponiendo el Senado a las comunidades autónomas. Ustedes, en el supuesto ejercicio legítimo del Gobierno leída la sentencia, al tomar medidas, están leyéndole la cartilla a la Constitución y a los estatutos de autonomía que, les recuerdo, en un caso es la norma máxima de convivencia de todos los españoles y en el otro leyes orgánicas. Y estamos en una ley ordinaria, señora, Martín Mendizábal, y usted argumenta todo en nombre de igualdad igual a uniformidad. Por cierto, ni el Ejército tiene el mismo uniforme: Marina, Aire y Tierra llevan uniformes distintos. Fíjese, señoría, hasta qué punto retuerce usted los argumentos al equiparar igualdad-uniformidad. Nadie han negado la uniformidad, ni los grupos que ha presentado los vetos, nosotros tampoco, pero igualdad no es uniformidad.

Para que se vea hasta qué punto ustedes siempre aplican dos varas de medir y hacen legislación no universal, no

constitucional, sino sectaria y partidaria le haré dos recordatorios. Por ejemplo, primero, la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, supresión y no posibilidad legislativa de las comunidades autónomas, que así la tienen, de modular las tarifas, los descuentos, las bonificaciones. Ustedes han prometido —y dicen que van a hacer y no sé si en algún caso ya lo han hecho— que en algunas comunidades no se va a pagar el impuesto de sucesiones y en otras sí. ¿Existe mayor desigualdad que ésta en algo en el que el heredero no ha tenido ningún mérito por nacer hijo de las señoras Koplovich o de una persona sin ningún ingreso reconocible? El PP es un partido moderno, es un partido progresista que permite que en un mismo Estado, España, se pueda pagar el impuesto de sucesiones en una comunidad sí y en otra no. ¡Vaya igualdad y vaya uniformidad, senadora Martín Mendizábal! Me gustaría que me contestase usted cómo entiende esta igualdad y esta uniformidad en el tema del impuesto de sucesiones, porque ustedes se lo llevan todo por delante y lo hacen no para que no pague sucesiones la herencia de un piso en una familia modesta o pobre, sino que las grandes fortunas españolas tampoco pagan ni cinco según su modificación del impuesto de sucesiones en determinadas comunidades autónomas. ¿Esto es igualdad? ¿Esto es uniformidad?

Segundo, no ha contestado. El senador Romero se lo ha dicho y yo se lo dije al ministro Zaplana. El ministro Zaplana se comprometió. Cuando llegue el momento lo veremos nuevamente. ¿Qué harán ustedes con respecto a la Comunidad Foral de Navarra que tiene ya una ley de complemento fiscal a las pensiones de jubilación y viudedad? Están sus amigos, está la UPN. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿En este caso también son uniformes, son iguales? Usted retuerce los argumentos y nos quiere confundir.

Termino, señor presidente, recordando la sentencia del Tribunal Constitucional, tantas veces citada, la 239/2002, lo que dice el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y lo que dice el dictamen del Consejo Económico y Social, pues todos vienen a decir lo mismo: En un tema tan importante de delimitación competencial estatutaria y constitucional debía haberse andado por el camino del consenso, del pacto y del debate. Ustedes, ajenos a esto, impasibles, legislan en su única línea y en su única dirección: uniformidad, uniformidad y uniformidad. Pues bueno, ahí tienen los resultados.

Con esto acabo, señor presidente. El senador Sesmilo les hacía una lectura del resultado electoral de Cataluña que, como todos sabemos, fue ayer, y yo les voy a hacer otra. Él hablaba de nacionalismo cooperador y amable y yo les voy a hablar de catalanismo y progresismo cooperador, amable y cohesionador que ha obtenido más votos que el otro, 74. Ésta es la respuesta a su rígido uniformismo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sesmilo.

El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.

He de agradecer a la senadora Martín Mendizábal lo bien que ha preparado la intervención porque nos ha dado ideas. Hablaba de que aunque España se diferencia por comunidades autónomas, y está constituida por nacionalidades y regiones, no deja de ser una unidad territorial constitucional. Decía: En cada pueblo. Pues sí, señoría, en cada pueblo. En los «pueblitos», el ayuntamiento sabe lo que le pasa a la viuda y le pondrá el nombre que quiera, y si es una corporación sensible, hará lo que le convenga. Esto es el principio de subsidiariedad. Cuando se llega al ámbito de comunidad autónoma hay que hacerlo de otra manera. Sé que ella no estaba de acuerdo en que el destinatario sea el que cobra la pensión de no sé qué. Nos ha dado ideas, gracias, miraremos de beneficiar a personas que tengan ingresos mensuales inferiores. Es cierto que puede haber alguna viuda que cobre el alquiler de tres pisos y el de un apartamento en la playa y no hayamos caído en ello. Todo lo que sean ideas constructivas, sí, pero no nos combata el argumento con lo de la unidad, porque la unidad básica es el mínimo que se garantiza, y si no puede haber diferente sensibilidad social según los presupuestos en las diversas comunidades autónomas, según nuestro criterio, no hay autogobierno.

Se ha comentado que está rota la igualdad de protección del sistema en general. He hablado de las prestaciones de paro. Sabe usted que a veces en momentos especiales los pescadores de una cierta zona han tenido unas bonificaciones en la Seguridad Social que no han tenido los de otra zona. Si es una acción puntual usted la critica porque dice que se acercan las elecciones; si, como es nuestro caso, es constante, rompemos la unidad del sistema. Por favor, tengan un poco más de sensibilidad porque, repito, nuestra lectura de la sentencia sobre la Junta de Andalucía nos permite hacer esto, y como tenemos la voluntad política de hacerlo, si seguimos en el Gobierno ya buscaremos el nombre o la fórmula, pero trataremos de que nuestra colectividad demuestre su solidaridad hacia las personas mayores con ingresos que estén rozando lo que puede ser la dignidad, con acciones concretas y positivas.

Déjeme acabar. Igual que le he agradecido el tono y le he dicho que usted se prepara bien el discurso, déjeme recriminarle algo que me ha sabido mal: que relacione cuándo se aprueban las cosas con las elecciones. ¿Estamos en un Parlamento democrático o no? El que gobierna sufre un desgaste. Yo siempre pongo el ejemplo del transporte público. Si hay déficit se puede aumentar el billete, lo que es fatal para los usuarios; si no se aumentan los billetes y se aumentan los impuestos, es fatal para todos; si se congelan los salarios de los funcionarios del transporte público, malo también. Cuando uno toma una decisión gubernativa generalmente beneficia a unos y salen perjudicados otros. ¿Cuál es la solución? Un Gobierno tiene sus herramientas para irlo compensando. Al menos en lo que hace referencia a Convergència i Unió le agradecería que no repitiera estos argumentos. En caso contrario, le puedo decir, aunque no me gusta hacerlo, que he oído que el Gobierno va a pagar las indemnizaciones por el «Prestige» antes del mes de marzo. ¿Cuándo van a ser las elecciones en España?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Romero.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Martín Mendizábal, usted nos tiene acostumbrados a intervenciones ponderadas. En este caso permítame que le diga que su intervención y sus argumentos me han defraudado profundamente. Parece como si usted hubiera preparado su intervención, independientemente de lo que nosotros hemos dicho.

Por ejemplo, primera cuestión, el Grupo Parlamentario Socialista considera que las pensiones no contributivas son Seguridad Social. Eso está fuera de toda duda. Seguridad Social son pensiones contributivas y no contributivas. Por tanto, toda esa argumentación que usted me ha hecho sobre algunos ministros socialistas y su consideración sobre las pensiones no contributivas se la podía haber ahorrado. Nosotros consideramos que las pensiones no contributivas efectivamente son Seguridad Social.

En segundo lugar, usted ha hecho una afirmación con la que no puedo estar de acuerdo. Usted ha dicho que el PP tiene la responsabilidad con el sistema. Pues no es así; todos tenemos la responsabilidad con el sistema, señoría, la tenemos todos. Y no quiero recordarle cuáles son las responsabilidades con el sistema que viene manteniendo el Partido Socialista a lo largo de toda su historia, que por cierto no empieza ni ayer ni anteayer ni tampoco en el año 1996; no quiero recordarle desde cuándo tenemos los socialistas un compromiso responsable con la Seguridad Social en España. Es decir, no es responsabilidad sólo del Partido Popular sino de todos. Por tanto, pretender patrimonializar el sistema desde un punto de vista partidista es absolutamente incorrecto.

Senadora Martín Mendizábal, en cuanto a las referencias que usted ha hecho a las posiciones del presidente Chaves cuando era ministro, tengo que decirle que me parecen, sinceramente, una falta de honestidad política. El presidente Chaves no está aquí. Hay un Parlamento en Andalucía, en donde tienen ustedes una cualificada representación, y por eso mismo ustedes pueden interpelar al presidente Chaves sobre sus posiciones en materia de Seguridad Social. Pero yo no puedo hablar aquí por boca del presidente Chaves. No saque usted de contexto determinadas afirmaciones del ministro Chaves leyendo entre líneas y poniéndolas ahora en boca del presidente Chaves. Por otra parte, naturalmente suscribo las afirmaciones de Alejandro Cercas en relación con los temas de la Seguridad Social. Usted y yo, que somos estudiosos de esta cuestión, sabemos la autoridad que Alejandro Cercas tiene en materia de Seguridad Social, autoridad que no he cuestionado nunca y que hoy también reconozco.

Personalmente me ha tachado su señoría cuando menos de ignorante, por utilizar una palabra suave. Dice usted que el artículo 41 de la Constitución se refiere a que los complementos privados serán libres. ¡Eso es porque usted lo dice, señoría! El artículo 41 de la Constitución dice literalmente lo siguiente: «La asistencia y prestaciones com-

plementarias serán libres.» No dice que la asistencia y prestaciones complementarias privadas serán libres. No lo dice. ¿De dónde ha sacado usted que el artículo 41 de la Constitución se refiere a los fondos privados de pensiones, como su señoría ha afirmado? En ningún caso es así. Los constituyentes no se refirieron aquí exclusivamente y de modo excluyente a los fondos privados de pensiones; se refirieron a los complementos que pudieran establecerse en relación con el sistema.

A lo largo de toda su intervención, señoría, no ha podido abandonar un cierto aire de querer sustituir justicia por caridad. Incluso ha llegado a decirnos: no les paguen ustedes complementos, páguenles ustedes el recibo de la luz. ¿Y por qué no les compramos también la leche en polvo, que usted no habrá conocido porque es joven pero que yo sí conocí? ¿Es que quiere usted que volvamos a la leche en polvo? Pues no, señoría. (*Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!*) Vamos a seguir haciendo complementos de política social. Y la guinda ha sido ese pretendido electoralismo con el que su señoría ha querido descalificar las políticas sociales de la Junta de Andalucía. Ha dicho usted: Es que lo hicieron en tal fecha, luego dejaron de hacerlo durante dos o tres años y ahora vuelven a hacerlo otra vez porque hay elecciones. Señoría, no maneje usted estos argumentos de modo torticero. Usted conoce igual que yo el artículo 161 de la Constitución y sabe qué efectos produce un recurso del Gobierno, un conflicto positivo de competencias sobre una determinada actuación de una comunidad autónoma. Ahora, una vez producida la sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía ha vuelto a recoger en sus presupuestos las prestaciones, de acuerdo con la sentencia de dicho tribunal.

A mayor abundamiento, dice usted que eso es electoralismo y lo deslegitima usted por esa causa. ¿Y no es electoralismo la norma de la Comunidad Foral de Navarra que modifica el artículo 16 de la norma foral 35/1988, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta, y que establece unas compensaciones fiscales para los que han accedido a prejubilaciones? No las establecen mientras están percibiendo las prejubilaciones, sino para cuando tienen 65 años y acceden a la jubilación. Ustedes dicen que dos veces y media el salario mínimo interprofesional se considera renta irregular —está aquí puesto— y el 70 por ciento está exento. ¿Eso no es electoralismo? Esta norma va a entrar en vigor en el 2003. Ustedes van a tener elecciones generales el año que viene. ¿Y no es electoralismo la norma de la Comunidad Foral de Navarra que establece bonificaciones fiscales, algún tipo de compensaciones fiscales, para las viudas que hacen declaración de la renta? ¿Eso no es electoralismo porque lo hacen ustedes? ¡Hombre, por Dios!

Señoría, insisto, esto es un despropósito. Es un paso atrás. Nosotros estamos como el primer día. No queremos dar ni un paso atrás en el sistema de Seguridad Social y nunca nos verán ustedes votar ni en el Senado ni en el Congreso de los Diputados ninguna disposición de ninguna naturaleza que ponga en cuestión principios como el de la caja única o de universalidad, principios que conforman el

sistema público de la Seguridad Social, de los que los socialistas no somos ni más ni menos defensores, pero por lo menos lo somos igual que ustedes.

Estamos aquí dando un paso atrás en el Estado de las Autonomías. Si aprueban ustedes esto en los términos en los que lo han presentado no van a poder evitar que las comunidades autónomas que así lo estimen recurran al Tribunal Constitucional una vez más, debido a esta restricción que ustedes les imponen. Nuestro veto no es un atentado contra la Constitución, no profundiza en la desigualdad de los españoles y, por el contrario, avanza en la construcción efectiva del Estado de las Autonomías. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista mantiene el veto a la ley y votará a favor del mismo y también al del Grupo de Convergència i Unió. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Martín Mendizábal.

La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos sus intervenciones. Lamento haber molestado, sí es que lo he hecho, a alguien, pero es que cuando uno cree en una cosa la defiende con firmeza y con rectitud. Lamento, repito, si a alguien le ha molestado.

Senador Espasa, quiero decirle que ésta es una ley ordinaria que modifica una ley ordinaria y no hay que hablar ni de Constitución ni de leyes orgánicas. Es una ley ordinaria que modifica una ley ordinaria de la Seguridad Social del año 1994. Usted, por otra parte, confunde el sistema y tergiversa los términos porque eso no tiene nada que ver con los impuestos que sean competencia autonómica. El Grupo Parlamentario Popular lo ha dicho y lo que promete lo hace, y no tenemos la culpa de que comunidades autónomas gestionadas por el Partido Socialista no puedan hacerlo, no sepan o gestionen mal. Si optan por otra política, pues que opten, pero no es culpa nuestra. En cualquier caso, ya sabemos que según el senador Espasa no lo van a hacer parece ser porque beneficiarían a las grandes fortunas, según la explicación que nos ha dado. En definitiva, señoría, insisto, y a lo mejor soy especialmente tozuda, que lo soy, en que se lean al señor Cercas detenidamente porque nos dará a todos mucha luz.

Senador Sesmilo, sí creo que la unidad del sistema es importante, la igualdad es importante, y no puede haber en vez de un sistema ocho mil sistemas de pensiones. Otra cosa es que cada comunidad autónoma establezca dentro de su política social —se lo repito— umbrales mínimos de pobreza en el sentido de que nadie perciba menos de una determinada cantidad, pero no que se suplementen las pensiones por la vía de incrementar su cuantía.

Le he dado esos datos porque me parecen importantes, no con otra intención, pero es que, de todo el colectivo de pensionistas de Cataluña con pensiones mínimas, a excepción del de los huérfanos que es aún menor, han elegido al colectivo más pequeño: el de las viudas, que suponen 100.000 pensiones de viudedad. Señoría, creo que cada uno puede escoger lo que quiera pero comprenda que me

extrañe que haya sido el colectivo más pequeño, máxime cuando su límite de ingresos está por encima del mínimo que perciben otros.

Por otro lado, efectivamente, las recompensas como consecuencia de la desgracia del «Prestige» se percibirán antes de marzo por dos razones muy sencillas: porque el Gobierno del Partido Popular cumple lo que dice, y eso lo dijo hace un año, y porque no va a dejar pasar los once años que transcurrieron cuando sucedió lo del «Mar Egeo». Repito que percibirán la recompensa contemplada en un decreto de hace un año, justo cuando se produjo la desgracia, y no la de un decreto de febrero de 2004.

Por último, al Grupo Parlamentario Socialista he de decirle que yo hablo en mi nombre. El sistema de la Seguridad Social es de todos, evidentemente, pero yo no puedo arrogarme hablar en nombre de otros grupos; lo hago en el mío y en el de mi grupo, de ahí que haya hecho referencia a la responsabilidad de mi grupo, al que he representado al subir a esa tribuna.

He nombrado al señor Chaves porque fue el primero —por cierto, accedió a la Junta de Andalucía en 1990 y no se acordó hasta el año 1999— que tramitó y aprobó un decreto para suplementar las pensiones, dando lugar a la primera sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido. Por eso, me he referido al señor Chaves.

Por otro lado, el otro día una persona me comentó que había leído en el periódico que unas señoras de la limpieza habían ido a limpiar porque lo financiaba la Junta de Andalucía —no sé los requisitos, sólo le estoy dando un dato— y cuando llegaron les dijeron que de eso nada, por lo que le sugiero que mejore su política social al menos en los ámbitos que le corresponden.

Usted habla del artículo 41, pero esta ley se refiere a cualquier prestación de carácter público y las que no son públicas son las complementarias, que son individuales. Repito que esta ley se refiere a cualquier prestación de carácter público.

En definitiva, señoría, me parece preocupante la postura del Grupo Parlamentario Socialista, que apuesta por algo y, luego, no lo defiende con firmeza y fortaleza. De verdad, señoría, prefiero el proyecto del señor Bono, tal y como fue publicado en febrero de 2003 en la revista «Tribuna»: «Bono y Zaplana defienden la igualdad de las pensiones en toda España.» Y en el diario «ABC»: «José Bono aplaudió públicamente la medida del Gobierno de igualar las pensiones no contributivas en toda España.»

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamamos a votación. (*Pausa.*)

Señorías, sometemos a votación la propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 69; en contra, 123; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al mismo texto legislativo.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 66; en contra, 123; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a continuación a debate las enmiendas a este texto legislativo del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Aurrekoetxea.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor presidente.

En línea con lo que siempre hemos mantenido y visto que últimamente en casi todos los debates es recurrente y estamos siempre advirtiendo de la falta de sensibilidad que se está teniendo en materia de Seguridad Social en el sentido de ir hacia un desarrollo descentralizado de la protección social, tenemos presentadas a este proyecto cuatro enmiendas: dos de ellas referidas precisamente a lo que nosotros creemos que es el impedimento de la existencia de políticas diferenciadas por parte de las comunidades autónomas —que debiera ser lo que entendemos por un régimen descentralizado de protección social— y dos enmiendas que irían en coherencia con el desarrollo de las transferencias en materia de servicios, como es el caso del patrimonio de la Seguridad Social.

Una de nuestras enmiendas se refiere al preámbulo del proyecto de disposiciones específicas. Entendemos que sobre la base de lo que se plantea como la competencia exclusiva del Estado se intenta evitar estas políticas diferenciadas y descentralizadas; el Estado pretende evitar que puedan establecerse prestaciones de carácter complementario a las del sistema de la Seguridad Social, dando además así una clara réplica a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la constitucionalidad de las ayudas complementarias a las pensiones no contributivas establecidas por la Junta de Andalucía. Lo hemos argumentado, incluso han sido otros órganos nada sospechosos los que también han puesto sus salvedades a esta cuestión y, por lo tanto, antes de lo que seguramente puede ser una cascada de recursos al Tribunal Constitucional, sería conveniente suprimir el planteamiento que se hace en este proyecto.

Consideramos que hay razones de oportunidad, pues creemos que no es el momento ni la forma adecuada, habiéndose soslayado un debate profundo y abierto que llevamos demandando se mantenga en cada uno de los proyectos de ley que se presentan sobre esta materia, como también las hay de legalidad, pues entendemos que ello constituye una clara invasión de las competencias de las comunidades autónomas en materia de asistencia social, motivo por el que aconsejamos la supresión de este párrafo del preámbulo, así como del artículo en el que se fundamenta.

En cuanto al patrimonio de la Seguridad Social, consideramos que en principio se atenta contra el acuerdo de

transferencias al trasladar a un texto normativo una regulación que claramente se estipula y diseña como transitoria en el mismo. Creemos que es importante que se suprima el artículo 8 del proyecto de ley, mediante el que se añaden nuevos párrafos al apartado 1 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, porque entendemos que éste viene a introducir aquella cláusula en un texto normativo con vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico, cuando, como decíamos, creemos que la misma tiene un carácter transitorio.

En nuestra enmienda número 4 planteamos que, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno acuerde las condiciones para el traspaso a las comunidades autónomas de la plena titularidad de los bienes inmuebles hasta ahora integrados en el patrimonio de la Seguridad Social y afectos a fines de asistencia sanitaria de servicios sociales. Proponemos abordar y solucionar la problemática derivada de la colisión entre la propiedad única del patrimonio de la Seguridad Social y la transferencia y asunción a los servicios de salud de las competencias en atención social y servicios sociales para las comunidades autónomas. Consideramos que hay que dar un cierre definitivo y solicitamos que, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se pongan en marcha los mecanismos para que esto sea así.

Como decía, se trata de dos enmiendas coherentes con nuestro planteamiento sobre esta materia y confiamos en que realmente sean atendidas, pues considero que ello ayudaría a resituar esta materia dentro de los cauces de los que nunca se debería haber salido, es decir, un planteamiento realmente descentralizado en materia de Seguridad Social.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente para reiterar un argumento que ya hemos expuesto cuando hemos dado nuestro apoyo a los vetos presentados por los Grupos de Convergència i Unió y Socialista, y al que la senadora Martín Mendizábal no ha podido o no ha querido contestar, ni en términos dialécticos, ni tampoco en términos políticos.

Proponemos la supresión de los apartados 1 y 2 del artículo 1 de este proyecto de ley, que es el núcleo esencial de la argumentación a favor de los vetos. (*El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*) Es decir, en contra de lo que decía la senadora, es cierto que ésta es una ley ordinaria que modifica otra ley ordinaria, la de la Seguridad Social, pero también lo es que, modificando esta ley ordinaria, se modifica el nivel competencial de los estatutos de autonomía, es decir, modifica leyes orgánicas. Y esto no es algo que diga este humilde senador, sino que lo hace el informe del CES, el Tribunal Constitucional y el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, que me parece que tienen una mayor autoridad de la que podamos tener la senadora Martín Mendizábal o yo mismo; y en todo caso

tienen una mayor autoridad a la hora de enjuiciar la arquitectura jurídico-constitucional de nuestro sistema de protección social.

Estos tres órganos dicen exactamente lo mismo que hemos dicho los tres oradores que hemos intervenido en el trámite anterior: que se están invadiendo competencias de las comunidades autónomas. Lo hemos dicho del derecho y del revés, habiendo obtenido una respuesta evasiva por parte del Grupo Parlamentario Popular. Se nos habla de igualdad y de uniformidad, pero no se entra en el argumento jurídico—constitucional, que es el punto débil de esta ley y que nosotros advertimos, al igual que han hecho otros, que probablemente la llevará al Tribunal Constitucional, puesto es débil desde su raíz, sobre todo en su artículo 1, al que se dirigen nuestras enmiendas 5 y 6.

Tampoco ha contestado su señoría ni el Grupo Parlamentario Popular —y con esto termino, señor presidente— a la imputación que se ha hecho sobre la bonificación fiscal que se va a producir en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Ahí no hay desigualdad? ¿No se rompe ese principio, tan exquisita y celosamente guardado por el Partido Popular, de la igualdad entendida como uniformidad? Pues sí, en Navarra se va a romper este principio, pero como lo rompen los amigos de la UPN, no se dice nada. Se persigue lo que se pueda hacer en Andalucía o en Cataluña; pero en Navarra, con la UPN hemos topado.

Quedamos a la espera de conocer sus magníficos argumentos sobre la cuestión de la Comunidad Foral de Navarra y sobre la invasión competencial, tal y como señalan el Tribunal Constitucional, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y el informe del Consejo Económico y Social.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espasa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sismiolo.

El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.

He procurado presentar todos mis argumentos durante el debate de la propuesta de veto y, por lo tanto, mi intervención será ahora muy breve, no voy a ser como aquellos que cuando dicen que son breves, vale más que uno se calce, porque creo que ya se ha dicho lo sustancial.

Mi grupo parlamentario ha presentado un total de 24 enmiendas y, debido a ese elevado número —y por cortesía parlamentaria—, intervengo desde la tribuna.

Dado que mi grupo parlamentario entendía que el veto no iba a prosperar, hemos presentado las enmiendas números 23, 24, 25, 26 y 33 con el fin de paliar, mejorar y facilitar que las comunidades autónomas puedan tener una política propia sobre esta materia. En este sentido, me voy a permitir leerles la enmienda número 33, al artículo 48, para que puedan comprobar que no nos mueve el establecimiento de diferencias per se, sino la preocupación por la escasa cuantía de las pensiones: «1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el

importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año para el conjunto del Estado.» «2. Si el índice de precios al consumo acumulado de la Comunidad Autónoma de residencia del pensionista, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.»

Desde nuestro punto de vista, aquel que está realmente discriminado es el pensionista que vive bajo un régimen de precios al consumo oneroso para su situación económica —y permítanme que lo llame así—. Fíjense que, gracias a la enmienda que proponemos, aquellos que estuviesen por debajo de la media tendrían compensaciones y, por lo tanto, verían revalorizadas sus pensiones, acercándose a la media de renta del Estado.

Asimismo, quiero destacar que no es acumulativa porque si fuese así, al cabo de diez o doce años, habría importantes disfunciones, y ese no es nuestro objetivo. En este sentido, anualmente y en un solo pago, se compensaría la diferencia de índice de precios al consumo.

Hemos presentado otro conjunto de enmiendas, las números 27, 30, 31, 32, 41, 43, 44, 46 y 47 que, como viene siendo habitual, mi grupo parlamentario presenta con el fin de mejorar las condiciones de los disminuidos y discapacitados. Sé que muchas veces es difícil ser objetivo sobre el grado de discapacidad y que a veces puede haber rentas acumulativas. No obstante, entendemos que con estas enmiendas mejoraríamos el tratamiento de un colectivo con el que nunca se es suficientemente solidario.

La enmienda número 28 es referente al cómputo final del cálculo de la pensión para las sociedades anónimas laborales, que, como ustedes saben, habitualmente se constituyen cuando la empresa está en crisis. Por tanto, se hacen unas propuestas para que, de forma transitoria, no se vean perjudicados en su pensión final los trabajadores cuando se opta por salvar sus puestos de trabajo y la empresa se transforma en una sociedad anónima laboral.

La número 29 es una enmienda técnica, ya que intenta adaptarse a lo que ha recomendado el Consejo Económico y Social, también, obviamente, en la línea de mejora de las competencias de las comunidades autónomas.

Por último y para no cansarles, las enmiendas números 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 y 45 van dirigidas a la mejora de las prestaciones. Creemos que respetando los acuerdos del Pacto de Toledo queda margen para que intentáramos, sobre todo por lo que hace referencia a las pensiones más bajas, situarlas al nivel de las exigencias que hoy en día nuestra sociedad hacen del todo imprescindibles.

Gracias, por su atención. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Sesmi.

Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 11 y 13 a 22, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, y, en su nombre, el senador Romero Calero tiene la palabra.

El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor presidente.

Con todo respeto a la Cámara pero ya hemos tenido un profundo debate sobre el tema de fondo, sobre el que manteníamos una discrepancia en relación con el proyecto de ley, que es la modificación del artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social.

El Grupo Parlamentario Socialista comparte con el Consejo Económico y Social el criterio de que estamos ante una ley eminentemente técnica y, salvo esa profunda discrepancia, que he intentado explicar a lo largo de la tarde, mantenemos una serie de enmiendas que se pueden calificar de puramente técnicas y que nosotros consideramos que mejoran el texto, lo clarifican u orientan de manera más acertada sobre lo que se pretende en el proyecto de ley.

La enmienda número 11, al apartado 2 del artículo 1, es la que se refiere expresamente a nuestro rechazo a la modificación del artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social en los términos en que propone el proyecto de ley, que, por otra parte, es la justificación de nuestro veto y, por tanto, no me voy a extender en ello.

Pero insisto en que compartimos con el Consejo Económico y Social el carácter eminentemente técnico de esta ley y, por tanto, el conjunto de enmiendas que mantenemos en este trámite van dirigidas a mejorar, clarificar y reorientar respecto de algunos aspectos del texto del proyecto. Por tanto, me permitirán sus señorías que no me refiera a todas y cada una de ellas. Naturalmente, las doy por defendidas todas y en su momento las someteremos a votación, señor presidente, pero ahora me referiré expresamente a algunas concretas que consideramos que deberían ser objeto de atención, de consideración por parte del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, la enmienda número 17, al artículo 9, establece que las decisiones relativas a la cesión de los inmuebles no deben ser adoptadas por el Ministerio de Trabajo sino por el Gobierno a propuesta de dicho ministerio; es decir, introducimos un elemento de cautela, ya que entendemos que el patrimonio de la Seguridad Social es un elemento de suficiente importancia y trascendencia como para que la cesión o no de estos inmuebles deba ser objeto de acuerdo por parte del Consejo de Ministros, a propuesta, naturalmente, del ministerio del ramo, pero no decisión única del propio ministerio.

La enmienda número 8, al artículo 10, quiere establecer una precisión en relación con el cálculo del capital coste a la hora de abordar el cálculo actuarial. Como muy bien saben sus señorías, el cálculo actuarial, a diferencia del cálculo financiero, considera tanto factores ciertos como factores inciertos y en esa medida hay que introducir elementos que den seguridad jurídica y objetividad.

Por tanto, a la hora de calcular el capital coste en el ámbito del cálculo actuarial, entendemos que uno de esos elementos no ciertos típicos del cálculo actuarial, que en este caso son las tasas de mortalidad, se debe objetivizar, de manera que nos refiramos a las tasas de mortalidad publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, es decir, tablas de mortalidad oficiales para todo el ámbito de España y que hayan sido previamente publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y en ese mismo orden de cosas que nos refiramos al elemento financiero del cálculo actuarial, uno de los elementos financieros que es la tasa de interés, que se concreten en las tasas de interés legal del dinero, es decir, tablas de mortalidad publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y tasas de interés legal del dinero, que son elementos objetivos.

La enmienda 20 introduce una modificación en el artículo 12.Dos, porque no entendemos por qué el proyecto de ley a la hora de plantear la sucesión de empresas discrimina a las sociedades anónimas laborales. Pensamos que el tema está recogido de manera explícita en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y a ese artículo de la norma del estatuto nos referimos. Por consiguiente, no hay por qué diferenciar la sucesión de empresas entre que sean sociedades anónimas laborales u otra forma jurídica cualquiera.

Por último, la enmienda número 22 al artículo 23 pretende recuperar para el orden jurídico de lo social actuaciones que el proyecto de ley deriva hacia el orden contencioso-administrativo.

Señorías, como ven son todas enmiendas técnicas, dirigidas a mejorar los efectos que se derivan de la aplicación de la ley, salvo la primera enmienda a la que me he referido, que es la que plantea la oposición al artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social. Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, creemos que se equivocan profundamente ustedes al considerar que los complementos de las prestaciones de Seguridad Social son también y en todos los casos Seguridad Social. He planteado antes una serie de casos a los que ustedes no me han dado respuesta, simplemente porque no la tiene. Insisto en ello, ¿qué va a ocurrir, si efectivamente ustedes consideran que esto es Seguridad Social, con el personal estatutario, que tiene en su ámbito de relaciones laborales reconocidos complementos de prestaciones de ILT? ¿A partir de este momento ya no va a ser así? ¿Qué orientación van a dar ustedes a esta cuestión? Están ustedes introduciendo un elemento fenomenal de distorsión y van a provocar —y lo ha dicho antes un ilustre senador que me ha precedido en el uso de la palabra— sin ningún género de dudas una cascada de recursos de inconstitucionalidad en el mismo momento en que ustedes intenten cercenar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia y tendrán que empezar por las normas de Navarra o de Álava, que nosotros hemos votado tanto en Navarra como en Álava y que nos parecen coherentes con las políticas sociales que se desarrollan en esas comunidades autónomas. Pero si ustedes siguen haciendo gala de esa firmeza de la que tanto presumen y dicen que en ningún caso van a consentir que se generen estas diferencias en diferentes territorios del

Estado en función de quién gobierne en las comunidades autónomas, tendrán que empezar por su propia casa y tendrán que empezar a intentar restringir estas normas en la Comunidad Autónoma de Navarra o en la Diputación Foral de Álava.

Por último, pregúntense ustedes, señorías, por qué razón una comunidad autónoma no puede complementar una prestación de una pensión no contributiva mínima, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, y sin embargo sí puede complementar una pensión de jubilación anticipada de un docente. La verdad, señorías, es que es difícil explicar eso, y les va a costar a ustedes mucho trabajo explicarlo; es más, seguro que nadie lo va a entender.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después del debate de los vetos, tengo que decir que los grupos que me han precedido en el uso de la palabra han seguido un sistema parlamentario «light», puesto que todas las enmiendas presentadas las consideran técnicas o no les han dado la suficiente importancia, y ello como consecuencia de que han echado toda la adrenalina política en la defensa de los vetos.

Efectivamente, nos encontramos ante un proyecto de ley que reforma 49 preceptos de la Ley General de la Seguridad Social, que reforma el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral y que reforma tres preceptos de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El Pacto de Toledo, suscrito por todas las fuerzas políticas en 1995, es en el que confiamos, en el que seguimos confiando, y sobre el que, una vez renovado, no se puede frivolar, por lo que a través del sistema público de pensiones presentamos el proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social que, como ley ordinaria, no es ni más ni menos que una actualización del sistema cambiante de Seguridad Social.

Nuestra Seguridad Social requiere estar al día, un reciclaje constante de su actuación ante la sociedad, por lo que voy a centrarme en algunas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta dos enmiendas, que considera técnicas, pero lo que aportan es realmente un matiz técnico —valga la redundancia—. El Grupo Entesa Catalana de Progrés si bien se refiere a la ley ordinaria en sus enmiendas, presenta las números 5 y 6, donde una vez más quiere escuchar que la Ley Foral de Navarra establece ciertas bondades para nuestro grupo, y yo debo decir que eso no es así; cuando hablamos de una mejora de la fiscalidad en la comunidad autónoma, hablamos para todos en general, y no para unos sí y para otros no, como muchas veces pretende la ley. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta 24 enmiendas, y una vez que se ha defendido el veto con un argu-

mento político, sólo se ha limitado a decir que las enmiendas contienen cuestiones puramente técnicas, aunque reconoce algunas bondades de este proyecto. Sin embargo, también se remite al Pacto de Toledo, como ha hecho nuestro grupo, porque es donde tenemos que apoyarnos para ser acordes con la realidad social. El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas número 11 a 22, y el senador Romero dice que esta ley supone un paso atrás, cuando no es así, es un paso adelante. Su señoría ha calificado la ley como puramente técnica, sin embargo no ha desmenuzado las enmiendas presentadas, y por eso no voy a contestarle, pero ha hecho su discurso político refiriéndose a Andalucía —y yo también estoy en Andalucía— como si estuviéramos discriminados, y no lo estamos, senador Romero. Yo podría desmenuzar también el contenido que puede haber en Andalucía de clientelismo político, y sin embargo no lo estamos diciendo aquí, porque entendemos que lo que se hizo en su momento no es afortunado; en Andalucía no puede haber café para todos, sino que debe ser en función de materias disciplinadas para el colectivo en general. Y entendemos lógicamente que las enmiendas que hemos presentado son las más acordes con la realidad.

Usted ha hablado de Álava. Pues en Álava somos minoría y nosotros no hemos implantado un sistema que era pensiones de viudedad, no era para otra cosa, y está implantado y no por nosotros. Yo le pediría que fuera coherente con quién pide y cuándo se pide.

Las enmiendas que ustedes se han limitado a exponer han sido puramente técnicas. Yo me voy a centrar en alguna enmienda de sustitución, como la nuestra, que es muy importante, la número 49, donde se sustituye el artículo 12 del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social por la responsabilidad por cotizaciones y otros recursos. La enmienda 49 es meramente técnica en cuanto al punto específico del artículo 107 del Reglamento de la Cámara, pero después se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 al artículo 15 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Todas nuestras enmiendas son serias, pero ésta matiza muy claramente cómo tenemos que pretender evitar un fraude y posibilitar la exigencia de responsabilidad frente a quienes reciban efectivamente la prestación de servicio de los trabajadores, aunque formalmente sea un tercero. Esta enmienda además adiciona un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 104 a modo de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley General Tributaria, para el supuesto de empresario, persona jurídica que sea objeto de liquidación o disolución, imponiendo la transmisión de obligaciones de cotización a la Seguridad Social a los socios o partícipes del capital hasta el valor de su cuota, como garantía del cobro de la deuda, evitando disoluciones abusivas y exoneraciones de socios en tales casos no obstante su crédito por el valor de su cuota en la liquidación.

La enmienda número 50 es de modificación y trata de aquellos que tengan a su cargo hijos o menores acogidos en quienes concurren las circunstancias señaladas en el apartado a) del artículo anterior y que residan en territorio español. Está muy claro porque parecía que cuando se era

un beneficiario y menor tenía que estar residiendo en territorio español.

Otra enmienda de modificación es la número 51 porque no es lo mismo decir que serán beneficiarios los menores de 18 años minusválidos que los menores de 18 años o minusválidos. Es decir, que en un grado igual o superior al 65 por ciento incluimos también a esas personas con esa discapacidad.

La enmienda número 52 va en el sentido de que quien tenga dos o más hijos tendrá derecho, con motivo del nacimiento o adopción en España de un nuevo hijo, a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social y esto lo justificamos por razones, como he dicho antes, de residir en el territorio español.

No voy a ser extenso y prolijo porque los demás grupos que me han precedido tampoco lo han sido. Entiendo también que son importantes las enmiendas números 53 y 54. Con esta última se adecua el contenido del proyecto de ley a la modificación del artículo 181.a) de la Ley General de la Seguridad Social, que se corresponde con el artículo 182 en virtud de la nueva redacción que se ha dado en este proyecto de ley a la Ley sobre Protección a las Familias Numerosas.

Nuestro grupo, pese a la amenaza velada de algunos grupos de presentar —así lo han hecho en la exposición de los vetos— un recurso ante el Tribunal Constitucional, piensa que es la ley que en este momento la sociedad demanda; digo demanda porque no vamos a intentar que en cada comunidad distinta de lo que es el fondo de Seguridad Social se actúe de forma indiscriminada, que es lo que puede ocurrir. Yo soy andaluz y el senador Romero es senador por la comunidad autónoma andaluza, y nosotros cuando mantenemos un criterio de uniformidad no pretendemos tener estómagos agradecidos sino todo lo contrario, pues pretendemos dejar bien claro que llevamos una política social correcta. Estamos ante una solidaridad nacional, y lo dijo el señor Chaves, ministro del paro —cuando fue ministro de Trabajo en Andalucía lo recordamos así más que como presidente de la Junta—. Por lo tanto, las pensiones no contributivas son competencia del Estado y por ello entendemos que deben hacerse por la vía de esta uniformidad. Algunos grupos discrepan de un criterio como el que estamos manteniendo de esa igualdad que no es bueno, pero tiene que ser todo de una manera uniforme, aunque ha habido un grupo que entendió por uniforme otra cosa. Nosotros vamos a intentar que ésta sea la ley del consenso. De hecho, se han admitido algunas enmiendas. Ha sido tal vez un poco estéril el debate de los vetos, que es donde realmente estaba concentrada la política de los que han intervenido, que se han limitado a decir que sus enmiendas son enmiendas técnicas. Es una ley muy técnica y lo dice el Consejo Económico y Social y, por eso, se han matizado expresiones muy correctas puestas de manifiesto por técnicos en la materia. Así lo expusimos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado en este momento.

Señorías, creemos desde nuestro grupo que el espíritu de la ley va a salir adelante y no solamente porque tengamos mayoría aquí en la Cámara, sino porque es el espíritu y el sentir de la mayoría de los grupos. Lo que no quere-

mos bajo ningún concepto es que exista una dispersión de prestaciones y que cada uno dé lo que le parezca o lo que quiera y se cree un clientelismo social. El Pacto de Toledo dice que es un fondo común para todos. Tenemos que estar lógicamente todos involucrados en una materia uniforme como es la Seguridad Social. Al tener la responsabilidad de gobernar tenemos que hacerlo con una política social correcta e igualmente así debe hacerse en todas las comunidades autónomas.

Lo demás —se lo digo con todos mis respetos—, señorías, es demagogia, como decir que porque algunos grupos políticos no vean bien este proyecto de ley o porque se haya podido buscar la fórmula legal para que sea uniforme ese reparto de prestaciones tiene que hacerse de esta forma.

El señor Romero hablaba antes de los complementos de prestaciones. Cuando hablamos de complementos hablamos de complementos públicos. Lo dice claramente la ley: complementos públicos que lógicamente entrarán de forma negociada en los convenios colectivos que se negocien en su día y habrá situaciones que se negocien por convenios colectivos que tendrán rango de ley y que habrá que respetar. Sin embargo, usted, señoría, se está centrando de lleno en complementos sin especificar, en complementos públicos. ¿Y quiénes pagan esas prestaciones? Las prestaciones las paga la Seguridad Social y siguiendo el criterio del Pacto de Toledo tenemos que hacerlo de una forma equitativa, seria y consensuada. Lo demás sería tirar por la calle del medio. Si no se aborda con esta ley el que cada grupo político, cada comunidad autónoma que gobierna, quiera tener estómagos agradecidos en su contexto general, lógicamente se puede desmembrar, en un Estado de Derecho como puede ser el que se contempla muy bien en nuestra Constitución, en la carta magna, lo que significa la Seguridad Social, que es el espíritu de un reparto equitativo con prestaciones cotizadas y prestaciones no contributivas en función de. Y eso es lo que realmente se tiene. Esta ley está abriendo las puertas para matizar no solamente las pensiones o prestaciones no contributivas, prestaciones que tenemos por derecho de viudedad, de orfandad, de defunción, de jubilación, de invalidez, etcétera, muchas prestaciones que en un sistema tan amplio como es el sistema de la Seguridad Social tienen que estar perfectamente consensuadas y delimitadas.

Es verdad que esta ley se presta a muchas matizaciones técnicas. ¿Por qué lo digo? Porque la jurisprudencia —todos la conocemos— en esta materia en los juzgados de lo social es terrible, es materialmente casi imposible de recopilar porque tanto la antigua Sala Sexta de lo Social como la Sala Cuarta del Tribunal Supremo han ido haciendo matizaciones y más cuando desapareció en su momento el Tribunal Central de Trabajo y tenemos un gran galimatías de sentencias de los tribunales superiores de Justicia en esta materia.

Esto hay que aglutinarlo y qué mejor que seamos los legisladores los que, valga la redundancia, aglutinemos estas medidas técnicas que no es ni más ni menos que reconducir la situación a un sistema práctico de pensiones.

Podríamos entrar en un debate estéril y lo que se trae hoy aquí es un proyecto de ley muy serio, muy importante,

en relación con el Pacto de Toledo y con el sistema de pensiones que tenemos actualmente, que es el que vamos a mantener a partir de este momento.

El resto de las enmiendas pueden ser afortunadas, correctas, pero muchas de ellas han sido rechazadas, señoría, no por gusto de este portavoz que les habla, sino porque los propios tecnicismos que conlleva la jurisprudencia está haciendo que de alguna forma tengamos que rechazarlas por los preceptos que establece la Constitución, máxime cuando sabemos que esta ley, por las razones que fueren, puede ser estudiada con lupa por determinados juristas para la presentación de un pretendido recurso ante el Tribunal Constitucional que a nosotros no es que no nos importe, todo lo contrario, sino que hemos perfeccionado para que nuestro sistema de pensiones sea serio, arduo y convincente.

Y sin perjuicio de que en el segundo turno pueda aclarar alguna situación más concreta, de las enmiendas que se han presentado, unas han sido rechazadas, otras han sido estimadas en parte o bien consensuadas, pero lo que no es menos cierto es que vamos a hacer un sistema de pensiones unificado, claro, conciso y con criterio, para que nunca en nuestro mapa geográfico se pueda interpretar que hay unos de primera, otros de segunda, y que algunos, con más o menos bondad política, puedan hacer uso de unos fondos públicos para beneficios electorales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Fernández Sánchez.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Denegaciones.*) Gracias, senador Quintana.

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? La senadora Morales tiene la palabra.

La señora MORALES RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria con respecto a este proyecto de ley en materia de Seguridad Social se concreta en que tiene aspectos bastantes positivos, moderniza y mejora el sistema de la Seguridad Social en cuestiones tan importantes como la protección social, se ordenan las pensiones adaptándolas en todo caso a una realidad social, que ha ido cambiando con el tiempo y que tiene un enorme impacto en todos los ciudadanos y ciudadanas. Teniendo esto como base, además es importante que esto se haga en forma de ley, tal y como se ha traído aquí, y no a través de reformas puntuales en la ley de acompañamiento, como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero sí tenemos que decir que las formas utilizadas respecto a los artículos 1 y 2 no son las adecuadas en política, por cuanto afecta a aspectos tan importantes como del que estamos hablando. Se debía haber abierto un diálogo con las fuerzas políticas, con las comunidades autónomas, y no traer de forma unilateral un aspecto que, como hemos visto en el debate en la Cámara, está generando tanta controversia entre las comunidades autónomas e, incluso, en los propios grupos políticos.

En cualquier caso, tal y como han manifestado los grupos parlamentarios teniendo como base las propias recomendaciones del Consejo Social y Económico y del Tribunal Constitucional, se va a presentar recurso de inconstitucional sobre este aspecto, con lo que a pesar de la forma en que el Grupo Parlamentario Popular ha traído el debate a esta Cámara, no queda cerrado con este proyecto de ley, sino que se va a abrir un nuevo debate aunque dicho grupo no lo quiera.

De todas formas, el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria va a apoyar este proyecto de ley esperando que, efectivamente, no se cierre el debate de las competencias que deben tener las comunidades autónomas, e intentando que, por lo menos, aquellos aspectos que mejoran la situación de la Seguridad Social vayan avanzando.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Morales.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Aurrekoetxea.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que no le he entendido muy bien cuando se ha referido a tantas enmiendas técnicas como usted planteaba, porque en principio nuestro grupo parlamentario no ha presentado dos, sino cuatro; dos de ellas, si quiere, las puede plantear como técnicas, sobre todo las del patrimonio, pero que fundamentalmente iban dirigidas a solucionar las deficiencias del propio sistema de transferencias. En ese sentido, le tengo que decir que sí me ha preocupado realmente el lenguaje técnico que usted ha utilizado, pues más que hablar de un Estado Social y de Derecho o de un Estado del bienestar moderno, nos lleva a un lenguaje técnico bastante más anclado en tiempos pasados.

Por lo tanto, todos sabemos de donde se parte, de eso no hay duda, que el diseño competencial en materia de Seguridad Social responde a una concepción fuertemente centralizada, en la que el espacio para descentralización territorial de las pensiones y prestaciones de desempleo del sistema es muy reducido, pero creemos que ello no es excusa para poner la venda antes de la herida, ya que se parte de la supuesta tensión que se puede producir si por un casual se establecen niveles de protección social diferentes, y en función de eso se opta directamente por la uniformidad. Ya se establece de antemano, que es lo bueno, y se escuda, además, en la competencia exclusiva y monolítica que plantea la Constitución Española. Evidentemente, se evita contrastar con prácticas de otros Estados, que se pueden comparar, con formulaciones de otros derechos sin confrontar lo que en cambio usted planteaba de que esto significaba que nos encontrábamos en un proceso de cambio natural por la propia dinámica de la materia, pero realmente aquí no hay ningún contraste con la propia experiencia ni ninguna evaluación de cómo está funcionando el propio sistema. Aquí lo que hay es un planteamiento bastante rocoso y poco abierto intelectualmente, y eso es lo

que nos preocupa, porque creemos que existe legislación y experiencia suficientes para contrastar, y es lo que planteamos en nuestras dos primeras enmiendas, en la línea de ver las deficiencias, contrastarlas con otros modelos y, dentro de los principios inspiradores, discutir y debatir con aquellas claves que se hacían al principio de descentralización de las políticas en general, y en este caso concreto de protección social.

Lo que exige el problema que trata de resolver este proyecto entre otras cuestiones es una verdadera voluntad política y la misma evidentemente no la hemos visto porque creemos que existe un miedo claro a tratar esa cuestión y a abordarla como se hace en Europa, es decir, sin recelos ni desconfianzas. Y si, como ustedes dicen, se cree en un modelo descentralizado, que por lo que queda reflejado en este proyecto pensamos que no es así aunque ustedes lo prediquen, lo que hay que hacer es afrontar este debate. Además, aceptar estas diferencias no es insolidario sino que, al contrario, supone asumir la realidad plural y diferenciada que existe dentro del Estado y que en muchas ocasiones además esas posibilidades que ha tenido en su momento algunas políticas descentralizadas que se han podido llevar a cabo, han salvado al propio Estado y lo han liberado de muchas tensiones, porque han sido o bien las comunidades autónomas o bien, como se dice en el texto, incluso los entes locales los que han tenido que implementar políticas o plantear programas para atender las necesidades con las que uno se encuentra cuando está trabajando cerca de los ciudadanos porque es muy difícil no hacer nada.

Creemos que antes de hablar con esta solemnidad de criterios de unidad, de uniformidad, de centralidad, hay que buscar otros modelos más abiertos de coordinación, de colaboración, que siempre están en nuestros planteamientos y a los que nadie se va a negar, pero partiendo de esa diferencia como elemento enriquecedor y que, además, estamos convencidos de que supone ganar en eficacia y en eficiencia, porque quien tiene más cerca los problemas seguramente va a aplicar mejor las soluciones.

En fin, señores, no creemos que la solución esté tanto en el instrumento como en conseguir paliar las necesidades sociales, y eso es lo que entendemos por principio de solidaridad y de universalidad. A partir de ahí, con ese objetivo tenemos que debatir, y nosotros creemos que éste era un buen momento, cuando se presentaba este proyecto y podríamos haber tenido el tiempo suficiente para haber puesto sobre la mesa todas estas cuestiones, pero una vez más, no sé si por lo pernicioso que está resultando a veces el procedimiento en esta Cámara o realmente porque, como decía al principio, creo que existe muy poca voluntad política, la verdad es que nuevamente somos incapaces de dar respuestas a lo que se está viendo claramente como deficiencias de este modelo y que, además, por las resoluciones que se están adoptando por el Partido Popular, lo más seguro es que vuelva a ser nuevamente fuente de conflictos, interpretaciones contradictorias que, normalmente, a lo que llevan sobre todo, al ser una materia que resulta tan sensible para el ciudadano, es a dañar la imagen de las instituciones y a conseguir que se produzcan unas conse-

cuencias negativas para toda la ciudadanía en general, pero sobre todo para las clases más desfavorecidas.

Por tanto, nosotros seguimos diciendo por activa y por pasiva que hay que coger este toro por los cuernos, que debemos volver a resituarse toda la materia —como comentaba antes— con unos planteamientos de descentralización de las políticas de protección social, que no sólo es una demanda que se hace en el Estado sino que en toda Europa se están planteando experiencias de descentralización, y que no se puede seguir por esta senda de involución autonómica que se está dando porque, como decía, va en detrimento del propio modelo y de todos esos principios que se quieren salvaguardar, porque lo que está generando precisamente es mayor conflictividad y mayores tensiones, que no consiguen favorecer ni enriquecer lo que debiera ser una política de protección social universal.

Como además creemos que no somos los únicos sino que son muchas instituciones las que empiezan a dar advertencias y preavisos, lo que nosotros les demandaríamos, aunque ya sabemos que es predicar en el desierto, es recuperar la política como consenso y acuerdo, y que no busquen el conflicto y la judicialización porque es un argumento muy pobre como respuesta de un partido político.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Aurrekoetxea.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para pedir dos respuestas al Grupo Parlamentario Popular, que no hemos conseguido en toda la tarde. Primera, ¿van a comprometerse ustedes a recurrir la ley de la Comunidad Foral de Navarra que complementa las pensiones de jubilación y de viudedad en Navarra? El Ministro Zaplana dijo que quizá sí. Les pregunto al ponente popular y a la senadora Martín Mendizábal, ¿el Partido Popular va a recurrir o no esta ley? ¿El Partido Popular considera que esto es una complementación de pensiones?, ¿sí o no? ¿Por qué en unos sitios sí y en Navarra no? Me gustaría una respuesta clara y definitiva sobre esta cuestión tan precisamente planteada. ¿Recurrirán o no? ¿Lo consideran igualdad, sí o no? Sería muy ilustrativo para todos.

En segundo lugar, han corrido tanto en añadir un cuarto punto al artículo 38 de la Ley de Seguridad Social, que se han olvidado de que en el punto segundo de este mismo artículo 38 se habla de que podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. Hemos hablado de asistencia social como competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Segunda, en la letra a) del mismo artículo 38 se habla de las prestaciones de sanidad cuando éstas dependían del sistema de la Seguridad Social. Eso se ha cambiado a través de varias leyes: Ley General de Sanidad, Ley de Protección de la Intimidad, Ley de Cohesión y Calidad Sanitaria, pero ninguna de estas leyes, señorías del Partido Po-

pular, ha entrado en colisión con el ámbito competencial de las comunidades autónomas y por eso se han aprobado con consenso, con acuerdo, y la Ley General de Sanidad del malogrado ministro Lluçh y otras leyes de la ministra Pastor si no se han aprobado con el consenso de todos, sí con mucho acuerdo. ¿Por qué? Porque no invadían competencias de las comunidades autónomas, a pesar de que regulaban y modificaban —como nos decía torticeramente la senadora Martín Mendizábal— con una ley ordinaria otra ley ordinaria, pero resulta que la nueva ley ordinaria en aquel caso no invadía competencias: Ley General de Sanidad, Ley de Cohesión y Calidad Sanitaria, pero ésta sí, y por eso les advertimos que va a producir una cascada de recursos de inconstitucionalidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espasa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sesmilo.

El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.

Antes me he olvidado de decir —no con mala intención— que en el trámite de comisión todos los grupos transaccionamos nuestra enmienda número 41, lo que es un elemento positivo, que mejoraba la condición de beneficiarios a partir de una cierta minusvalía. Por tanto ha habido un pequeño diálogo que ha dado muy poco fruto, pero yo pensaba que desde entonces al Pleno en algún aspecto avanzaríamos más porque aquí se ha hablado de enmiendas técnicas, no sé si yo he dado pie a ello, por lo cual me excuso. Realmente algunas pueden ser de precisión, de redacción, pero han escogido una que, para no ser prolijo, no he leído, pero la enmienda número 31 de mi Grupo dice: «Los beneficiarios de la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, que sean contratados por cuenta ajena, que se establezcan por cuenta propia, que se acojan a los programas de renta activa de inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años o a los programas de rentas mínimas de inserción gestionados por las Comunidades Autónomas, recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión...» Es decir, ésta es una enmienda de modificación. En el texto se incluyen los programas de rentas mínimas de inserción designados por las comunidades autónomas, luego creo que esto no rompe unidad alguna, sino que, por el contrario, facilita que a personas con una pensión de invalidez se les pueda proporcionar una formación —gracias a estos programas gestionados por las comunidades autónomas amén de los gestionados por el Estado— que a pesar de su grado de invalidez les permita ser útiles, en primer lugar por ellos mismos, y en segundo lugar por lo que pueden reportar a la sociedad, y toda vez que ello no sea con el riesgo, quizá por una merma de su voluntad, de acogerse a un programa de inserción de renta mínima gestionado o promovido por una comunidad autónoma.

Esto es muy sencillo y nada técnico; es una cuestión de sensibilidad. Sinceramente, no entiendo por qué no se acepta una enmienda como ésta, que no echa nada por

tierra ni rompe unidad alguna. Creo que puede deberse simplemente al agobio con que estamos tratando una serie de leyes debido a que en este momento tenemos «overbooking». Esto es lo que nos ha pasado en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales —por cierto, ya hay quien ya la llama sólo Comisión de Trabajo precisamente por el mucho trabajo que realizamos en ella—, y eso hace que por el camino estemos perdiendo algo de sensibilidad. Repito que esta enmienda no es técnica y que no habría resultado nada difícil su aprobación puesto que ni modifica el espíritu de la ley ni representa mayor gasto para el Estado. Simplemente garantiza que un discapacitado que tenga una pensión de invalidez pueda aceptar con toda tranquilidad un programa de inserción que le ofrezca una comunidad autónoma porque a lo mejor resulta que efectivamente se inserta y sale de esa pensión de invalidez o en caso contrario puede tener la garantía de no perderla.

Lamento que no hayamos podido avanzar más. Reconozco que ya se aceptó en su momento una enmienda de este mismo tenor, pero considero que una sola es muy poco. Me habría gustado ser más optimista en este turno de portavoces, pero, repito, estamos legislando sobre tantas materias y de un modo tan rápido que esa misma premura nos lleva a no poder entrar en el detalle de muchas cuestiones. Confieso que no he insistido lo suficiente durante todo el trámite de este proyecto, aunque también debo decir que las culpas siempre están repartidas. En todo caso, ustedes son los que tienen la posibilidad de aprobar esta enmienda en tanto que yo no. Me habría gustado que tanto ésta como alguna otra hubiesen prosperado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Sesmilo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Romero Calero.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser sumamente breve.

El senador Fernández Sánchez en su intervención ha hecho una distinción entre tres aspectos. Uno de ellos lo considero superfluo en este trámite de pleno, y me refiero a la defensa que ha hecho de las aportaciones vía enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Esas enmiendas ya se incorporaron en su momento al texto del informe de la ponencia, con lo cual ya no son enmiendas por sí mismas. Desde el punto de vista de los senadores de los escaños de la derecha habrá sido una aportación sin duda positiva, pero repito que en cualquier caso resulta superfluo comentarlo en este trámite.

No quisiera entrar a comentar la insistencia del senador Fernández Sánchez en relación con el tema que nos ha venido ocupando buena parte de la tarde, cuestión que para algunos grupos parlamentarios es una injerencia en las competencias autonómicas. No insistiré en los argumentos que su señoría ha utilizado. No sé si es que no me ha entendido bien el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero, efectivamente, yo me estoy refiriendo a complementos públicos cuando hablo de complementos de personal

funcionario, de personal estatutario y de personal al servicio de entidades, organismos o empresas públicas. Por ejemplo, puede que un servicio de salud de una comunidad autónoma establezca un complemento para una prestación de la Seguridad Social y le dé tal consideración con todas las consecuencias que de ello se deriven. Por lo tanto, si ustedes son consecuentes y no quieren que ese complemento tenga la consideración de Seguridad Social, tendrán que establecer algún sistema de oposición para que no ocurra. ¿O es que ustedes van a hacer una oposición selectiva a las posibles políticas complementarias de las prestaciones de la Seguridad Social dependiendo de dónde se produzcan? (*El señor presidente ocupa la Presidencia.*)

Señorías, no me cabe la menor duda de que ustedes, como todos, hacen estas políticas con la mejor intención del mundo, pero, sincera y honestamente, creo que en este tema se equivocan. Hay otras cuestiones en las que uno puede llegar a entender que es posible hacer una cosa u otra, pero en este caso, sinceramente, creo que ustedes se equivocan. Es más, insisto en que no van a poder poner puertas al campo y, además, creo que no sería bueno recurrir a subterfugios para que las comunidades autónomas puedan establecer criterios de políticas sociales.

Eso sería malo y significaría ir caminando en una dirección de involución autonómica. A los que tenemos cierta idea de España nos parece que una forma de profundizar en diferencias que no ayudan precisamente a la cohesión territorial y social es la involución autonómica. Creo que ustedes deberían hacerse la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de la cohesión territorial, ¿cómo está España en este momento y cómo lo estaba hace unos años? Quizá llegaran a considerar que determinadas acciones que el Gobierno ha venido adoptando a lo largo de estos años no han ayudado precisamente a la cohesión territorial. Para quienes nos preocupa —y no les quepa la menor duda de que a los socialistas nos preocupa, porque tenemos cierta idea de España— profundizar en la cohesión territorial la involución que se está produciendo es un paso atrás, y en ese sentido lo decía.

En la defensa de las enmiendas ya he planteado algunos de los aspectos con los que no estamos conformes, y, aunque el senador Fernández no me ha contestado de manera explícita, me doy por satisfecho porque ya lo hizo en comisión. Nosotros decimos que los inmuebles los ceda el Gobierno, a propuesta del ministerio, y ustedes dicen que lo haga el ministerio, a propuesta de la dirección general; bueno, es una cuestión de criterio, puede ser de una manera o de otra. Nosotros decimos que, a la hora de establecer el cálculo actuarial de determinadas prestaciones que conlleven una capitalización, se tengan en cuenta las tablas de mortalidad que publica el Instituto Nacional de Estadística, y ustedes dicen que no se tengan en cuenta; bueno, también pueden aceptarse ambas posturas. Pero en este otro asunto no es admisible una doble concepción, porque se trata de que las comunidades autónomas puedan establecer políticas sociales de acuerdo con lo que dice la Constitución o que no puedan hacerlo, y eso, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, es una involución en la construcción del Estado de las Autono-

mías. Es más, nos parece que no es el momento de aprobar una norma en esa dirección, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la Constitución, que consagra el Estado de las Autonomías.

Antes me ha preguntado un senador de mi grupo cuáles iban a ser las implicaciones concretas de esto, y realmente pienso que se producirán recursos de inconstitucionalidad. No es que nosotros amenacemos con presentar recursos de inconstitucionalidad, no amenazamos ni con eso ni con nada, pero, sin duda, se plantearán porque las comunidades autónomas considerarán que se han cercenado las competencias reconocidas en la propia Constitución.

La senadora Martín Mendizábal ha dicho que durante 2 ó 3 años en Andalucía no se había establecido, pero porque se había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ahora ha habido sentencia en el caso de Andalucía, pero hemos oído hablar de muchas comunidades autónomas a lo largo de la tarde —y es que no porque yo sea senador en representación de la circunscripción electoral de Sevilla estoy focalizando el tema exclusivamente en Andalucía.

Lo cierto es que Andalucía ha consignado para sus presupuestos estas cuestiones, lo mismo que la Comunidad Foral de Navarra ha consignado otros presupuestos en otra dirección, Galicia también lo ha hecho, etcétera. Si el Gobierno de la nación no recurre esas disposiciones no pasará nada. Pero si el Gobierno de la nación dice: como el artículo 38 de la Ley General de Seguridad Social establece ahora que los complementos de esta naturaleza también son Seguridad Social y Seguridad Social es Estado, es decir, corresponde al Gobierno de la nación y ustedes no lo pueden hacer, entonces habrá otros recursos de inconstitucionalidad y habrá que explicar a los ciudadanos por qué razón se está produciendo esta cascada de recursos.

Sinceramente, señorías, no lo están haciendo bien. Yo hubiera querido poder votar a favor de esta ley porque no hay nada que más nos satisfaga a los socialistas que el que las cuestiones relativas a la Seguridad Social sean políticas de consenso. Desgraciadamente en este tema no ha podido ser y esperemos que en el futuro lo podamos modificar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente, contestaré a los grupos que han intervenido.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se ha referido a que al parecer mi grupo —en este caso el portavoz en uso de la palabra— había hablado de materias puramente técnicas. Es que muchas de ellas son puramente técnicas y se van abordando, haciendo e incluyendo en un proyecto de ley de la importancia de éste en función de esa jurisprudencia que todos conocemos y de la que tenemos que estar advertidos.

Sin embargo su señoría manifestaba a la Cámara que debíamos contar con voluntad política para un tema de

prestaciones de Seguridad Social. Yo le pregunto: ¿usted también cuenta con esa voluntad política con nosotros, con el resto de España? Ésa es la pregunta que a veces nos hacemos los que estamos en esta parte, señoría.

Respecto al Grupo Entesa y al recurso que puede presentarse contra la Comunidad de Navarra, somos muy respetuosos con la ley y, por tanto, la ley y los asesores jurídicos nos dirán qué tenemos que hacer. Queremos el interés general del país, no un interés particular y primordial de una parte —como algunos creen—, y por eso el interés general está por encima de un interés particular o parcial de alguna manera. En cuanto tengamos algo usted lo verá, pues seremos conscientes para saber cómo nos tenemos que mover.

Ha dicho también su señoría que habíamos invadido competencias. ¿No será al revés, que las comunidades autónomas han invadido las competencias del Gobierno central? Ésa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque estamos ante un proyecto de ley donde realmente ¿quién invade a quién? Es fácil hacer un discurso o una lectura gratuita en la Cámara diciendo que parece que el Gobierno central —en este caso quien representa a todos en general— ha invadido algo. ¿No será al revés, que algunas veces por clientelismo político —que es interesante— conviene hacer este tipo de proposiciones? Ésta es la pregunta que habrá que hacerse para resolver la incógnita que hay planteada.

Yo he visto un debate tranquilo, pausado y doy las gracias a los portavoces por cómo ha transcurrido. Tengo un poco la impresión de que ustedes mismos no se creían que esto iba a salir de la forma que ha salido. Pretendían ustedes decir: como se ha recurrido al Tribunal Constitucional —como ha manifestado el senador Romero—, posiblemente nos pongamos otra vez en la puerta para hacer otro tipo de recursos y seguir pleiteando, que es la fórmula que a veces mantiene la Junta de Andalucía. Pero somos coherentes, somos serios, queremos el interés general —como he dicho antes— y como le he planteado al representante de Entesa: ¿quién invade a quién las competencias? Ésa es la pregunta.

En cuanto a la enmienda número 31 de CiU, señoría, está muy claro y lo dije claramente al principio, no se me ha olvidado plantearla: hemos votado en contra por una razón, porque crea situaciones de programas de rentas mínimas y éste es un problema que podemos no asociarlo con una renta de prestaciones económicas, como son éstas. Tenemos que conjugar las rentas mínimas y las prestaciones y por ello, a veces, una ley de la importancia que tiene esta de la Seguridad Social roza o invade sin querer las competencias que tienen las comunidades autónomas en el tema de rentas mínimas o a nivel de Gobierno central. Eso es lo que tenemos que mirar, lo hemos hecho y como ese desfase que puede tener puede ser motivo de recursos al Tribunal Constitucional no lo hemos metido.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que nuestras enmiendas iban acomodadas o incorporadas ya en el dictamen de la ley, pero por su parte nadie ha puesto objeción; eran enmiendas nuestras y podían haber

sido criticadas por ustedes, pero no ha sido criticada ninguna. Desde que comenzó la tramitación en el Congreso de los Diputados hasta este momento ha habido consenso. Hemos presentado enmiendas al proyecto, lo cual significa, señor Romero, que se ha corregido lo corregible.

Usted incide nuevamente en la particularidad especial de las empresas públicas u organismos que tienen esas prestaciones, y vuelvo a repetir que debemos hablar de prestaciones públicas. Señoría, en su comunidad autónoma, que es la mía, y concretamente en el SAS, el Tribunal Supremo se cargó una prestación económica que tenían quienes antiguamente eran ATS, matronas y diplomados en enfermería, porque no se trataba de una competencia de la comunidad autónoma, sino de la Seguridad Social. Tal y como decía claramente el Tribunal Supremo, no se puede jugar con dos barajas, motivo por el que de alguna forma se cargó de un plumazo todo aquello que habían impuesto ustedes respecto de ese colectivo que, como digo, cuando se jubilaron a los 60 años tenían una prestación que ahora les han quitado, con el problema que ello constituye, quedándose sólo con la prestación de Seguridad Social y perdiendo el complemento que ustedes establecieron.

Es decir, que ustedes dicen que sí cuando se trata de un colectivo importante, pero cuando no les interesa, dicen que no. Ese doble lenguaje, senador Romero, debería ponerlo de manifiesto en la Cámara, es decir, debería explicarnos por qué a quienes son de la Junta de Andalucía les han negado esa prestación y ahora dicen que sí a la misma en aras del interés general de estómagos agradecidos. Entiendo que ello no debe ser así. No se trata de poner puertas al campo, sino de decir la verdad y velar por el interés nacional. Considero que a su grupo, y en su momento al Gobierno del Partido Socialista en Andalucía, le ha faltado la idea del interés nacional.

Las prestaciones de la Seguridad Social constituyen un tema de reparto, de equidad; no se pueden hacer brindis al sol y conceder prestaciones como quien regala algo, que es lo que se ha hecho. La Junta de Andalucía, a quien usted debe defender por razones obvias, no puede olvidar que hay prestaciones que se regalan, y con ello se queda muy bien, pero todavía estoy esperando que se cumpla una promesa que en su día hizo el señor Chaves. Recuerdo que hace dos legislaturas prometió dar una paga a las amas de casa, que todavía están esperando recibir. Eso sí es hacer el ridículo, senador Romero, en tanto que lo demás es una cuestión de coherencia y equidad respecto de una prestación económica como la de la Seguridad Social.

Muchas gracias, señor presidente. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.

Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas números 1 y 2.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 73; en contra, 128; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas números 3 y 4, del mismo grupo parlamentario. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 15; en contra, 182; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votación de las enmiendas números 5 a 10, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 73; en contra, 129; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votación de las enmiendas números 23, 26, 28 y 33, presentadas por Convergència i Unió. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 20; en contra, 181; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votación de las enmiendas números 25, 27 y 45, del mismo grupo parlamentario. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 14; en contra, 130; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Resto de las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 71; en contra, 129; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votación de las enmiendas números 11 y 13 a 22, presentadas por Grupo Parlamentario Socialista. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 70; en contra, 129; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se presenta a la Mesa una propuesta de modificación del dictamen, con número de registro 61093, firmada por todos los portavoces.

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar, el artículo 1, apartado 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 131; en contra, 67; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación del resto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 132; en contra, 15; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (S. 621/000149) (C. D. 121/000151).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, el senador Encinas.

El señor ENCINAS CASILLAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado por la Comisión de Sanidad y Consumo para presentar ante el Pleno de esta Cámara el dictamen del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El pasado día 20 de septiembre de 2003 tuvo entrada en esta Cámara el proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, texto que fue remitido por el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara, al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, lo remitió en la misma fecha a la Comisión de Sanidad y Consumo.

Se abrió el plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba el día 2 de octubre, plazo que fue ampliado hasta el día 8 de octubre de 2003. En tal fecha, se había presen-

tado una propuesta de veto y 212 enmiendas. Todos estos extremos quedaron reflejados fielmente en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie II, número 149, A, B, C y D, de fecha 20 de septiembre, y 2 y 14 de octubre de 2003, respectivamente.

El día 20 de octubre se reunió la ponencia para trabajar en el texto del proyecto de ley, realizando sobre el mismo diversas modificaciones y enmiendas. Emitió su informe, que fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», sección del Senado, serie II, número 149 E, de fecha 24 de octubre de 2003.

La Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara se reunió el día 22 de octubre. El texto del proyecto de ley fue debatido y aceptado como dictamen con la introducción de una enmienda transaccional.

El mencionado dictamen se somete ahora al preceptivo debate y, en su caso, a la aprobación por el Pleno de la Cámara.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A este dictamen se ha presentado una propuesta de veto que se debatirá a continuación. Es la propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y firmada por el senador Quintana González.

Su señoría tiene la palabra.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, aunque la presentación del veto podría hacer pensar otra cosa, en realidad nosotros, desde el Bloque Nacionalista Galego, estamos de acuerdo y creemos una necesidad regular con carácter básico las condiciones en las que los profesionales de la sanidad pública deben desarrollar sus importantes labores. De hecho, ya la Ley General de Sanidad de 1986 preveía la elaboración de una norma como ésta y si acaso resulta un tanto extraño que el ministerio la presente precisamente ahora que ya están transferidas las competencias en materia de sanidad a todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, las consecuencias financieras de la ley que ahora vamos a debatir, no repercutirá en el propio ministerio, sino en las comunidades autónomas que ejercen esas competencias.

Aun así, nosotros creemos que es necesario legislar con carácter básico a éste respecto y la necesidad de un proyecto de ley como este y de un estatuto marco la ciframos, cuando menos, en cuatro elementos: en primer término, la necesidad que parte, en primer lugar, de la urgencia en eliminar la dispersión normativa y las abundantes lagunas que en esta materia existen hoy, lagunas sólo solventadas en parte por la jurisprudencia, que fue resolviendo casos de conflicto dentro del régimen estatutario actual. En segundo término, la necesidad se deriva de la falta de trasposición de dos directivas europeas que deberán ser integradas en el proyecto de ley que ahora discutimos. En tercer término, nos parece importante y necesario un estatuto marco y una reglamentación con carácter general sobre todo por la necesidad, que ya resultaba inaplazable, de extender a los profesionales de la sanidad pú-

blica los derechos que la ley ya reconoce al conjunto de los trabajadores y funcionarios públicos y que de un modo auténticamente anacrónico, desde nuestro punto de vista, aún se le niegan a los trabajadores de la sanidad pública en virtud de la peculiaridad del régimen estatutario al que están sometido. En último lugar, es necesario porque sería importante aprovechar la ley básica para establecer una oportunidad por la cual las comunidades autónomas pudieran legislar en esta materia sin necesidad de interferencias que interrumpían el justo y lógico ejercicio de las competencias que tienen transferidas.

Si presentamos este veto es porque creemos que el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración no recoge estas necesidades que justificarían el estatuto marco que nosotros hoy quisiéramos tener delante para poder dictaminar y para poder opinar. Y, por lo tanto, sustentamos nuestro veto en las mismas razones que sustentábamos la necesidad de la elaboración de un estatuto marco al que hago ahora referencia. La primera razón, por consiguiente, de la presentación de nuestro veto es, desde nuestro punto de vista, que la ley no respeta la letra y los objetivos de las directivas europeas, tanto de 1993 como de 2000.

Este proyecto de ley, a nuestro modo de ver, parece olvidar que la finalidad declarada de estas normas comunitarias es, en atención a lo dispuesto con carácter general, mejorar las condiciones de trabajo o, tal como establece el artículo 18 de la Directiva de 1993, la aplicación de la presente directiva no constituye una justificación válida para la disminución del nivel general de protección de los trabajadores y trabajadoras, repito, artículo 18 de la Directiva de 1993.

Pues bien, en materia de jornada y de descansos este proyecto de ley lo que hace es empeorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública bajo la excusa de trasponer la directiva europea. En el proyecto la jornada complementaria se establece como obligatoria con carácter general, lo que convierte en irrelevante la determinación de la jornada ordinaria. Todo el mundo está obligado a realizar 48 horas semanales, con tal de que la dirección del centro establezca la oportuna instrucción, toda vez que la jornada complementaria no se define como vinculada a la atención de urgencias, a salvo de la referencia genérica que dice que tal extensión se realizará en determinados centros y para el personal de determinadas categorías o unidades, y todo eso en base a una programación funcional unilateralmente elaborada por la dirección del centro. Dicho de otro modo, en virtud de una decisión unilateral de la dirección de los centros, los profesionales sanitarios han de realizar jornadas semanales de 48 horas, que en el caso de los médicos residentes se convertirán en 58 horas.

De igual modo, también tenemos que referirnos a la denominada jornada especial, porque no es lo mismo hablar de guardias que de exceso de jornada ordinaria; es decir, una cosa son los turnos de guardia para atender la urgencia, y otra bien distinta es el exceso de jornada derivada de la modificación de carteleras, supresión de días libres, doblete obligado de turno, o la realización de horas extras para atender necesidades puntuales. Sin embargo, el pro-

yecto de ley otorga a unas y a otras el mismo tratamiento, tanto unos como otros tipos de exceso de horas son jornadas complementarias obligatorias hasta el límite de 48 horas semanales, y sólo por encima de ese límite serán voluntarias.

Desde nuestro punto de vista, hay que reconocer que este proyecto de ley mejora lo dispuesto en la Directiva 93 respecto al descanso diario. Frente a las once horas fijadas en su artículo 3, este proyecto establece el período de doce, pero las excepciones que contiene el proyecto a esta norma general amenazan con dejarla en papel mojado y, además, en algunos casos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54, sin compensación alguna. Incluso, en un aspecto como éste, en el que podríamos reconocer algún avance en la disposición que se nos somete a consideración, la reglamentación que alrededor de ella se establece, nos hace pensar que al final no se convertirá en nada positivo. Todas estas previsiones, a nuestro modo de ver, son claramente negativas. Se establecen aprovechando los máximos permitidos por las directivas europeas, deben complementarse con otras que, en clara infracción de las mismas, producen efectos perversos, por los que los descansos diarios y semanales se consideran disfrutados cuando se acumulen períodos de descanso que suman 96 horas.

En un segundo término de cosas, no sólo discrepamos del proyecto de ley que se somete a nuestra consideración en materia de jornadas y de descansos. Pensamos que además se deja pasar la oportunidad de equiparar al personal estatutario con el resto de los trabajadores públicos, en cuestiones tales como las condiciones de acceso a la excedencia voluntaria, o al régimen sancionador, o a la promoción interna temporal, impidiendo así la consideración de la categoría y de los derechos retributivos correspondientes al puesto de trabajo efectivamente desempeñado. También este proyecto de ley empeora la situación existente porque recorta derechos que los actuales estatutos reconocen a los profesionales sanitarios. Ahora que la transferencia de competencias, cara a las comunidades autónomas, pudo hacer mejorar alguna de estas circunstancias, lo que se establece como ley básica puede significar, al fin y a la postre, un retroceso en determinadas conquistas, como será el caso de los nuevos profesionales sanitarios, que no gozarán del derecho a percibir la totalidad de la retribución en caso de baja, actualmente reconocido en los estatutos del personal facultativo sanitario, no facultativo y no sanitario, y de otras prestaciones sociales, y en este caso habría que hacer referencia a lo ya conquistado en el aspecto de anticipos, guarderías, etcétera.

Y para acabar, este proyecto de ley no prevé ninguna clase de asignación de recursos para su aplicación. Según el ministerio se trata de una ley de coste cero, y ya sabemos lo que significa eso: legislar con carácter básico y, al mismo tiempo, establecer las cargas financieras para las comunidades autónomas que después tienen que ejercer las competencias, muchas veces claramente distorsionadas por el carácter básico de la ley que ahora aprobamos.

La repercusión financiera de estas políticas deberán soportarla íntegramente las comunidades autónomas, y de acuerdo con un sistema de financiación que, en el caso de

Galicia, llevó ya a la Xunta a incrementar el Impuesto Especial sobre Combustibles; hablamos aquí de la necesidad del déficit cero; hablamos aquí de estabilidad presupuestaria y, al mismo tiempo, legislamos con carácter básico de manera que se obliga a las comunidades autónomas a subir los impuestos allí para ejercer sus competencias, cosa que aquí el Gobierno estatal niega.

En este momento Galicia ocupa el puesto número doce en gasto sanitario per cápita, y uno de los primeros en gasto farmacéutico; de hecho, las únicas referencias sobre financiación que se contienen en este proyecto de ley se remiten a lo establecido en la LOFCA y no, como el Bloque Nacionalista Galego reclamó durante la tramitación de la Ley de Calidad y Cohesión, al incremento del fondo de suficiencia pactado en el año 2001, y que en la actualidad se dedica apenas a sufragar los gastos de atención sanitaria a los desplazados.

Como conclusión —y acabo, señor presidente—, bajo la intención inicial de mantener la calidad asistencial, el proyecto opta por aplicar soluciones de precarización, endurecimiento y desregularización de las condiciones de trabajo, que más bien parecen dirigidas a otros fines de carácter financiero. Porque para mejorar la calidad asistencial, señorías, hay que poner dinero encima de la mesa, y afrontar una cuestión que el proyecto deja pendiente: la necesidad de ampliar plantillas, de contratar más personal y no de exprimir al existente. Desde luego, será difícil mejorar la calidad asistencial con un personal insatisfecho, y nosotros creemos que este proyecto de ley no va a satisfacer al personal sanitario, cuando menos en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador García-Talavera.

El señor GARCÍA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar agradeciendo y felicitando a la señora ministra de Sanidad y Consumo por su apoyo, asistencia técnica y política, así como por su encomiable apuesta por el diálogo, el entendimiento y el consenso en todo el proceso de elaboración y tramitación de este proyecto de ley, agradecimiento que hago extensivo a los directores generales Ana Sánchez y Jaime Aubia, por las largas jornadas de trabajo que han compartido con los senadores ponentes, así como al asesor parlamentario de la ministra, Javier Figaredo, por su constante apoyo.

Señorías, quiero asimismo agradecer y felicitar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a todos y cada uno de los ponentes de esta ley, y muy especialmente a los que han contribuido a mejorar este texto con su esfuerzo, espíritu constructivo, y sobre todo con el diálogo, y he de reconocer, tal y como expresé en comisión, que me gustaría poder extender este agradecimiento al representante del Grupo Parlamentario Mixto, senador Quintana, si se hubiese sumado a esta iniciativa de todos los grupos, por el esfuerzo para el consenso, tratando de acercar posturas en

una ley tan importante como universal para todos los sanitarios, pero después de haberle oído, le agradezco su tono y sus exquisitas formas mantenidas a lo largo de su intervención.

Señoría, después de analizar el texto y la defensa de su propuesta de veto a este proyecto de ley, quisiera destacar sus desacuerdos más relevantes con el fin de centrar el debate de este turno en contra. Dice su señoría y destaca que es una ley que viene con retraso, que endurece las condiciones laborales y el régimen disciplinario; también insiste en la falta de compromiso con la calidad asistencial, y además dice que se extralimita en sus competencias.

Señoría, hoy, en esta Cámara, damos cumplimiento al mandato legal quizás más esperado por los profesionales sanitarios, casi dos décadas, y lo esperábamos por ser una norma establecida en la Ley General de Sanidad y por el anacronismo producido entre el personal funcionario y el laboral —cuyos regímenes jurídicos han quedado actualizados tras la promulgación de la Constitución y la nueva organización territorial del Estado— y el personal estatutario de los servicios de salud, con los cuales no había sucedido así y han venido siendo regulados hasta ahora por estatutos preconstitucionales, conocidos como los estatutos jurídicos de la Seguridad Social, del personal médico, del personal auxiliar sanitario y del personal no sanitario. Para ser más precisos y rigurosos, tenemos que reconocer también algunas normativas y modificaciones concretas que han ido acompañando, a lo largo de estos años, a estos estatutos para poder sustentarlos en su vigencia y eficacia.

Señorías, el artículo 84 de la Ley General de Sanidad estableció que el estatuto marco regularía la normativa básica aplicable al personal estatutario de todos los servicios de salud, que ha de ser específica y a la vez diferenciada del resto de la de los funcionarios públicos, y que se adapte a las características de cada uno de los estamentos de las profesiones sanitarias.

Por lo tanto, este proyecto de ley debe ser coherente y adecuado con el actual sistema de salud sobre la base de los principios y objetivos de la Ley de Cohesión y Calidad, consensuada y aprobada por esta Cámara hace tan sólo cinco meses, que, primero, neutraliza los desequilibrios territoriales consecuentes a la descentralización de la sanidad, una vez culminadas las transferencias sanitarias y, segundo, cohesionan y fortalece la equidad, la accesibilidad y la calidad en todo el sistema sanitario.

Su señoría argumenta su veto, en primer lugar, porque esta ley nace con retraso. Le tengo que responder, señoría, que esta ley nace en un momento oportuno porque, como todas sus señorías saben, desde hace más de una década se vienen produciendo análisis, informes y acuerdos institucionales que cristalizan en el que, si ustedes me lo permiten, considero más importante y básico: el acuerdo parlamentario para la consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud, Pleno del Congreso de los Diputados de 18 de diciembre de 1997. En su apartado 10, se constituye el nuevo modelo de relaciones laborales para el personal estatutario de los servicios de salud a través del estatuto marco. Pero era necesario, señorías, contar con la Ley 16/2003 para determinar la composición y las funcio-

nes de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, para poder planificar, modernizar y adaptar dichos recursos de manera oportuna y ahora inaplazable. Por ello el proyecto de ley del estatuto marco es actualmente necesario porque es solidario, porque mantiene el equilibrio, entendimiento y acercamiento de posturas entre los diferentes intereses profesionales, formaciones políticas, organizaciones sindicales y demás colectivos.

Sin embargo, señorías, no puede pasar desapercibida la magnitud de la complejidad para conseguir una norma entendida, en primer lugar, como necesaria para todos y, en segundo lugar, aplicable, cumplible y beneficiosa para todos los trabajadores de la sanidad y, a su vez, impulsar el entusiasmo y la motivación precisa para seguir contribuyendo a una mejor calidad en la asistencia sanitaria de nuestra España.

Otro argumento de su propuesta de veto a este proyecto de ley lo basa su señoría en el endurecimiento de las condiciones laborales. Usted insiste. Señoría, el estatuto marco se organiza y se normaliza en los aspectos de la vida laboral del personal estatutario de los servicios de salud, quedando claramente definidos los derechos y deberes, la ordenación de sus categorías, la carrera profesional y la previsión de posibilidades de movilidad geográfica para todo el personal estatutario. Creo, senador, que en lugar de una ley que endurezca las condiciones laborales es una ley razonable, necesaria y que mejora, flexibiliza y moderniza los mecanismos básicos para la homologación actual de las categorías profesionales para acceder a los concursos de plazas y traslados y que también, como recoge en los capítulos IV, V, VI y VII, armoniza las condiciones de trabajo del personal estatutario de los diferentes servicios de salud, sin menoscabar ni siquiera pretenderlo en ningún momento, como ya le dije en comisión, los principios de la calidad asistencial.

En esta ley se establece con claridad el carácter funcional de la relación estatutaria, no se menoscaban las peculiaridades específicas y propias de las comunidades autónomas, que quedan reflejadas en la propia ley en sus capítulos II y III, tanto en la calificación del personal estatutario como en las funciones a desarrollar de acuerdo con sus niveles y titulación.

Esta ley también prevé la regulación del personal temporal y sus organismos de organización y planificación, integrándolos en el sistema de información sanitaria.

También dice, o al menos así lo incluye en el texto de su propuesta, que este proyecto precariza al personal al endurecer las directivas europeas, adolece de falta de compromiso con la calidad y se extralimita en sus competencias.

Señorías, ya le dije antes que esta ley, en su capítulo VII, garantiza el principio de libre circulación y movilidad del personal en todo el Sistema Nacional de Salud, generando así un funcionamiento integrado y estableciendo una mejor cohesión y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Este proyecto de ley también configura un nuevo marco de cooperación y colaboración como instrumento para el desarrollo de la carrera profesional y su régimen retributivo y, a su vez, señorías, en el capítulo X se contempla la trasposición al sector sanitario de las dos

directivas de la Unión Europea, dando contestación a su preocupación, tanto a la 93.104 como a la 2.034; ambas garantizan la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tiempos de trabajo, descanso, sin perjuicio, como no podía ser de otra manera, del artículo 43.1 de nuestra Constitución. De la misma manera, queda salvada y garantizada la regulación de la situación del personal, sus incompatibilidades, su flexible jubilación, su régimen disciplinario, su participación y negociación colectiva.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley se concibe tal y como lo prevé la Ley General de Sanidad de la misma manera que el Sistema Nacional de Salud, constituyendo un modelo organizativo especial que sólo existe en el ámbito de los servicios sanitarios públicos y que se crea y desarrolla como medio de adaptación de tales servicios a la España autonómica con el fin de dar un funcionamiento armónico y coordinado a los diferentes servicios de salud con el Estado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintana.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. También se me puede incluir en la nómina porque discrepar precisamente en una cámara parlamentaria no es sinónimo de división, sino más bien al contrario, de enriquecimiento de un debate y de aportación a un proyecto de ley que desde nuestro punto de vista no cumple las condiciones que debía requerir una ley básica como la que estamos tratando y, sobre todo, se pierde una oportunidad para solventar algunas cosas que dentro del personal sanitario se demandaban desde hace tiempo.

¿Que es el momento oportuno? Si aplicamos aquella vieja teoría de que más vale tarde que nunca, por supuesto que sí. Lo que resulta curioso políticamente es que se adopte la decisión de establecer el debate sobre una ley de este estilo precisamente cuando ya se han transferido a las comunidades autónomas las competencias en esta materia. A nosotros nos parece que muchas veces se hacen las cosas así no vaya a ser que la repercusión financiera de la ley que se somete a consideración vaya a recaer en las arcas estatales y, por lo tanto, utilizando el momento como la garantía de que, en todo caso, serán las comunidades autónomas las que tengan que pagar los costes financieros derivados de la aplicación de una ley como la que estamos tratando.

Sobre si endurece las condiciones laborales o las deja de endurecer, para este tipo de cosas, por encima de las consideraciones de buena fe que podamos hacer todos —y que yo a nadie le niego—, debemos remitirnos a los hechos, a la situación que actualmente tenemos y a cómo esa situación se intenta encarar desde el proyecto de ley que tenemos encima de la mesa. En ese sentido, tanto en el aspecto de jornada como de descansos lo que nos viene a regular el proyecto de ley no solventa los problemas que te-

níamos delante, más bien al contrario, en algunos casos puede establecer nuevos marcos claramente perjudiciales para los trabajadores de un sector público como éste. Además, la voluntad de diálogo que debería ser siempre una norma básica en la tramitación de un proyecto de ley tan importante como éste, hay que reconocer que en el caso que nos ocupa la hubo, y con gran intención de llegar a acuerdo, pero precisamente de ese diálogo también pueden surgir con mayor seguridad y claridad las diferencias que después impiden dar un voto positivo al proyecto de ley. El diálogo sirve para encontrar posturas comunes, para acercar posturas, pero también para cargar de argumentos cuando esas posturas no llegan a complementarse. Y en el caso que ahora nos ocupa del endurecimiento de las condiciones laborales, el diálogo establecido con el ministerio dejó en evidencia en muchas ocasiones que el propio ministerio dejaba al libre albedrío de la gestión posterior que los centros pudieran hacer de esta ley la posibilidad de que ese endurecimiento no se produjera. Nosotros pensábamos que sería mucho mejor en lugar de abrir esa posibilidad a la gestión posterior, dejarla más atada regulando adecuadamente cuestiones como a las que hice referencia en la defensa del veto. Y eso fue algo que salió en las conversaciones con el ministerio, en un ejercicio de sinceridad recíproca, y para nosotros no es, desde luego, una argumentación que nos convenza para cambiar nuestra postura.

Preferíamos —y así lo hemos dicho— que el Estatuto marco que hoy discutimos fuera lo suficientemente preciso como para que determinadas cuestiones no pudieran quedar al albedrío posterior de la gestión intercentros, sí a la gestión de cada comunidad autónoma que en virtud de sus competencias evidentemente defendemos que lo hagan con todas sus consecuencias. Ésta es la argumentación que sustentó antes la presentación del veto y que ahora mantengo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Coalición Canaria? (*Denegaciones.*) Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Denegaciones.*) Gracias.

¿Entesa Catalana de Progrés? (*Denegaciones.*) Gracias.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Denegaciones.*) Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López Carvajal.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con respecto de este veto. El proyecto de ley pretende dos objetivos fundamentales. En primer lugar, acabar con la dispersión normativa que regula en este momento al personal estatutario, que afecta a unas 600.000 personas, y que es de carácter preconstitucional, y en segundo lugar, transponer dos directivas de la Unión Europea, la 104/1993, referida a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y la 34/2000, que hace referencia a la jornada laboral y al descanso de los médicos internos residentes.

En términos generales, éste es un proyecto que presenta un texto bastante elaborado porque ha sido debatido con las comunidades autónomas, evidentemente por razones competenciales, y con las centrales sindicales, por razones obvias de la propia naturaleza del texto, pero a pesar de ello llega aquí al Senado con 212 enmiendas y un veto, lo cual no deja de ser un balance que preocupa o que tiene que arrojar alguna duda sobre los resultados finales.

Yo no voy a ser cicatero y, aunque no es mi papel, quiero reconocer que la ley presenta avances significativos. Creo que fundamentalmente garantiza la movilidad del personal del Sistema Nacional de Salud, lo cual es un mérito significativo porque ayuda a su cohesión —una de las preocupaciones fundamentales de los legisladores y del ministerio cuando aprobamos la ley correspondiente— y, para ello, se dota de algunos instrumentos como pueden ser evidentemente la homologación de las distintas clases o categorías profesionales al objeto, una vez que se dé el informe previo de la Comisión de Recursos Humanos, de que esta movilidad pueda ser realmente efectiva.

También hay una planificación de recursos humanos importante porque dota al sistema de una serie de recursos jurídicos y económicos que aumentan la motivación profesional y, a través de él, se puede indiscutiblemente hacer una política de ordenación de los recursos humanos y de planificación más significativa.

Sin embargo, nosotros tenemos discrepancias importantes respecto a este proyecto que quiero resaltar. En primer lugar, en el Capítulo X, en la sección de jornada de trabajo, existe una discrepancia básica y fundamental en torno a la jornada ordinaria de trabajo porque el proyecto de ley no la determina. Al mismo tiempo, la definición que se hace de la jornada complementaria y de la especial incluyen excepciones que pueden abrir la puerta a una regulación abusiva para los intereses de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista pretenden establecer las jornadas ordinarias en 35 horas, a la vez que ponemos un límite a la duración media del trabajo semanal, fijándolo en 48 horas. Como consecuencia de ello también tenemos discrepancias en el tiempo de trabajo y en el régimen de descanso, puesto que el proyecto incorpora excepciones que ponen en riesgo, a mi modo de ver, la Directiva 104/1993, que en última instancia lo que debe perseguir es mejorar las condiciones de los trabajadores. Nuestras enmiendas pretenden que el tiempo máximo de trabajo por cada 24 horas en ningún caso sobrepase las 12 horas, y también propugnamos —cito las cosas más significativas— que los trabajadores tengan derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas consecutivas en el curso de 24 horas de trabajo. Hay asimismo una apuesta por que se racionalice la jornada complementaria y especialmente por que haya un incremento de la actividad programada.

Quiero destacar que hay un apartado en el Capítulo XI relativo a las situaciones del personal estatutario, a pesar de que nuestras enmiendas puedan dar la imagen de que se pretenden invadir algunas competencias de las comunidades autónomas, curiosamente nosotros las defendemos

porque reafirman derechos que deben tener la consideración de básicos para todos los trabajadores. Me estoy refiriendo concretamente a las situaciones de expectativas de destino, de excedencia forzosa y de excedencia voluntaria incentivada, que lejos de estar reguladas por las comunidades autónomas deben estarlo en esta ley y, por tanto, deben considerarse como legislación básica.

Finalmente quiero hacer referencia a nuestras enmiendas al régimen disciplinario porque consideramos que ésta es una ley muy oportuna para que se defina el acoso moral como una falta muy grave. En todos los debates que ha habido en esta Cámara y en el Congreso, por parte del Grupo Parlamentario Popular siempre se ha puesto la excusa y el pretexto de que teníamos que trabajar unidos a la Unión Europea a la hora de legislar sobre este campo. Pues bien, ya tenemos una directiva, la 202/1973 y no hay ningún tipo de pretexto para que no se pueda incorporar al régimen disciplinario la figura del acoso moral junto al acoso sexual, que, obviamente, tienen una gran importancia y que han sido incorporadas en otros países, como Suecia, Francia o Bélgica.

Quiero acabar mi intervención haciendo una última referencia a una discrepancia fundamental respecto de esta ley a la hora de valorar los efectos económicos de la implantación del Estatuto marco. Suele decirse por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular que es recurrente la coletilla por parte del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la financiación.

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: En un minuto, señor presidente, con su benevolencia.

No hay una ley que tenga efectos más claramente económicos que ésta. La memoria económica que acompaña a esta ley es francamente irrisoria, tanto que el propio Consejo de Estado la cuestiona. Sin embargo la disposición transitoria sexta regula claramente cuáles son las condiciones para que pueda implantarse de forma gradual esta ley porque va a tener un profundo impacto económico, y ese impacto económico no se puede resolver apelando sólo a la lealtad institucional, porque le recuerdo que la lealtad institucional sólo obliga al Gobierno a efectuar un estudio de costes de la posible actualización de la cartera de servicio, y en este caso concreto —ya que no estamos hablando de cartera de servicios, sino de la implantación de un estatuto que obligaría a un incremento de las plantillas— debe tener un compromiso expreso del Gobierno, porque si no estaríamos en el argumento —muy bien expuesto por el portavoz del BNG— de que la razón última que justificaría la demora de la implantación de esta directiva de la Unión Europea ha sido esperar al momento en que se han hecho las transferencias de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

Por tanto, señorías, con toda esta serie de consideraciones, partiendo de la base de que esta ley incorpora seguridad jurídica a los profesionales sanitarios así como una mayor clarificación de sus derechos y deberes, pero te-

niendo en cuenta que la transposición de las directivas no garantiza su fin último, que es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores...

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: ... vamos a abstenernos en el veto, y defenderemos las numerosas enmiendas que hemos presentado al texto del dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García-Talavera.

El señor GARCÍA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar atentamente al portavoz del BNG y al del Grupo Parlamentario Socialista quisiera manifestar la posición de mi grupo parlamentario. Nuestra posición encuentra respaldo y apoyo en la secuencia de actuaciones y normativas impulsadas por el Partido Popular a lo largo de las dos legislaturas en que le ha correspondido la responsabilidad de gobernar.

Señorías, es necesario seguir la secuencia de los hechos para intentar ver adónde hemos llegado. En el turno en contra ya argumenté que el modelo público de descentralización sanitaria termina su implementación tras el acuerdo parlamentario para la mejora y consolidación del Sistema Nacional de Salud. Éste completa la descentralización y promueve la cooperación territorial dentro de este marco. Con ello se ha conseguido el mayor proceso de descentralización de la historia de nuestro país en materia sanitaria.

Señorías, el 31 de diciembre de 2001 el Gobierno finalizó el proceso de transferencias pendientes a las diez comunidades autónomas que accedieron por el artículo 143 de la Constitución, un proceso que se había iniciado hacía más de veinte años. Este acontecimiento constituye el hito más relevante en la vertebración del modelo sanitario desde la publicación de la Ley General de Sanidad, y su importancia se fundamenta en lo siguiente. En primer lugar, en el volumen de recursos que ha sido traspasado y que asciende a 9.600 millones de euros, a 155.000 trabajadores y a más de mil centros asistenciales. En segundo lugar, en el impacto económico que esto supone para esas diez comunidades autónomas, cuyo presupuesto sanitario representa el 35 y el 40 por ciento de su presupuesto total. En tercer lugar, en la aproximación de la gestión sanitaria al ciudadano, afectando a una población protegida de más de 14 millones de personas.

Pero, además, señorías, en este proceso legislativo secuencial para optimizar al máximo la asistencia sanitaria, el Gobierno ofrece a las comunidades autónomas un nuevo modelo de negociación sanitaria en sincronización con ellas, asegurando la transparencia y la equidad del proceso transferencial. Este proceso se concluyó incluso antes de diseñar el proyecto de ley de financiación autonómica, la Ley 21/2001, aprobada el 27 de diciembre, por razones de

coherencia legislativa y en aras de la equidad y de la cohesión del sistema, señorías.

Se trata de un sistema de financiación eficaz porque aumenta los recursos destinados en más de un 7 por ciento cada año con respecto al anterior. Se trata de un sistema solidario porque prevé que los fondos de financiación crezcan de acuerdo con los ingresos tributarios del Estado y nunca sean inferiores al PIB a precios de mercado. Y se trata de un sistema eficiente porque garantiza la financiación suficiente para cubrir las necesidades de la asistencia sanitaria. Además, este sistema es reforzado con un fondo de cohesión sanitaria que garantiza en toda España la equidad de acceso y disponibilidad de los servicios sanitarios.

Pero, señorías, en coherencia con esto, una vez descentralizados los servicios y garantizada su financiación, nuestro país demandaba un principio básico organizativo que asegurara la cohesión y mejora de la calidad de nuestros servicios de salud adaptándolo al siglo XXI: la Ley de cohesión y calidad, cuyo núcleo central, cuyos protagonistas son los ciudadanos y los profesionales sanitarios que los han de atender. La Ley 16/2001 ha puesto fin a la situación de interinidad que vivía el sistema sanitario público, casi un 35 por ciento de trabajadores. Se puso en marcha la mayor oferta pública de empleo que ha existido en España, y más de 300.000 trabajadores y profesionales de la salud se presentaron a esta oferta de 71.156 plazas de todos los estamentos sanitarios: médicos, enfermeras, auxiliares y personal de mantenimiento. Además, en el año 2000 el 75 por ciento de los Mesto contaban ya con su título de especialistas.

Continuando con la sucesión de eventos legislativos en pro de la mejora sanitaria, el Gobierno del Partido Popular ha querido destacar el prestigio de sus profesionales sanitarios. Éste ha sido el motivo principal de este proyecto de ley del Estatuto marco, que desarrolla las normas básicas que abordan cuestiones históricamente reivindicadas por el personal sanitario de nuestro sistema, por ejemplo la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, debatida la semana pasada en esta Cámara, y el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. En definitiva, señorías, este estatuto marco, tal y como ya explicité en el turno en contra, puede ser entendido como la norma básica que regula y armoniza las relaciones laborales de más de medio millón de trabajadores del Sistema Nacional de Salud después de muchísimos años de espera.

Muchísimas gracias, señor presidente. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamamos a votación. *(Pausa.)*

Señorías, sometemos a votación la propuesta de veto número 1, originariamente presentada por el senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, uno; en contra, 135; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Iniciamos el debate de las enmiendas.

En primer lugar, corresponde la defensa de las enmiendas números 1 a 27, firmadas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares. Para la defensa de las enmiendas y votos particulares, tiene la palabra el senador Cuenca. (*Rumores.*)

Señorías, ruego que faciliten la intervención de su señoría y no hagan tertulias en los pasillos. (*Pausa.*)

Puede comenzar, señoría.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores de Izquierda Unida hemos planteado las enmiendas números 1 a 27, cuyo objetivo fundamental es enriquecer este texto. (*El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*)

No quiero dejar de manifestar que el proyecto de ley que estamos discutiendo no es el que hubiera presentado mi formación política, Izquierda Unida, pero tenemos que reconocer que necesitamos una ley marco que evite la dispersión de las normas. (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cuenca, un momento.

Señorías, por favor, les ruego guarden silencio. (*Pausa.*)

Puede continuar, senador Cuenca.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Sí, señor presidente.

Pues bien, esta norma marco puede evitar en el futuro la dispersión de diferentes legislaciones en materia de personal sanitario. He dicho anteriormente que no es una ley que hubiéramos hecho nosotros, pero tenemos que reconocer que tiene aspectos que se han incorporado fruto del encuentro con algunas formaciones políticas —en este caso con la mía en algunos aspectos— y fruto también de la aportación de las centrales sindicales de clase, pero aún así quedan apartados muy inquietantes y preocupantes para mi grupo, y así lo hicimos constar cuando se debatió dicha propuesta en los ámbitos anteriores al plenario en el que estamos en estos momentos. Voy a ir muy rápido y solamente destacaré algunas de las enmiendas a las que el Grupo Parlamentario Popular debería prestar la atención correspondiente en los últimos momentos.

Con la enmienda número 1 pretendemos clarísimamente no utilizar «Estatutos» en plural, sino «Estatuto», para que en cada comunidad solamente haya un estatuto, una norma que regule y que incorpore a todo el personal, independientemente de su régimen estatutario, laboral, etcétera. En definitiva, que nos encontremos solamente ante un estatuto y no ante varias normas posibles que regulen diferentes mecanismos o relaciones funcionariales o laborales del personal en cada una de las comunidades.

La enmienda número 4 nos preocupa porque se refiere a esa práctica generalizada que aparece en este proyecto de estatuto marco del personal sanitario de creación de figuras nuevas, en este caso del aspirante en prácticas, hasta el día de hoy inexistente y que nosotros creemos que es innecesaria. Esta figura aparecerá posteriormente en el articu-

lado a la hora de fijar sus retribuciones, complementos, etcétera y nosotros pensamos que debe ser eliminada. No existe en estos momentos, no se exige para otras profesiones en otros ámbitos incluso del sector público y, por lo tanto, no parece lógico que aquí exista.

Con la enmienda número 5 pretendemos que para todo lo que esté relacionado con los recursos humanos deba haber un informe previo del Foro Marco, foro en el que se incorpora todo el Sistema Nacional de Salud y en el que participan fundamentalmente las centrales y los representantes de los trabajadores. Lo que decimos es que en todo lo que tiene que ver con la provisión de puestos y que pueda permitir la movilidad del personal en todo el Sistema Nacional de Salud sean tenidos en cuenta los representantes del personal a través, repito, de ese Foro Marco que es donde participan.

La enmienda número 9 se refiere a la transposición de la Directiva 93/104, tan aludida tanto en este proyecto como en las intervenciones anteriores. Creemos, igualmente, que la nueva ordenación del tiempo de trabajo debe ser común para todo el sistema y, por tanto, el concepto retributivo es imprescindible también en todas y cada una de las comunidades autónomas. Eso nos permitirá no solamente no generar diferenciaciones o discriminaciones a la vez, sino evitar que cada una de las comunidades busquen o capten a los diferentes profesionales como si de otra cosa se tratara.

La enmienda número 11 se presenta en consonancia con la enmienda al artículo 31.7, que se refiere a todo lo que tiene que ver con las retribuciones a los aspirantes en prácticas.

La enmienda número 20 —estoy haciendo un repaso rápido y somero a las enmiendas que hemos planteado— tiene que ver clarísimamente con la percepción de los complementos específicos, que no es exclusiva del personal facultativo, por lo que la posibilidad de renuncia ha de extenderse a todo aquel que percibiéndolo pueda desarrollar otras actividades incompatibles con el mismo.

La enmienda número 21 pretende incluir una nueva disposición adicional sobre la trasposición de la famosa Directiva 94/103, referente a la reducción de jornada de aquellos profesionales que vienen realizando jornadas prácticamente sin límite en consonancia con el carácter de garantía de la salud laboral de la propia directiva; pero en ningún caso debe suponer incrementos de jornada para el resto del personal, puesto que esto supondría exactamente lo contrario a lo pretendido por la norma comunitaria. Por lo tanto, parece lógico que todo eso esté incorporado en las negociaciones que se tuvieran que dar, si fuera necesario, en las mesas sectoriales.

En la enmienda número 24 proponemos que el adjetivo «fijo» sea eliminado, y ello sobre una base técnica: de no ser aceptada esta enmienda no parece lógico que se exija para participar en los órganos de selección una vinculación definitiva a personal estatutario y a los funcionarios, mientras se permite que cualquier contratado eventual de un centro vinculado pueda asumir esta función. Creemos que técnicamente se debería eliminar el adjetivo «fijo».

Por último, la enmienda número 27 pretende introducir una modificación a la disposición adicional undécima. Es importante incorporar en este estatuto a todo el personal sanitario marítimo que presta sus servicios en los buques del Instituto Social de la Marina. Hasta ahora dicho colectivo tiene una vinculación de carácter laboral, aunque su trabajo en alta mar y en puerto se corresponde con el realizado por el personal estatutario dependiente de este instituto. Con esta enmienda mi grupo pretende homogeneizar el régimen jurídico de este colectivo con quienes son sus afines de hecho, permitiendo su integración en un futuro como personal estatutario.

Señorías, hay aspectos en esta propuesta en los que nos hemos sentido reconocidos. Consideramos que todavía es posible hacer que ésta sea una propuesta de todas las formaciones políticas. Las enmiendas que hemos planteado no suponen en ningún momento poner una apostilla al Gobierno o al Partido Popular, sino incentivar a un colectivo para que el mismo se encuentre motivado y preste adecuadamente sus servicios. Estoy seguro de que ésta es una propuesta realizable y constituye una oportunidad de encuentro y definitivo consenso con las centrales sindicales que, como ustedes saben, han estado trabajando por intentar mejorar este estatuto marco que todo el mundo quería y en el que todos desean verse reconocidos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cuenca Cañizares.

Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 28 a 66, presentadas por el senador Quintana González, que tiene la palabra.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para decir que hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales con las que intentamos realizar tres aportaciones: mejoras técnicas que, de ser aceptadas, servirían para mejorar la redacción final del texto que se somete a consideración; modificaciones que mejoran las condiciones laborales del personal sanitario, sobre todo en lo que se refiere a tiempos de descanso y a una mejor calificación de lo que se considera jornada especial y ordinaria, y finalmente, un paquete de enmiendas con el que pretendemos introducir algunas modificaciones en el texto con las que se igualarían los derechos del personal sanitario con los que disfrutaban los trabajadores del sector público y funcionarios. Por todo ello mi grupo mantiene vivas un total de 38 enmiendas, que doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Quintana.

Defensa de las enmiendas números 77 a 83, 85, 90 y 92 a 99, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.

En su nombre tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, así como en el debate del proyecto de ley anterior sobre modificación de ciertos aspectos de la Seguridad Social nuestra portavoz denunció la falta de consenso, en la discusión de este proyecto de ley que modifica el estatuto marco del personal de los servicios de salud debo decir que la situación es absolutamente diferente, pues éste ha sido un debate en el que se ha alcanzado un amplio consenso, que ya se manifestó en el Congreso de los Diputados y que ha continuado manifestándose en el Senado, y respecto del cual el Ministerio ha hecho gala de toda la disposición necesaria a mantener reuniones, no sólo con los grupos políticos, sino también con distintas organizaciones pertenecientes a distintos ámbitos del campo de los servicios públicos sanitarios.

El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria mantenía más de veinte enmiendas en este proyecto de ley, pero quizá las más importantes se fueron consensuando en los distintos ámbitos de negociación, tanto en el Ministerio como en la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Sanidad; de manera que, en algunos casos, estas enmiendas fueron completamente aceptadas y, en otros, se llegó a una transacción.

Por lo tanto, tengo que manifestar —aunque insistiré en ello en el turno de portavoces— que, a la vista de la actitud de consenso y de aceptación de aquellas enmiendas que mi grupo parlamentario consideraba importantes porque defienden tanto ámbitos competenciales de las comunidades autónomas como aspectos más puntuales y técnicos, e incluso de salvaguarda de derechos adquiridos por los trabajadores sujetos a este marco estatutario, vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto de ley, dejando constancia expresa de nuestro agradecimiento hacia todos los grupos políticos, a los colectivos y al actual equipo del Ministerio de Sanidad, por la sensibilidad demostrada durante la negociación de los diferentes aspectos de este importante proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Rodríguez Díaz.

Para la defensa de las enmiendas números 67 a 76, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.

Al inicio de este debate, en el turno de defensa del veto, el senador don Anxo Quintana ha señalado la necesidad de la puesta en marcha de esta ley. Y, de la misma manera, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos también la considera necesaria, dado que con ella damos cumplimiento al artículo 84 de la Ley General de Sanidad, que establece la elaboración del estatuto marco que contendrá la normativa básica aplicable al personal del Sistema Nacional de Salud, que será desarrollada por las comunidades autónomas, según el artículo 41.2 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, también hay que recordar que la Ley 30/1999, de 5 de octubre, relativa a la Selección y Provisión de Plazas del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en su disposición final primera decía textualmente que el Gobierno presentaría a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses, el estatuto marco del personal de servicios de salud.

En definitiva, estamos dando cumplimiento a una serie de preceptos dirigidos a los profesionales sanitarios y demás colectivos que prestan sus servicios en el ámbito sanitario. Este grupo ha tenido históricamente una regulación específica, de la que deriva la denominación que ostentaban como personal estatutario, correspondiente a los tres estatutos que regulaban a este personal —el estatuto del personal médico, el estatuto del personal sanitario no facultativo y el estatuto de personal no sanitario— y, este proyecto de ley hará que queden derogados y, por tanto, que tengan una normativa específica y propia que se adapte a las necesidades y peculiaridades organizativas del sistema de salud y de la prestación de servicios adecuados, desde los mismos servicios, que garanticen un objetivo que creo que todos los grupos parlamentarios compartimos: proteger la salud, atendiendo incluso a las específicas características del ejercicio de las profesiones sanitarias, para garantizar ese derecho reconocido constitucionalmente y teniendo en cuenta que el actual reparto competencial otorga a las comunidades autónomas competencia exclusiva en materias de sanidad.

El estatuto marco que se plantea en el proyecto de ley que debatimos en este momento se estructura en catorce capítulos. En principio, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos considera necesaria la ley —y hemos dado suficientes argumentos al respecto—, pero seguimos manteniendo una serie de objeciones a la misma, como se refleja por la presentación de diez enmiendas a este proyecto de ley.

No cabe duda de que el proyecto inicial ya fue modificado y mejorado con aportaciones importantes en su trámite en el Congreso de los Diputados, como también lo ha sido en el trámite de ponencia y comisión en esta Cámara, pero a juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sigue presente una serie de aspectos que entendemos deben ser estudiados porque inciden claramente en el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Por un lado, en cuanto al Capítulo VII, referido a movilidad del personal, consideramos que debe garantizarse la movilidad voluntaria y, además, en términos de igualdad efectiva y con carácter periódico, abiertos a la participación del personal estatutario fijo y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. No obstante, respecto de este procedimiento, entendemos que incluir en el artículo 37.2 la referencia a que se efectúe preferentemente cada dos años nos parece que hipoteca la política de personal de cada servicio de salud. Aunque figure la matización relativa a que dicha periodicidad se efectuará preferentemente cada dos años, entendemos que en un momento determinado puede hipotecar las políticas de personal de un servicio de salud autonómico que pretenda dar respuesta a las necesidades concretas.

Por otro lado, el artículo 38, referido a coordinación y colaboración en las convocatorias, aunque su redactado fue mejorado ya en el Congreso de los Diputados a través de la inclusión de una matización —creo recordar que mediante una enmienda del Grupo de Convergència i Unió—, entendemos que limita la autonomía de las administraciones sanitarias competentes a la hora de confeccionar y elaborar sus propias convocatorias de oferta pública de empleo y de movilidad. Por ello, solicitamos la supresión de ese artículo a través de la enmienda número 69, dado que en el capítulo referido a la movilidad de personal se limita la capacidad autonómica en cuanto a las distintas convocatorias de provisión y selección, así como respecto a la movilidad.

Otra serie de objeciones por parte de nuestro grupo se refieren al Capítulo IX, sobre retribuciones, que también es objeto de varias enmiendas.

Estamos de acuerdo en la necesidad de establecer criterios generales en cuanto al sistema retributivo del personal estatutario, pero, cuando se refiere a las retribuciones básicas, en el artículo 42 se dice que éstas son el sueldo asignado a cada categoría, los trienios y las pagas extraordinarias. Sin embargo, en el artículo 42.1.c) se mezcla retribución básica y retribución complementaria al incluir en el importe de la paga extraordinaria la catorceava parte del importe anual del complemento de destino. Por ello, presentamos la enmienda número 70, mediante la cual solicitamos la supresión de esta inclusión, por entender que se trata de un tipo de retribución complementaria, cuando estamos hablando de retribuciones básicas.

Por otro lado, en el artículo 43, referido a retribuciones complementarias, se establece que los conceptos, cuantías y criterios para su atribución se determinarán en el ámbito de cada servicio de salud. Sin embargo, de facto, estamos imponiendo el establecimiento de una retribución complementaria fija a todos los servicios de salud, algo que, de hecho, se constata en el redactado del artículo 43 al indicar cuáles podrán ser esas retribuciones complementarias, pero ese «podrán ser» se contradice con el redactado posterior sobre las mismas, al menos en lo referido al complemento de destino, donde además se indica que éste se abonará en 14 pagas.

Entendemos que se entra de lleno en competencias de las comunidades autónomas y en la organización propia de cada servicio de salud autonómico y gestión de personal. Cada comunidad autónoma, de acuerdo con sus características y peculiaridades y en uso de sus atribuciones y competencias, debe determinar las características retributivas de su personal en lo referente a estructura, conceptos, cuantías y otras características de las retribuciones complementarias. Por ello, el artículo 43 debe recoger el concepto de retribución complementaria, pero sin especificar cuáles pueden ser, ya que ello debe decidirse en cada servicio de salud, de acuerdo a sus características y peculiaridades.

El Capítulo X se refiere a jornada de trabajo, permisos y licencias. Estando de acuerdo con el objetivo y las definiciones recogidas en el artículo 46, cuando la ley se refiere en el artículo 48 a la jornada complementaria, entendemos que la matización que se hace respecto a la aplica-

ción de la realización de la jornada complementaria solo al personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley viniesen realizando una cobertura de atención continuada mediante el sistema de guardias u otro sistema análogo, así como el perteneciente a otras categorías o unidades, previa negociación de las mesas correspondientes, cuestiona la capacidad organizativa interna y de gestión de los centros sanitarios y servicios de salud autonómicos, y, algo más grave, puede hipotecar la puesta en marcha de nuevos servicios que, por sus características de funcionamiento, requiriesen el establecimiento del sistema de jornada complementaria.

Por otro lado, establecer el límite máximo en 150 horas al año en relación con el régimen de jornada especial, cuando se determina que los excesos de jornada sobre lo establecido en el artículo 48.2 tendrán el carácter de jornada complementaria, entendemos que limita de manera muy importante las posibilidades organizativas que deberían tener los servicios de salud. Es más, el propio Consejo de Estado plantea serias dudas al respecto, puesto que la trasposición de la Directiva 93/104 de la Comunidad Europea no implica su obligado cumplimiento puesto que no lo impone y además la casi totalidad de las comunidades autónomas han objetado este aspecto.

Por otro lado, el artículo 1 de la ley establece la relación funcional especial del personal estatutario de los servicios de salud y, por tanto, establece con nitidez, tal y como se indica en el preámbulo de la ley, el carácter funcional de la relación estatutaria sin perjuicio de sus peculiaridades específicas. Si la relación del personal estatutario es de carácter funcional, se entiende que el ámbito natural para resolver los conflictos planteados entre el personal estatutario y los servicios de salud debería ser la jurisdicción contencioso-administrativa y no la jurisdicción en lo social.

Por consiguiente, en la disposición derogatoria única, apartado uno, debería incluirse la derogación del artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido, aprobado por decreto 2065/1974, de 30 de mayo. Si no se contempla su derogación, podemos entender que en la matización que se realiza al indicar «sin perjuicio de sus peculiaridades especiales» se incluye el mantenimiento, como ámbito de resolución de conflictos de la jurisdicción de lo social. Si es así, dígase abiertamente y recójase esa peculiaridad en el texto de la ley. Si no, en pura lógica, por la relación funcional que se otorga al personal estatutario de los servicios de salud, el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social debería ser recogido en la disposición derogatoria única.

La disposición adicional primera de esta ley...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Loroño, le ruego concluya, por favor.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.

La disposición adicional primera de esta ley hace referencia, por otro lado, a la aplicación de las normas básicas de esta ley en la Comunidad Foral de Navarra. Hay una en-

mienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vasco, la enmienda 74, que plantea una nueva disposición adicional que recoja que la aplicación de esta ley en la comunidad autónoma vasca, de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución y con el artículo 10.4 y la disposición adicional única de la ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución en cuanto a la aplicación de esta ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se entenderán referidos exclusivamente a los derechos y obligaciones esenciales que afecten al personal a cargo de los «Osakidetxa», así como las normas básicas sobre movilidad en todo el Sistema Nacional de Salud.

Ésta quizás sea la enmienda más importante de todas las del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que en estos momentos han quedado expuestas para su posterior debate. Entendemos que en el turno en contra el Grupo Parlamentario Popular nos dará las explicaciones oportunas, por las cuales, tal y como ha sucedido en el trámite de comisión, las rechaza. Pero la esperanza es lo último que se pierde y esperemos que se consideren algunas de las enmiendas en este trámite.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Loroño.

Corresponde ahora la defensa de las enmiendas 104, 106 a 108, 110, 111, 114, 115 y 121 a 125, presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. En su nombre, tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Ésta es una ley que ha venido consensuada del Congreso de los Diputados en buena medida y que aquí ha recibido también aportaciones de todos los grupos, del nuestro particularmente, con aceptación de distintas enmiendas, bien en su totalidad o bien transaccionadas con el texto del proyecto de ley del Gobierno. Dijimos en comisión y lo decimos ahora en Pleno que a pesar de algunas insuficiencias importantes, fundamentalmente la financiera, a la que me referiré al final, en líneas generales es una ley que nos parece bien trabajada y adecuada a la nueva realidad sanitaria con las transferencias a las 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, nuestras enmiendas son ya muy parciales y voy a hacer una defensa muy acotada de las mismas.

La enmienda 104 la damos por defendida.

La enmienda 106 es una enmienda de carácter no sólo técnico, sino político. Nosotros creemos que es mejor primar la oposición y el concurso oposición que el simple concurso de méritos por una cuestión de asegurar que el acceso a las plazas siempre va meritado de forma clara y pública. Esto está más asegurado con el concurso-oposición o la oposición, que no el mero concurso de méritos y, aunque éste también es un sistema de méritos como su propio nombre indica, creemos que sería mejor que se tendiese a las otras dos fórmulas de selección.

Las enmiendas números 107 y 110 son de supresión porque no creemos necesaria la figura del aspirante en prácticas. La enmienda número 108 viene a marcar la línea argumental de considerar que no es bueno que personas que no forman parte del sector público sanitario, independientemente de su cualificación técnica y científica, participen en los tribunales de selección de personal del propio sector público. Se dirá que esto es una segregación arbitraria de la calidad de determinadas personas, pero es que hay un motivo más de fondo, y es el de que queremos primar la excelencia del propio sector público. Es decir, no es una posición gratuita la de impedir que otras personas que no son del sector público estén en estos tribunales, sino que a través de esta posición se pretende primar y dar ejemplo de calidad y excelencia al propio sector público, porque consideramos que es el mejor, que debe continuar siéndolo y debe marcar las pautas a todo el sector sanitario y no al revés. Por esta vía que propone el proyecto de ley podría torcerse esta aspiración que continuamos manteniendo.

La enmienda número 111 nos lleva a concluir que no podemos aceptar que se prejuzgue ya en esta ley la forma y las repercusiones de la aplicación de las directivas europeas, al quedar pretendidamente excluidas lo que esta ley dispone de las directivas europeas. La enmienda número 115 la damos por defendida, así como la número 122.

La enmienda número 114, aunque es menor, y se nos dijo en comisión que no se podía aceptar puesto que no es posible acumular las vacaciones de un año a otro; nosotros respondemos que excepción por excepción, porque en este caso se está postulando esta posible acumulación, cuando no se haya disfrutado el período de vacaciones por una decisión extraordinaria de las autoridades sanitarias debido a una situación extraordinaria de emergencia en salud pública o en necesidades de atención sanitaria. Por lo tanto, excepción por excepción, creemos que sí podría aceptarse esta acumulación de períodos vacacionales cuando su impedimento de disfrute fuera por una situación excepcional, como prevé el texto del proyecto de ley.

Finalmente, y con esto termino, señor presidente, nuestra enmienda número 123 viene a recordar lo que ha sido una argumentación fundamental del veto, que hemos escuchado antes por boca del senador Anxo Quintana y en la posición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la repercusión financiera de esta ley. Es evidente que se va a producir una repercusión financiera para las distintas comunidades autónomas en la aplicación de todo lo previsto en esta ley, y aunque se recurre al estribillo de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y a la Ley 21/2001, de financiación de las transferencias, con la debida lealtad constitucional al artículo 2.1 de la LOFCA, que es el argumento que reiteradamente nos expone el Grupo Parlamentario Popular, nosotros creemos que esto no es suficiente. Estamos claramente ante una ley que va a producir un mayor gasto en uno de los capítulos que en el sector sanitario es más expansivo, puesto que el gasto en personal, primero, es muy voluminoso, casi el 70 ó 75 por ciento del total gasto sanitario, y cualquier cosa que se toca en personal produce inmediatamente unas repercusiones muy importantes. Por lo tanto, nos hubiese

gustado más una previsión mayor de estas posibles repercusiones, siempre al alza, desgraciada o afortunadamente, según como se mire, que puede producir la aplicación sobre el personal estatutario, como prevé este proyecto de ley, de las distintas disposiciones contenidas en el mismo.

No lo entiende así el Partido Popular; nos dirá —seguro— que las leyes que he mencionado ya garantizan esta suficiencia financiera, que además está el fondo de suficiencia financiera previsto en la Ley 21/2001, pero nosotros continuamos pensando que no es así, que se traspasan las competencias, se produce legislación básica sobre temas de personal, eso implica gastos en personal —y en sanidad es el volumen mayor, como he dicho antes— y, en cambio, no se prevé ningún mecanismo adicional o de compensación o de marco de discusión para ver estos efectos. Por tanto, mantenemos con esta argumentación nuestra enmienda número 123.

Como he dicho al principio, al margen de estas enmiendas, agradeciendo la aceptación de las de nuestro grupo y de las transaccionales a que se ha llegado en ponencia y en comisión, creemos que en líneas generales es una ley positiva y, excepto en algunos artículos que continúan pareciéndonos insuficientes, votaremos a favor.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 191 a 196, 198, 199, 204 a 206 y 208 a 210, presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*. En su nombre, tiene la palabra el senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vaya en primer lugar nuestro criterio general sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley, importante, creemos que muy importante, afectando a más de seiscientos mil trabajadores de la sanidad, en términos globales es aceptable, y lo es sobre todo porque a través del trámite en el Congreso de los Diputados y en el Senado ha incorporado buena cantidad de enmiendas y de transaccionales de los distintos grupos, con lo cual su paso por las Cámaras podemos asegurar que ha sido fructífero. Tanto en la clasificación del personal estatutario como en aspectos de derechos, deberes, provisión de plazas, retribuciones, permisos, régimen disciplinario, negociación colectiva, etcétera, creemos que es un proyecto de ley aceptable, a pesar de que alberguemos algunas dudas, como otros grupos, en el aspecto financiero.

En todo caso, queremos reiterar que el recorrido en el Congreso de los Diputados y en el Senado ha sido satisfactorio; concretamente en esta Cámara nuestro grupo presentó 21 enmiendas y algunas de ellas —y queremos hacer mención brevemente— fueron aceptadas en comisión de tal manera que las números 200, 201 y 202, que reducen la concreción de determinados aspectos organizativos previstos en los artículos 60 y 61, permiten consecuentemente una mayor intervención de las comunidades autónomas

respecto a la jornada de trabajo a tiempo parcial o respecto a permisos retribuidos para asistir a cursos de formación, en los que también las comunidades autónomas tendrán competencias en su concesión; lo mismo cabe decir sobre permisos para asistir a cursos o seminarios; todo ello a través de las enmiendas números 200, 201 y 202, que fueron aceptadas.

Igualmente consideramos útil y efectiva la incorporación de la enmienda número 207 para quienes vienen desarrollando una función para la que están capacitados y habilitados, y puedan continuar aunque no dispongan de la titulación prevista. También estimamos interesante la incorporación de la enmienda número 203 al artículo 69, sobre el deber del personal estatutario a mantener actualizados sus conocimientos.

Gracias a la aceptación de este bloque de enmiendas por parte del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, pudimos retirar la enmienda número 211, ya que entendíamos que las competencias autonómicas quedaban garantizadas por la aprobación de las enmiendas a las que me he referido. Aun así, entendemos que el proyecto de ley todavía sería mejorable, tiene posibilidades de mejora, y nos restan algunas enmiendas a las que haré mención y otras que daré por defendidas. Entre ellas, es importante la enmienda 191, que propone un nuevo artículo 4.bis), en el que señala que corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con las relaciones entre las administraciones públicas y el personal estatutario. Es decir, la finalidad de esta enmienda es la de unificar la vía jurisdiccional en las reclamaciones que se puedan realizar.

En la enmienda 192 proponemos criterios flexibles para ocupar puestos de formación profesional y grupos inferiores.

Según la enmienda 193, los miembros de los tribunales de selección para la provisión de plazas no han de ser precisamente personal fijo, ya que ocurriría que, al no ser personal fijo habitualmente, un gerente de un centro no podría ser miembro de un tribunal de exámenes.

En la 196 se establecen diferencias entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia, ya que los Reales Decretos 1561/1995, de 21 de septiembre, y 285/2002, de 22 de marzo, así lo establecen.

Con la enmienda 198 pretendemos suprimir la limitación de 150 horas al año para la realización de la jornada especial, ya que ello podría suponer una grave limitación en la gestión de los servicios.

En la 204 proponemos la introducción del «mobbing», además del acoso sexual, ya en el proyecto, como motivo de falta grave.

En la 205 se propone que pueda imponerse como sanción en caso de falta grave o muy grave la regresión en el sistema profesional alcanzado por el trabajador en uno o dos niveles.

Finalmente, y para no mencionar la totalidad, recordamos la 209, respecto a la disposición derogatoria única, para derogar el artículo 45 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, sobre Texto Refundido de la Ley General de la

Seguridad Social, con el fin de unificar, en el orden de lo contencioso-administrativo, la resolución de conflictos de este colectivo, más en consonancia con su naturaleza funcionarial.

En cualquier caso, en la confianza de que sean escuchadas estas últimas enmiendas quiero manifestar, ya en presencia de la señora ministra, nuestra satisfacción con este proyecto de ley por el amplio nivel de debate y de consenso que se ha conseguido a través de las conversaciones y de los debates en ponencia y en comisión entre todos los grupos, especialmente con el grupo mayoritario.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Beguer.

Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra el senador Socías.

El señor SOCÍAS PUIG: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, el proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud es un proyecto de ley que ha despertado muchas expectativas entre los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, ya que el actual estatuto tiene una antigüedad muy considerable y es evidente que su redacción no previó los cambios que se han producido en los últimos años y que la promulgación de la Constitución de 1978, la Ley General de Sanidad de 1986, y ahora las directivas comunitarias, aconsejaban llevar a cabo. Además, tanto los funcionarios como el personal laboral han visto actualizados sus respectivos regímenes jurídicos, cosa que no ha sucedido con el personal estatutario, por lo que los preceptos que regulan su actuación son en gran medida preconstitucionales. Por tanto, llevar a cabo una nueva formulación del estatuto adaptándolo a todos estos cambios, teniendo en cuenta la cesión de las competencias a las comunidades autónomas y las especiales características del sector sanitario que debe regular guardias, jornadas complementarias, turnicidades y otras, no es nada sencillo.

Desde este punto de vista nuestro grupo ha planteado una posición abierta al diálogo, dispuesto a llegar a acuerdos que permitan conseguir un proyecto que dé respuesta a diversas especificidades, pero que a la vez permita un correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las peculiaridades que puedan desarrollar en el ejercicio de sus competencias las comunidades autónomas.

Agradecemos el esfuerzo del equipo del ministerio, que se refleja con la presencia de la ministra en esta Cámara, al sentarse a negociar distintos aspectos del texto y de nuestras enmiendas al mismo, aunque nos hubiese gustado una mayor disponibilidad en temas laborales que, a pesar de la dificultad por sus características, acercase al personal estatutario un poco más a lo que sin duda es el futuro de las relaciones laborales, en concreto, a la consecución de la jornada de 35 horas semanales, así como a aspectos relacionados con el descanso, la movilidad, la representatividad de los trabajadores y la consideración de algunos colectivos en particular.

Pero aunque decía que agradecía la posición del ministerio, en contraposición con lo que es habitual en el Gobierno del Partido Popular, sí quiero matizar una serie de cuestiones que desvirtúan el esfuerzo de acercamiento que todos los grupos hemos hecho. En primer lugar, algunas organizaciones sindicales se quejan de la inexistencia de un auténtico proceso negociador de la ley, sino que más bien lo que ha sucedido ha sido una presentación de alegaciones a un texto que ha ido generándose a través de reuniones múltiples a distintas bandas, produciéndose frecuentes desacuerdos, incluso en el Consejo Interterritorial de Salud.

En segundo lugar, ha habido un parón en la voluntad negociadora. Cuando hace aproximadamente 15 días debía verse la ley en este Senado, parecía que estaba abierta la puerta para continuar acercando posturas hasta última hora. En estas dos semanas no ha habido ningún intento de aproximación por parte del grupo que sustenta a la mayoría, ni por parte del ministerio.

Ante una ley de tanta importancia las prisas no son buenas y tendríamos que habernos tomado el tiempo suficiente para llegar a acuerdos, pero ante el atracón legislativo al que nos ha sometido el Gobierno, esto no ha sido posible. Es una lástima que una ley tan importante, tal como sucedió con la LOGSS, no haya tenido espacio para un debate más amplio y más profundo que hubiese posibilitado un mayor grado de apoyo y consenso tanto parlamentario como social.

En tercer lugar, nos preocupa el reflejo presupuestario. No se contempla en la ley ningún aumento presupuestario, es decir, el estatuto marco que pretende establecer un adecuado sistema de incentivos, incrementar la motivación de los profesionales, la promoción profesional, la personalización de las condiciones de trabajo, especialmente en lo relativo a redistribuciones, todo esto se contempla como coste cero. La trasposición de las directivas europeas, coste cero; la regulación de la jornada, coste cero; la modificación de las condiciones de trabajo, coste cero. La verdad es que pensamos que no se sostiene la falta de previsión de aumento presupuestario. Nos tememos que suceda como con otras leyes que se aprueban sin esa previsión y que después su aplicación recae en las comunidades autónomas que deben efectuar auténtico encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas.

Echamos en falta en este apartado una mayor lealtad institucional en esta materia por parte del Gobierno del Partido Popular, ya que de mantenerse la actual redacción sucederá como, por ejemplo, con la Ley del Menor, y su coste hará inaplicable la misma por las comunidades autónomas.

Cabe recordar, además, que el actual sistema de financiación dejó muy ajustada la dotación presupuestaria para la sanidad; prueba de ello es la aplicación de los dispuesto sobre hidrocarburos en Galicia, que entrará en vigor en enero, o la solicitud de revisión anunciada por el President de las Illes Balears, Jaume Matas, pocos sospechosos de ir contra la línea política del Partido Popular.

Las repercusiones económicas a las que he hecho referencia pueden dejar muy tocada la aplicación del estatuto y

generar frustración en un colectivo que hace años espera esta reforma.

Aparte de la consideración económica, hay otra serie de consideraciones generales que hace que no podamos apoyar la ley, tal como está actualmente. Los problemas de regulación de la jornada laboral son motivo de varias enmiendas, ya que como queda regulado no está nada claro. La nueva regulación de acceso a la prueba MIR, la ausencia de un auténtico órgano de negociación y participación en el Sistema Nacional de Salud para los trabajadores, a pesar de la constitución de un ámbito de negociación que no sabemos muy bien qué capacidad decisoria tendrá, pero que pensamos que afecta a lo que es la cohesión del Sistema Nacional de Salud, el que haya una mesa donde puedan sentarse el Estado, en este caso el Ministerio de Sanidad, los sindicatos como representantes de los trabajadores, a fin de mantener una igualdad, una coherencia en todos los ámbitos de la Administración sin diferencias por comunidades autónomas; defectos en el régimen disciplinario que nosotros encontramos en la ley y en su desarrollo no aprovechando para incluir nuevas conductas emergentes como es el «mobbing» o un mejor tipo de tratamiento del abuso sexual; un tratamiento injustificado de las incompatibilidades, un proyecto de carrera profesional en el que no queda claro qué se evalúa, quién lo evalúa y cómo lo evalúa ni cuándo se consolida.

Menciono éstas entre otras cuestiones que recogemos en nuestras enmiendas y que no defenderé en su totalidad. Sí voy a detenerme en aquellas que consideramos más importantes de las 64 que presentamos originalmente, refiriéndome, en primer lugar, a la 135, retirada ésta de la tramitación y que hacía referencia a la reserva del cinco por ciento de las plazas para las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento y que fue la única aceptada, a la vez que anuncio la retirada de la 142 y de la 180 que soporta una transaccional.

En la enmienda 127 hacemos referencia al nombramiento del personal eventual porque entendemos que el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios debe garantizarse a través de las plantillas presupuestarias y no a través de nombramiento de personal eventual.

En la enmienda 128 hacemos referencia a la creación de la mesa de negociación como ya he citado anteriormente y no me voy a extender en ella.

En las enmiendas 130, 131 y 132 procuramos mejorar la regulación de los deberes del personal en lo referente a la formación, cumplimiento y jornada complementaria.

En la enmienda 136, que hace referencia al artículo 31.1, remarcamos el carácter extraordinario de los sistemas de oposición y de concurso para la selección de personal. Pensamos que el sistema de oposición debe ser siempre concurso-oposición y que debe quedar muy claro el carácter extraordinario. En esta enmienda sólo solicitábamos que se añadiera el adverbio «excepcionalmente». Era una enmienda muy pequeña que dejaba muy claro cuál era la voluntad. Pensábamos que había un cierto grado de acuerdo durante la tramitación en la ponencia, pero ni siquiera la inclusión de esta palabra ha sido posible. Espere-

mos que hoy, teniendo en cuenta que está aquí la ministra, sea posible añadir esta simple palabra para dejar muy claro cuál es el sistema por el que se va a optar siempre que haya procesos de selección de personal.

En la enmienda 137 pedimos suprimir el contrato en prácticas por no ser claro el sistema de valoración y crear indefensión.

Las enmiendas 139 y 140 hacen referencia a la regulación de la movilidad en distintos supuestos y pretenden ajustarse a lo dispuesto en la Ley 30/1984 para incorporar estos procesos a la Mesa del Sistema Nacional de Salud.

En la enmienda 153 proponemos modificar los apartados 1, 2 y 3 para ofrecer una redacción menos confusa, poniendo límite al tiempo máximo de trabajo, tanto el ordinario como el extraordinario.

En las enmiendas 164 y 165 intentamos garantizar derechos básicos del personal estatutario, a pesar de que pueda parecer que invaden competencias autonómicas, pero pensamos que al ser una ley básica deben contemplarse.

En la enmienda 170 añadimos un nuevo artículo, el 69 quáter, haciendo referencia a la posibilidad de acceder a una excedencia voluntaria incentivada para aquellos casos en que el personal se vea afectado por un plan de ordenación de recursos humanos que provoque movilizaciones forzadas y que sea incompatible con su situación personal, familiar o profesional en esos momentos.

En la enmienda 174 proponemos que las faltas graves puedan sancionarse con el traslado forzoso con cambio de localidad, ya que así pueden sancionarse con la suspensión de funciones y proporcionalmente esta sanción propuesta no parece que tenga efectos tan perjudiciales como aquélla.

En la enmienda 186 hacemos referencia a la disposición adicional nueva en la que se propone al Gobierno para que habilite las dotaciones presupuestarias oportunas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la aplicación de la ley y que no estaban incluidas en la previsión cuando se produjeron los traspasos de competencia. Ya me he extendido suficientemente y no voy a alargarme más en este tema.

Agradecemos que se recojan dos solicitudes nuestras planteadas en la enmienda 135, que es la única que —como he dicho anteriormente— se ha aceptado en su totalidad, referentes a la reserva del 5 por ciento para personas con minusvalías, y a la nueva redacción de la disposición adicional segunda, a la que nos referíamos en la enmienda 180 y que mejora la redacción, y anunciamos que mantendremos la abstención en varios artículos de la ley ya que, a pesar de estar abiertos al diálogo en según qué aspectos, ha sido imposible avanzar.

Agradecemos a los ponentes de todos los grupos el talante mantenido durante la tramitación y lamentamos —como ya he dicho en la intervención— que la avalancha legislativa de este fin de legislatura —como el mal estudiante que lo deja todo para el último día— haya impedido que hubiera más tiempo para avanzar en el consenso y en el apoyo final que tendrá el nuevo estatuto marco, que, aunque no es un mal proyecto en su conjunto, hubiese podido ser mucho mejor si se hubiesen admitido más enmiendas de los dis-

tintos grupos, y, en definitiva, hubiera satisfecho más a todos los profesionales afectados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Socías.

Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Simonelli.

La señora SIMONELLI MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, sea bienvenida a esta Cámara. Gracias por su asistencia a un debate tan importante como es éste, nos está demostrando que tiene una implicación personal concretamente en esta ley, con lo cual, muchísimas gracias.

Señorías, me corresponde intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular para justificar la no aceptación de las enmiendas que por parte de los distintos grupos parlamentarios aún permanecen vivas a través de los siete votos particulares formulados al dictamen de la comisión, pero aunque el objetivo de mi intervención sea el de realizar un turno en contra, creo que el mismo no sería completo sin destacar el hecho de que la tramitación en el Senado de este proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud ha sido un ejemplo de diálogo y consenso, que ha permitido la incorporación al texto de un buen número de las 212 enmiendas presentadas, bien mediante su aceptación directa, bien mediante la negociación de enmiendas transaccionales sobre la base de las propuestas de los diferentes grupos políticos.

En razón a lo expuesto y antes de entrar en el análisis de las razones que nos llevarán a rechazar aquellas enmiendas en las que, a pesar de esa voluntad de llegar a acuerdos, éstos no han sido finalmente posibles, estimo necesario efectuar una breve reseña de las distintas incorporaciones al texto como prueba de lo anteriormente expresado. Así, han sido admitidas e incorporadas al texto las siguientes enmiendas: la número 84, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, al artículo 35.1, sobre la posibilidad de ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño de funciones de nivel superior; la número 100, del mismo grupo, al artículo 40.4, que añade la expresión: «, sin detrimento de los derechos ya establecidos para la adaptación de los criterios generales a las características del Servicio de Salud.»; la número 25, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, al artículo 51.1, que suprime el término «ordinaria» al regular la posibilidad de establecer jornadas de hasta 24 horas; la número 202, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, al artículo 61.4, relativa a la posibilidad de permiso no retribuido o con retribución parcial por parte de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, y la número 91, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, al artículo 65.1, que añade el término: «o Comunidad Autónoma.».

A su vez, hemos llegado a acuerdos y asimismo incorporado al texto enmiendas transaccionales tomando como base las siguientes enmiendas que seguidamente se relacionan: las números 128, 129, 140, 178 y 179, del Grupo

Parlamentario Socialista, y 102 y 109, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al artículo 11.4 que introduce un nuevo párrafo relativo a la convocatoria de las reuniones en el Foro Marco para el Diálogo Social; la número 23, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, al artículo 15.1, que añade la expresión: «y de acuerdo con las previsiones del capítulo XIV, y, en su caso, del artículo 13 de esta ley»; la número 105, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y la 135, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 30.6, sobre fijación de un cupo no inferior al 5 por ciento para discapacitados.

Enmienda número 158, del Grupo Parlamentario Socialista, y número 197, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, sobre el artículo 48.2, estableciendo la posibilidad de acuerdos, pactos o convenios que establezcan otro cómputo de duración de los tiempos de trabajo. Modificación técnica consecuencia de la transaccional anterior en los apartados 3 y 4 del artículo 48. Se suprime el párrafo 3 y se numera como 3 el 4.

Enmienda número 200 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, sobre el artículo 60.2, relativa a competencias de las comunidades autónomas para determinar la limitación máxima de la jornada a tiempo parcial.

Enmienda número 201, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, sobre el artículo 61.3 relativo a competencias de las comunidades autónomas para conceder permisos retribuidos o con retribución parcial.

Enmienda número 203 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* sobre el artículo 69.3 introduciendo algunas correcciones al texto anterior y especificando: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 c) de esta ley.

Enmienda número 118 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y número 180 del Grupo Parlamentario Socialista sobre la disposición adicional segunda, que introduce una corrección a la aplicación con carácter supletorio del régimen de jornada y descanso en los convenios colectivos.

Enmienda número 207 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* a la disposición adicional séptima sobre incidencia del artículo 30.5.b) sobre derechos previos.

Enmienda número 26 de Izquierda Unida, en el Grupo Mixto, que introduce la nueva disposición adicional decimocuarta sobre Seguridad Social del personal estatutario con nombramiento a tiempo parcial.

Enmiendas números 103 y 125, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que introducen la nueva disposición transitoria séptima sobre el régimen transitorio de jubilación.

Por último, en relación con las enmiendas que no han podido ser aceptadas, y dado que sería muy prolijo entrar en su análisis una por una, ruego me permitan justificar las razones de su rechazo mediante un análisis global de las mismas esperando que entiendan que no se trata de una falta de cortesía sino de una contribución a que el debate no se prolongue por tiempo excesivo. De manera genérica

las enmiendas que permanecen vivas responden a tres tipos de argumentos: los relacionados con cuestiones de índole puramente laboral; los que aluden a la financiación por parte de las respectivas administraciones de las obligaciones derivadas de la ley y los que plantean cuestiones de tipo competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

En relación con las enmiendas que afectan a cuestiones de índole laboral hay que decir que la ley ha sido negociada y consensuada con los sindicatos más representativos del sector, razón por la que entendemos que desde el punto de vista de su objetivo principal, esto es, la actualización y adaptación al ordenamiento jurídico vigente del marco regulador de las relaciones de los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social, cumple perfectamente con el mismo. La aceptación de las enmiendas que van a ser rechazadas supondría la introducción de cuestiones que podrían alterar los acuerdos citados y perjudicar, en consecuencia, ese objetivo fundamental a que acabo de aludir.

Por lo que hace referencia a las enmiendas relacionadas con la financiación, debemos insistir en nuestra posición de que la transferencia de las competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas se produjo en el contexto de una reforma del sistema de financiación que, entre otras finalidades, tenía como cometido asignar a éstas los recursos necesarios para el ejercicio de dichas competencias en condiciones de suficiencia, sin que las obligaciones que puedan derivarse de este proyecto de ley vengán a alterar dicha situación.

En cuanto a las enmiendas vinculadas a la diferente interpretación del esquema competencial entre Estado y comunidades autónomas, no podemos sino reiterar que desde nuestro punto de vista, y de acuerdo con las previsiones del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, las normas de esta ley constituyen las bases del régimen estatutario del personal de los servicios de salud sin que ello suponga, por tanto, vulneración de las competencias en materia de sanidad asumidas por las comunidades autónomas.

Finalizo señalando que la predisposición mostrada por nuestro grupo en la negociación de las enmiendas ha sido correspondida con una actitud flexible y abierta del resto de los grupos, actitud que quiero agradecer expresamente y que esperamos nos pueda llevar a la aprobación de la ley con el mayor consenso posible.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Simonelli.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, aunque en el turno de defensa de las enmiendas dejé constancia de nuestra posición

con respecto a este proyecto de ley, no quería dejar pasar este turno de portavoces sin dejar constancia expresa del amplio consenso y nivel diálogo que se ha desarrollado entre los distintos grupos políticos, el ministerio y las distintas organizaciones representativas del sector, tanto a su paso por el Congreso como en la tramitación llevada a cabo en el Senado, lo que ha posibilitado que todos los grupos políticos veamos que muchas de nuestras enmiendas tienen cabida, ya sea directamente o mediante transaccionales, en el texto definitivo de la ley.

Por lo tanto, nuestra posición va a ser de apoyo a este proyecto de ley, lo cual no significa que no apoyemos algunas de las enmiendas que mantienen vivas varios grupos políticos y con las que coincidimos. Pero al final de esta intervención sí quería dejar constancia de la sensibilidad de la que, tanto el grupo mayoritario de la Cámara como los responsables del ministerio y los distintos grupos políticos, colectivos y organizaciones representativas, han hecho gala durante todo este proceso de debate, diálogo y consenso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Froilán Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero iniciar mi intervención agradeciendo la presencia de la señora ministra en este debate, ya que no he tenido ocasión de hacerlo antes porque en el turno de defensa de las enmiendas aún no se había incorporado.

Por otro lado, quiero agradecer a los ponentes del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Font, la senadora Simonelli y el senador García-Talavera, su disposición a llegar a acuerdos y consenso, igual que la ha demostrado el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de los subdirectores generales Ana Sánchez y Jaume Aubía, que también intentaron buscar acercamientos con este grupo parlamentario en relación con las enmiendas que aún mantiene vivas en este debate.

Voy a hacer una referencia en relación con la intervención de la senadora Simonelli, que ha manifestado su rechazo a las enmiendas haciendo un análisis global y centrándose en tres cuestiones: una de índole laboral, otra de carácter económico y, finalmente, la cuestión competencial; tres cuestiones fundamentales que primaban en el conjunto de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

En relación con las cuestiones de índole laboral, ha dicho que la ley ha sido negociada y consensuada con los sindicatos más representativos del sector —cosa que no dudo y así me consta—, pero cuando nosotros aducimos al ámbito competencial asumido por cada comunidad autónoma y a los servicios de salud autonómicos hacemos referencia a lo que la propia ley reconoce en el artículo 80: Pactos y acuerdos. Es decir, la ley ha sido consensuada y negociada con los sindicatos más representativos del sec-

tor pero nos estamos olvidando de que en cada comunidad autónoma también hay mesas sectoriales de negociación que insisten, fundamentalmente, en la búsqueda de otro tipo de acuerdos distintos o mejores que los que puedan establecerse en la ley. En el artículo 80 la ley establece que lo fundamental se negocie en cada ámbito de servicio de salud autonómico; luego, si hacemos referencia a esas cuestiones de índole laboral, es porque entendemos que hay cuestiones en las que la pormenorización a la que se llega en el estatuto marco está incidiendo en la capacidad organizativa y en la gestión del personal de los servicios de salud autonómicos.

Por otro lado, ha hablado de financiación, de competencias transferidas y de que en concreto a la hora de hacerse a cabo la transferencia se llevó a cabo también la modificación de la LOFCA. No vamos a hacer alusión a dicha modificación porque fue en cierto modo tortuosa, ya que en esos momentos las comunidades autónomas que estaban a punto de asumir la transferencia en materia de sanidad sí pusieron serias objeciones a la financiación de la sanidad y de alguna forma también se mantuvieron objeciones hasta el final de su tramitación. Además, cuando la disposición final segunda habla de llevar a cabo un análisis económico de lo que implica la puesta en marcha de la ley está reconociendo su impacto económico.

En relación con las competencias, el reparto comunidades autónomas/Estado y que no hay vulneración de competencias asumidas por las comunidades autónomas, nuestro grupo así lo cree y presenta incluso una nueva disposición adicional sobre la base de que el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en régimen local y estatuto de los funcionarios del País Vasco y de su administración local, sin perjuicio, por supuesto, de lo establecido en el artículo 149.1.18ª de la Constitución, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva en las bases del régimen estatutario de los funcionarios.

Por otro lado, la disposición adicional primera de la Constitución dice que la Constitución, a su vez, ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Lo mismo que la disposición adicional única del estatuto dice que la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en su historia y que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. Lo que pretende la enmienda de adición de una nueva disposición adicional presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es dar cumplimiento de forma coherente con lo recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía a las competencias que uno y otro otorgan al Estado y a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que hacen que éstas sean compartidas, y por otro lado también respetar la ley de función pública vasca.

No obstante —lo decía en mi intervención inicial— la ley es necesaria, la ley aporta aspectos importantes al régimen estatutario del personal vinculado a los servicios de salud y, desde luego, estamos dando cumplimiento al marco legal de que nos hemos dotado: Ley General de Sa-

nidad —como decía— e incluso Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recientemente aprobada en esta Cámara.

Señora ministra, ha demostrado talante de búsqueda de consenso y diálogo con los distintos grupos parlamentarios y prácticamente en un año, con su incorporación al Ministerio de Sanidad, en esta Cámara han tenido entrada —aunque discrepemos en distintos aspectos y eso es bueno también— la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y el estatuto marco que hoy estamos debatiendo, lo que en cierto modo tampoco supone la conclusión de las leyes que se van a debatir en materia de sanidad porque esta misma semana vamos a debatir otra, que es la reforma de la ley sobre técnicas de reproducción asistida.

Concluyo mi intervención planteando de nuevo las cuestiones que nosotros hemos defendido como grupo, pero agradeciendo también esa búsqueda de consensos y acuerdos manifestados por parte de los ponentes y del ministerio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Loroño.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra por dos motivos solamente. Uno, saludar a la ministra, que está con nosotros —cuando intervine antes no estaba en el hemiciclo, por eso no pude hacerlo— y no quería dejar pasar la ocasión.

En segundo lugar, para decir que esta es una ley —como hemos repetido muchos de los oradores— muy trabajada, muy consensuada y con un perfil más que aceptable en cuanto a su calificación como norma de aplicación a partir de su entrada en vigor. Por lo tanto, merece un buen calificativo esta ley.

Quisiera pedir a la señora ministra que este buen talante que se ha puesto de manifiesto en ésta y otras leyes, se mantenga también respecto del proyecto de ley de reproducción asistida. Como usted sabe, está pendiente una negociación y un debate respecto de dicho proyecto de ley, que no es menos importante que éste, que por supuesto tiene un mayor contenido ideológico y sobre el que también sería bueno llegar a acuerdos de forma que pudiésemos repetir esta sarta de felicitaciones mutuas que nos estamos dedicando esta tarde, y que son bienvenidas. No obstante, ello es algo que temo no se va a repetir respecto del proyecto de ley de reproducción asistida. Hemos presentado un veto a dicho proyecto que estaríamos dispuestos a retirar si hubiese alguna aproximación. Lo dejo en sus manos, señora ministra.

Finalizo, señor presidente, volviendo a nuestra enmienda 123. Ya conocíamos prácticamente todos los argumentos de la senadora Simonelli, motivo por el que éstos no nos han convencido. Insistimos en lo dicho respecto de que ni la Ley 16/2003 ni la 21/2001 aseguran un adecuado

soporte financiero de las modificaciones que en el régimen de personal introduce esta ley para todas las comunidades autónomas que tienen transferidos los servicios de sanidad. Antes hemos dicho, y quizá merece la pena repetirlo, que el gasto en sanidad, como bien sabe la señora ministra, es fundamentalmente de personal, aunque también de utillaje y gato farmacéutico. Se trata de una ley que básicamente regula determinados aspectos relacionados con el trabajo, el tiempo libre, las jornadas ordinarias y extraordinarias, etcétera, y el que se diga que esto tiene un coste cero nos parece cuando menos singular. Por ese motivo continuamos manteniendo nuestra enmienda, la cual refleja nuestra profundísima discrepancia en este aspecto financiero de la ley, algo que, por otra parte, no nos desdice sobre lo dicho anteriormente respecto del conjunto y armonía de la ley.

Pero, como digo, es cierto que este pretendido encubrimiento por parte de la señora ministra y del Partido Popular en el sentido de que esto no tiene ninguna repercusión financiera, sino que se trata de una ley básica que regula procedimientos de selección, etcétera, es, por decirlo de una forma suave, faltar mucho a la verdad.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espasa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.

Poco resta por decir tras la defensa de las escasas enmiendas que aún mantenemos vivas. No obstante, hemos de confesar que nuestro grupo se planteó unos objetivos para el trámite de este proyecto de ley en el Senado que se han visto cumplidos quizá en un 90 por ciento. Cierto es que la senadora Simonelli ha detallado con mucha inteligencia la gran cantidad de enmiendas de cada uno de los grupos que se han aceptado. Así pues, poco queda por debatir y sobre todo da la impresión, quizá próxima a la realidad, de que ha habido un profundo debate en el que se ha alcanzado un amplio consenso, habiéndose aceptado sugerencias o enmiendas de prácticamente todos los grupos.

En todo caso, a nosotros nos queda una seria duda sobre el posible costo económico que pueda tener la aplicación de esta ley. Consideramos que éste se va a producir y, en consecuencia, las comunidades autónomas habrán de encajarlo o padecerlo. Las enmiendas que han sido aprobadas son las que son y hemos de formular nuestra visión positiva de lo que ha sido el debate sobre este proyecto de ley. El senador Espasa acaba de referirse al que va a tener lugar dentro de un par de días sobre el proyecto de ley de reproducción asistida, y ya que contamos hoy con la presencia de la señora ministra, que creo precisamente ha llegado cuando este senador estaba defendiendo nuestras enmiendas, queremos manifestarle un aspecto centralista que no nos gusta nada y que ya conocen los ponentes sobre el nuevo proyecto de ley, algo que, en cualquier caso, debatiremos en su momento. Dado que la señora ministra dispone de 48 horas para pensar sobre ello, quizá consigamos

alguna mejora que consideramos importante incorporar. Dado que llevamos discutiendo una serie de proyectos de ley referidos al sector de la sanidad que se han ido mejorando en sus correspondientes trámites parlamentarios, sería una lástima que el cuarto y último nos dejase un mal sabor de boca por salir intacto del Senado. Esperemos que el consenso que ha existido en la tramitación de los tres proyectos de ley se vuelva a manifestar en esta ocasión, si no totalmente, al menos parcialmente.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Socías.

El señor SOCÍAS PUIG: Muchas gracias, señor presidente.

La senadora Simonelli ha intervenido muy hábilmente, indicando las enmiendas que su grupo había admitido pero, si las contamos, lo cierto es que solamente han sido 5 de 211, además de las 20 que se han transaccionado, de manera que escasamente se llega a un 12 por ciento. *(El señor presidente ocupa la Presidencia.)*

Ha dado una respuesta general a todos los grupos parlamentarios, en una especie de tótem revolútm, alegando que la mayoría de las enmiendas se centraban en tres hechos en concreto: las condiciones de trabajo, como no podría ser de otro modo, tratándose de una ley que regula la normativa laboral de un colectivo muy amplio de trabajadores en la sanidad pública; las competencias, ya que en el caso de la sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y, por último, la financiación. Creo que todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en la presentación de enmiendas que hacen referencia a la financiación y debe ser por algo porque, cuando el río suena, agua lleva. En este caso, es evidente que todos aquellos que tienen en su mano la aplicación de este proyecto de ley de estatuto marco, sean del partido que sean —porque en las comunidades autónomas gobernamos todos—, de alguna forma han visto las orejas al lobo. En este sentido, en Galicia, a partir del 1º de enero, se va a aplicar el Impuesto sobre Hidrocarburos; y Jaume Matas, en Baleares, ha pedido una revisión de la financiación de las competencias sanitarias porque, a pesar de que la financiación del sistema sanitario se trató en conjunto con el nuevo modelo de financiación autonómico, todos recordamos y nos martillean en los oídos aquellas palabras que decían que fuera del sistema hacía mucho frío. En muchos casos, se tomó el todo por la parte, y se aceptó el sistema de financiación, a pesar de que la financiación de la sanidad viniera un poco más coja de lo deseable, sobre todo tratándose de un servicio básico para la población.

En efecto, es uno de los servicios básicos para nuestros ciudadanos, junto con la educación y bienestar social; es un pilar del trípode en que se basa el Estado de bienestar y, en este sentido, probablemente la sanidad fue la gran damnificada del sistema de financiación porque si la regulación del trabajo no tiene coste económico, sólo cabría una

explicación: que se aumente la jornada de trabajo; si la regulación de las condiciones de trabajo no tienen coste presupuestario, será porque empeoran las condiciones de trabajo. ¿Cómo puede explicarse que vaya a ponerse en marcha un adecuado sistema de incentivos sin que haya coste presupuestario? ¿Cómo se puede establecer una carrera profesional y afirmar que no supone coste económico?

Evidentemente, son puntos que van a estar en el orden del día de la aplicación del estatuto marco y, al final, a todos nos queda un poco aquella sensación del yo invito, pero tú pagas; como ha sucedido en el caso de la Ley del Menor y como puede suceder con la aplicación del estatuto marco.

Al final, señorías, la aplicación del estatuto marco va a suponer toda una serie de cargas presupuestarias que tendrán que soportar las comunidades autónomas, lo que significará —porque también habrá presiones de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular—, una revisión de toda la financiación sanitaria transferida a las comunidades autónomas.

Pensamos que la ley era necesaria y que tiene aspectos positivos, pero también tiene estos lunares que nos hubiera gustado tratar durante más tiempo, con el fin de alcanzar un consenso más amplio, como decía en mi primera intervención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Font Bonmatí.

La señora FONT BONMATÍ: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, señora ministra.

Sus señorías tendrán que convenir conmigo en que esta legislatura va a marcar un punto de inflexión, un antes y un después en lo que se refiere a legislación en materia sanitaria. Hace escasamente dos años se concluía un proceso de transferencias sanitarias que comenzó hace casi 20 años con transferencias en la materia a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como consecuencia de éstas, se creó la necesidad de elaborar la Ley de Calidad y Cohesión del sistema, que hemos aprobado en este año, y, como consecuencia de la misma, la Ley de Profesiones Sanitarias y la Ley del estatuto marco, que hoy estamos debatiendo en este pleno.

Por parte del portavoz de algún partido político —creo que ha sido el BNG— se ha dicho que esta ley llegaba un poco tarde. No sé si llega un poco tarde, porque 50 años de vigencia del actual estatuto marco son muchos años, de los cuales 25 los llevamos en democracia en este país y, de los mismos, solamente los últimos siete lleva gobernando el Partido Popular, lo cual demuestra que otros partidos que han tenido en su mano el poder no han tenido la voluntad de realizar un estatuto marco previo a las transferencias sanitarias, como se ha venido demandando hasta hace unos momentos desde esta Cámara respecto del sistema de financiación. Ha tenido que ser gracias a la voluntad del Partido Popular y, en concreto, de esta ministra, la que ha lle-

vado a cabo la reforma del estatuto marco que hoy estamos debatiendo en este pleno.

Sinceramente y como no puede ser de otra manera, comparto la opinión general en cuanto a que es una ley muy consensuada, muy trabajada y en la que han participado todos los sectores que tenían que decir algo sobre la misma. No obstante, esta tarde hemos escuchado dos ideas contrapuestas.

Por un lado, el portavoz del BNG decía que no se puede dejar al libre albedrío de las comunidades autónomas la organización del sistema de trabajo, añadiendo que además se habían endurecido las condiciones laborales.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista presenta un grupo de enmiendas bastante importante a este sector de la ley, mediante las cuales, de haberse aprobado, señor portavoz del Grupo Socialista, precisamente hubiésemos cometido una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, algo que se contrapone con lo que ha dicho la portavoz del Grupo de Senadores Naciona-listas Vascos, o sea, por un lado, se dice que cometemos injerencia y, por otro lado, se dice que no es así, de tal manera que nunca llegamos a que todos los grupos de esta Cámara se pongan por lo menos de acuerdo respecto de qué injerencias, si es el Gobierno el que se mete en competencias de comunidades autónomas y en cuáles no.

También hay que señalar que se han aprobado enmiendas de Coalición Canaria y de Convergència i Unió que resaltan, analizan e incluso aclaran más si cabe cuáles son las competencias del Estado y cuáles son de las comunidades autónomas.

No quiero dejar pasar la oportunidad en referencia a la afirmación que expresa que se endurecen las condiciones de trabajo. No sé si realmente son conscientes de lo que han dicho, porque garantizar la estabilidad en el empleo creo que no es endurecer las condiciones de trabajo; garantizar el desarrollo de una carrera profesional no es endurecer las condiciones de trabajo; que los profesionales tengan movilidad y no queden encasillados en las comunidades autónomas, como era lo previsto antes de aprobarse esta ley no es endurecer las condiciones de trabajo; como tampoco lo es haber aprobado una enmienda mediante la cual aquellos profesionales mayores de 60 años a quienes falte un tiempo de cotización tengan opción a cotizaciones mínimas y máximas. Eso no es endurecer las condiciones de trabajo.

Por otro lado, también hay que señalar que parte de esas condiciones de trabajo la tienen que negociar las comunidades autónomas con los sindicatos, es decir, se tendrán que sentar a negociar. Y no me gustaría pensar que por parte de ningún partido político se les niega esa capacidad de organización, de gestión y de diálogo.

Y eso forma parte del desarrollo del estatuto marco, que el Grupo Socialista deja en precario al abstenerse en la votación de esta ley, ya que, por un lado, no apoya a las comunidades autónomas, que sí apoyaron esta ley —no en vano, han contribuido a su elaboración—, y, por otro lado, al sindicato más afín, UGT, que también está dando, junto a Comisiones Obreras, su apoyo a la ley. Por tanto, quedan

en una zona de «outside», les han dejado un poco fuera de lugar.

Quiero finalizar, señor presidente, dando las gracias a todos los grupos, sobre todo a los que van a apoyar esta ley. Lamento que la generosidad demostrada por el ministerio y por este grupo político a la hora de transar las enmiendas y a la hora de aceptarlas no se vea recompensado en su voto. De todas maneras, muchísimas gracias a todos. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. *(El señor Socías Puig pide la palabra.)*

Senador Socías.

El señor SOCÍAS PUIG: Pido la palabra por el artículo 87, ya que creo que me ha citado explícitamente la senadora Font.

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto su señoría.

El señor SOCÍAS PUIG: Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente, pues el Reglamento nos deja sin poder contestar a la portavoz si no es utilizando este turno.

La senadora Font decía en su intervención que no se podía dejar según qué regulación al libre albedrío de las comunidades autónomas, pero después añade que nosotros injerimos en las comunidades autónomas. Necesitaríamos aclarar esto porque cuando intentamos tener una postura de armonización del Estado se nos critica por parte del Grupo Parlamentario Popular y cuando intentamos defender las competencias de las comunidades autónomas se nos dice que no tenemos proyecto de Estado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senadora Font.

La señora FONT BONMATÍ: Simplemente quiero aclarar que yo no he dicho lo del libre albedrío; ha sido otro grupo político el que ha hablado de que no se debería dejar al libre albedrío de las comunidades autónomas. Por otro lado, ya le he explicado que el grueso de sus enmiendas en lo referente al personal, capítulo X, es una injerencia completa en las competencias de las comunidades autónomas, algo que desde este Gobierno, por supuesto, no se va a aceptar.

Muchas gracias. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señorías, sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley del estatuto marco del personal sanitario.

En primer lugar, votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por los señores Cabrero y Cuenca, números 3, 4, 19, 25 y 27.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, seis; en contra, 130; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas 9 y 10 del mismo grupo parlamentario. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, uno; en contra, 135; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas 11, 18 y 20, firmadas por los señores Carbrero y Cuenca. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, uno; en contra, 187; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el resto de las enmiendas de dichos señores senadores. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, uno; en contra, 130; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Asimismo, votamos, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas del senador señor Quintana números 28 y 31. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 130; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos las enmiendas números 29, 30, 32 y 33 del senador señor Quintana. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, cinco; en contra, 130; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos las enmiendas números 39, 40, 43, 48, 52 y 56 del mismo senador. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos las enmiendas números 60 y 61 del mismo señor senador. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el resto de las enmiendas defendidas por el senador señor Quintana. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, uno; en contra, 131; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. A continuación, votamos las enmiendas números 81, 82 y 83, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 130; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos las enmiendas números 78, 80, 85, 94, 99, del mismo grupo parlamentario. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 19; en contra, 128; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 14; en contra, 131; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 67 y 68. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 19; en contra, 130; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 19; en contra, 187; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación del resto de las enmiendas presentadas por dicho grupo parlamentario.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 16; en contra, 130; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 114 y 125.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 61; en contra, 128; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 123, del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 76; en contra, 129; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 115 y 121, de Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 61; en contra, 128; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 56; en contra, 127; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Votamos en primer lugar la enmienda número 191.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 18; en contra, 131; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 193, del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 13; en contra, 130; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 192, 204, 208 a 210, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 14; en contra, 130; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 131; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar votamos la enmienda número 128.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 130; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 131, del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 65; en contra, 129; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 132, del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 62; en contra, 130; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 135 y 172, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 72; en contra, 130; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 134, 171, 173, 174, 180, 182, 186, 188 y 189, también del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 63; en contra, 130; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 141, 142 y 150, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 57; en contra, 134; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 57; en contra, 130; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La Presidencia ha recibido una propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 61.100, firmada por todos los grupos parlamentarios. ¿Se puede entender aprobada por asentimiento? *(Pausa.)* Gracias.

Votamos el dictamen. En primer lugar, artículo 37, apartado 2, artículo 42, apartado 1 y artículo 48, apartado 2.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 141; en contra, tres; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículo 38, artículo 42, apartado 2, artículo 43 y artículo 49, apartado 1.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 141; en contra, siete; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos, dentro del dictamen, la disposición transitoria sexta, apartado 2.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 143; en contra, seis; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la disposición derogatoria única, apartado 1.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 144; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 144; en contra, dos; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Señorías, por haber transcurrido cinco horas desde el inicio de la sesión, la Presidencia solicita autorización para continuar, oídos, naturalmente, los portavoces. *(Pausa.)* Entiendo que ha sido aprobado por asentimiento.

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (S. 621/000150) (C. D. 121/000152).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador Ruiz.

El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.

Con el mandato expreso de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, presento ante sus señorías en este Pleno el dictamen emitido por la referida comisión en relación con el proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Con ese honor me dirijo a esta Cámara para señalar que la tramitación en el Senado se inició tras la remisión del texto por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley el día 20 de septiembre de 2003. Tras distintas solicitudes de prórrogas, el plazo de presentación de enmiendas...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego guarden silencio.

El señor RUIZ RIVERO: ... se cerró con fecha 8 de octubre del presente. Durante ese período el Registro del Senado dejó constancia de la presentación de una propuesta de veto bajo la firma del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 123 propuestas de enmiendas parciales, una por el Grupo Parlamentario Mixto, 16 por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, 41 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 15 por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 47 por el Grupo Parlamentario Socialista y tres por el Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, designada en la sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del día 2 de octubre, se reunió el día 13 del mismo mes, decidiendo aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados con las modificaciones fruto de la incorporación de las enmiendas números 122 y 123 del Grupo Parlamentario Popular.

En la convocatoria de la comisión del día 21 de octubre y como consecuencia de la discusión y debate del texto, juntamente con las enmiendas mantenidas vivas, se aprueba como dictamen el informe de la ponencia modificado en lo que indicaba, la enmienda número 103 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, así como en dos enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, una de ellas sobre la base de las enmiendas número 101 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* y la 121 del Grupo Parlamentario Socialista. Esas dos enmiendas, señorías, fueron en consecuencia retiradas, al igual que la número 18 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès y la 74 del Grupo Parlamentario Socialista.

Acabado el debate, con seis votos particulares presentados y habiendo dictaminado la comisión, procede ahora, señorías, la discusión en pleno del dictamen sobre el proyecto de ley que se somete a su consideración.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Se ha presentado una propuesta de veto que se debatirá a continuación.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, tiene la palabra el senador Sesmiolo.

El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.

Por estas fechas, hace cuatro años me incorporé a esta Cámara como senador designado por el Parlamento de Cataluña. Los calendarios de elecciones y los términos legales hacen que quizá sea uno de los senadores que me pase un poco del tiempo, pero si he hecho referencia a esta circunstancia es porque en cuatro años no había tenido la oportunidad —no sé si llamarlo así— de presentar ningún veto; hoy he presentado dos y en alguna otra ley que hemos tratado con competencia legislativa plena, también he presentado algún otro, y yo mismo me he preguntado el porqué. En la discusión de otra ley, un ponente del Grupo Parlamentario Popular decía —y es bien libre de pensarlo y no voy a discutirlo— que seguramente se debía a que estaban próximas las elecciones al Parlamento de Cataluña.

También, con la misma libertad de pensamiento, le diré que yo creo que el Presidente Aznar quiere dejarlo todo atado y bien atado; es decir, acaba su mandato, está obsesionado con el tema de la cohesión y de la unidad de España y está en su perfecto derecho.

Nuestro grupo cree que realmente nos ha obsequiado con una avalancha de proyectos de ley que uno a uno, poquito a poco, como aquella gota de agua que al final agujerea la roca, va laminando, va trabajando en contra de lo que creemos nosotros que debiera ser el autogobierno o, al menos, el nivel de autogobierno que deseamos, hasta que, tal y como creemos que se puede deducir del resultado, algún día planteemos, porque es legítimo, la reforma de nuestro Estatuto.

Pues bien, hay una propuesta de veto sobre esta ley, la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Será bueno recordar que fue a iniciativa de nuestro grupo, y más concretamente de una persona entregada prácticamente toda su vida al servicio de su país y a la política, como fue el doctor Ramón Trías Fargas, cuando hace más de 20 años, se promovió la redacción y aprobación de la Lismi, ley en aquella época pionera, incluso me atrevería a decir, en Europa.

Yo atribuí la aprobación del trabajo del doctor Trías Fargas al Gobierno socialista, pero el senador Díaz Sol, con una humildad que le honra, me corrigió y me dijo: no, eran tiempos de UCD. A cada cual lo suyo.

Pues bien, han pasado más de 20 años desde la aprobación de esta ley, ley que se hizo obviamente una vez aprobada la Constitución y, por tanto, en el momento en que se estaba construyendo la arquitectura constitucional de las comunidades autónomas, por lo que la ley poco podía tener presente lo que después sería el desarrollo autonómico y el acceso de las diversas regiones de España a la autonomía una vez que Euskadi, Cataluña, Galicia y más tarde Andalucía accedieran a ella.

Estamos ante una ley hasta hoy vigente que en principio —y lo digo entre comillas— no tiene en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, pero que se ha ido aplicando sin ningún conflicto ni de mala relación ni de falta de cooperación con el Estado y con las otras comunidades autónomas y, por tanto, diríamos que el resultado de su aplicación es satisfactorio. Ya he dicho que ha cambiado la arquitectura constitucional, las costumbres, los usos, y la concienciación y exigencia de los ciudadanos; la sociedad se solidariza y no se siente tranquila si ve que hay quien, por razón de su discapacidad, tiene algún problema añadido, aunque alguno sea inevitable obviamente, sobre todo si afecta a la movilidad. Y como todo cambia, el Gobierno presenta este proyecto de ley.

Seguramente era el momento o uno de los momentos, por qué no, pero creemos, por las mismas razones que he dado en el anterior proyecto de ley sobre la Seguridad Social, que está preñado de desconfianza, de intentar, bajo la excusa del control, coordinar y vigilar. Éste no es un proyecto de ley que afecte esencialmente a las competencias de las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas van a hacer lo que crean oportuno, y no creo que el Gobierno del Estado cree una especie de policía de la discapacidad para ver qué hace cada una de ellas o cada ayuntamiento. Por lo tanto, todos estos aspectos que afectan, según nuestro criterio, al autogobierno tendrán un

aplicación práctica que yo diría de dudosa aplicación, valga la redundancia. No obstante, nosotros combatimos y denunciaremos lo que a nuestro juicio, más que afectar a competencias —que también— afecta a la necesaria cooperación y confianza mutua entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas, ya que sigue considerando a éstas como una especie de hermano mayor o alguien al que hay que proteger porque no acabamos de hacerlo bien.

Este proyecto de ley, además, tiene un pecado de origen, porque hemos visto que en su elaboración el Gobierno intentó, con éxito, ponerse en contacto con diversas asociaciones que trabajan en el campo de los disminuidos, con las que se llegaron a acuerdos, pero en ningún momento celebró —que nosotros sepamos, al menos en Cataluña— una reunión con las comunidades autónomas afectadas en algo tan esencial, porque las competencias básicas, las fundamentales, las de cada día, están en las comunidades autónomas. Leyes como la de movilidad para los discapacitados y de urbanismo —porque en la movilidad de los discapacitados el urbanismo es fundamental— las tienen —y las voy a decir por el orden en que creo que se han ido promulgando y pido disculpas si me dejo a alguna—: Cataluña, Euskadi, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Extremadura, y seguramente habrá alguna otra que no ha llegado a mi conocimiento, por eso antes he pedido disculpas.

¿Cómo, pues, se puede hacer una ley respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas sin haber negociado ni hablado con éstas? Y diré más, fíjense ustedes, como ha anunciado el presidente de la Comisión al presentar el dictamen, en la cantidad de enmiendas que hemos presentado los grupos. Últimamente nuestro grupo ha presentado muchas enmiendas a las diferentes leyes que hemos debatido, pero en ésta no somos los que más hemos presentado; hay algo más de 40 del Grupo Parlamentario Socialista y 15 ó 20 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, lo que significa que no ha habido suficiente diálogo en un asunto de tanta importancia.

Por tanto, iremos desgranando y explicando una a una las enmiendas que presenta mi Grupo a esta ley; que no van a ser aceptadas, porque excepto en la enmienda número 103 —lo que reconozco y agradezco, como siempre hago, porque es de honor— no hemos visto voluntad de diálogo y de 41 enmiendas sólo se ha aceptado una, y ninguna de las que hacen referencia al autogobierno que, repito, es inútil que conste en la ley porque será de muy difícil aplicación, y en ningún apartado de la misma está previsto ningún sistema de vigilancia o de control.

Por tanto, como hemos visto voluntad de negociación ni de acercamiento, a pesar de que es cierto que en el Congreso de los Diputados no presentamos enmienda a la totalidad, precisamente como señal de buena voluntad —promotores, como fuimos en su día, de la LISMI—, pensando que el Gobierno sería sensible, visto el fracaso y la decepción, hemos presentado este veto en el Senado que mantenemos rogando a las señorías que lo tengan a bien que nos den su apoyo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora señora San Baldomero.

La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, senador Sesmilo, en primer lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por los resultados de las elecciones celebradas ayer en Cataluña en las que obtuvieron una mayoría sobre el resto de los grupos. Muchas felicidades.

Ha hablado su señoría al principio de su intervención de la obsesión del presidente Aznar por mantener la cohesión y la unidad de España. Senador Sesmilo, no es una obsesión, es un deber del presidente del Gobierno como hombre de Estado. Esperamos contar con su señoría y con su grupo parlamentario. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Señor presidente, aunque sé que el Reglamento de la Cámara dice que los senadores que estén en el uso de la palabra no deben hacer uso más que de alguna pequeña nota, me voy a permitir leer, con motivo de la celebración del XXV aniversario de la Constitución, su artículo 2. Dice así: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Pero es que el artículo 49 dice que los poderes públicos —entre los que están el Estado español, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos— realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Y en su artículo 138, señorías, nuestra Constitución dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 —se lo acabo de leer—, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y continúa diciendo el apartado 2 de este mismo artículo: Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Si el Gobierno central, si el Gobierno de España es un poder público —esta senadora está hablando en nombre del grupo parlamentario que lo sostiene—, no va a dejar nunca de ejercer sus obligaciones. Pero también le puedo asegurar otra cosa, señoría. Bajo ningún concepto, nunca, nunca, a pesar de lo que también oímos en la comisión, el Gobierno quiere invadir ni conculcar las competencias de las comunidades autónomas. Fíjese, senador Sesmilo, que ustedes hablan de una recentralización, en tanto que nosotros, los hombres y mujeres del Partido Popular, hablamos de una segunda descentralización. Estamos llevando a descentralizar hacia lo más cercano a los ciudadanos: los ayuntamientos.

Senador Sesmiolo, creo que todos conocemos que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de asistencia social, pero esta ley que hoy estamos debatiendo es básica y orgánica puesto que va a reformar el Estatuto de los Trabajadores, va a reformar una Ley Orgánica, la de la Función Pública, y va a reformar otra Ley Orgánica, la de la Propiedad Horizontal. Y va a garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad en España, vivan donde vivan.

Además, senador Sesmiolo, esta ley se ha presentado ahora por una serie de motivos. En primer lugar, como su señoría muy bien ha reconocido, el Partido Popular ya llevaba en su programa la igualdad de oportunidades para los discapacitados, y tengo que decir que el Partido Popular, que sostiene al Gobierno, cumple con los programas electorales que presenta y mide muy bien sus fuerzas antes de plantear un programa y antes de decir cómo quiere trabajar para sus ciudadanos. Como esto venía en nuestro programa electoral, esta ley se presenta, entre otros motivos, para cumplirlo.

Senador Sesmiolo, esta ley también sigue las orientaciones de la Unión Europea, y estamos en el año europeo de los discapacitados. La Unión Europea está preparando documentos, programas y acciones jurídicas sobre la protección, la igualdad ante la ley y la eliminación de toda forma de discriminación, precisamente coincidiendo con este año europeo de la discapacidad y con la presentación de esta ley.

Esta ley ha nacido del diálogo y del consenso. Su señoría se queja de que no hemos hablado con los grupos parlamentarios y de que no hemos aceptado las enmiendas, pero le puedo asegurar, senador Sesmiolo —infórmese—, que ha nacido con el diálogo y consenso de las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad. Hay tres millones y medio de personas discapacitadas en España y, si atendemos a su entorno familiar —como le decía a su señoría en la comisión—, estamos hablando de 10 millones de personas, y no tiene por qué haber discriminación por el lugar en el que vivan ni por las circunstancias económicas que tengan. Somos nosotros, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Estado y el Gobierno de España el que debe garantizar que esto sea así.

Creo, senador Sesmiolo, que a veces en los debates políticos es difícil encontrar argumentos y buscar confrontaciones que nos hagan vernos en las diferencias; sin embargo, en esta ley son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan porque, al fin y al cabo, todos los senadores que estamos aquí lo que intentamos es servir a los ciudadanos, y en el caso que hoy nos ocupa a las personas con discapacidad.

Senador Sesmiolo, en los años que llevo en política me he dado cuenta de que buscar confrontaciones en lo competencial siempre crea inquietud, y se lo puedo decir porque veo lo que pasa en unas comunidades y otras. Todos queremos para nuestros ciudadanos lo mejor; todos intentamos dar más y mejor, pero hay alguien que tiene que velar para que todos seamos iguales, y eso le corresponden al Gobierno de España.

En una ley aprobada también en relación con los discapacitados, la Ley de la protección patrimonial de las perso-

nas con discapacidad, no se presentó ningún veto. Esa ley fue aprobada en la comisión con competencia legislativa plena y modificaba el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la normativa tributaria y contaba con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo Económico y Social. Para estas dos leyes tenemos un mandato de los hombres y mujeres de España -lo tengo por escrito y cuando quiera se lo enseñe a su señoría-, porque la Confederación Española de Minusválidos, que aúna a todos los hombres y mujeres con discapacidad, ha valorado positivamente ambas leyes y esperan que este proyecto obtenga el más amplio consenso. Eso es lo que esta senadora pide a la Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (*Denegaciones.*) Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Denegaciones.*) Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Espasa.

El señor ESPASA I OLIVER: Intervengo brevemente, señor presidente, para anunciar nuestro apoyo al veto presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*.

Asimismo, queremos subrayar que la senadora San Baldomero no ha respondido a ninguna de las imputaciones que se le han hecho desde la tribuna de oradores, sobre todo detallando las invasiones competenciales que producen una asfixia por prolijidad de las competencias autonómicas. Ya sé que me contestará que, en nombre de principios abstractos y fundamentales, el Estado es el responsable último y que podríamos acabar hablando de la persona máxima de todo nuestro ordenamiento jurídico que, en definitiva, es la responsable última; pero no se trata de eso, no se trata de utilizar los grandes términos y las grandes palabras para no responder o para esconder allí donde hay realmente —y se puede ver, demostrar y comprobar artículo por artículo— una invasión competencial por la vía de la prolijidad. Es una nueva forma de actuación que utiliza el Partido Popular —lo hizo en alguna otra ley que ahora no quiero recordar— y consiste en legislar de forma tan exhaustiva y prolija que, aun tratándose de una competencia estatal, esta misma prolijidad y exhaustividad agota completamente las posibilidades de desarrollo legislativo, incluso a veces casi ejecutivo, por parte de las propias comunidades autónomas.

Ésta era, en definitiva, la razón del veto y por esta misma razón lo vamos a apoyar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, tiene la palabra el senador Sesmiolo.

El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora, Dios me va a librar de negarle al señor Aznar el derecho a defender la cohesión y la unidad de España, y si lo considera un deber, razón de más. Si yo comento esto es porque me da la sensación —dicho con todo el respeto— de que puede llegar a ser una obsesión, me da la impresión de que últimamente tiene esta obsesión, francamente, y a veces me pregunto si le falta confianza en su propio proyecto y si ha llegado a pensar que atándolo todo tan atado le puede pasar como al botillo que, una vez puesto en el caldo, revienta. Está en todo su derecho, pero creo que yo también tengo libertad para poderlo criticar cuando me parece que es apabullante y obsesivo, y la verdad, con todo los respetos para don José María Aznar, me parece que es así.

Ha dicho usted una cosa un poco preocupante —ya sé que es la manera de pensar del Partido Popular y que por eso somos partidos diferentes y fuerzas políticas diferentes—: mezcla la diferencia con el privilegio, como si la diferencia fuera un privilegio. La diferencia es una constatación, el que es diferente no es mejor ni es peor. Un municipio de montaña tendrá muchas más barreras arquitectónicas para los discapacitados que uno en el llano; son diferentes, pero no es que uno tenga el privilegio de estar en el llano y el otro la desgracia de estar en la montaña, porque a lo mejor el discapacitado disfruta mucho más viendo los horizontes profundos y contemplando el panorama. De ahí la necesidad en estos temas de las políticas de proximidad; si es que en esta ley deberían tener prácticamente todas las competencias los ayuntamientos —y creo que le dije en comisión que precisamente le hablo desde un grupo político que mucha fama de descentralizar en los ayuntamientos no tiene, pero éste es un caso clarísimo según mi criterio.

Me ha dicho que esta ley está consensuada con diversas organizaciones. Yo ya se lo he reconocido —le agradezco la reiteración— pero le he dicho que lo sé y me consta —Confederación Española de Minusválidos, etcétera—. Lo que yo le he dicho, y me da la sensación de que quien calle otorga, es que con las que no han hablado ha sido con las comunidades autónomas competentes en la materia; esto es lo que he dicho. Realmente el grado de acuerdo con todas estas organizaciones ha sido muy alto —con alguna no tanto, por ejemplo con la Federación de sordos, porque piden la cuestión de los signos, etcétera—. He reconocido el esfuerzo que ustedes han hecho con las organizaciones que trabajan en favor del discapacitado; lo he aceptado y precisamente ha sido argumento para decirle que fíjese que lástima no haberlo hablado con las comunidades autónomas competentes porque a lo mejor algunas de estas disfunciones, que en nuestro criterio son importantes, se hubieran salvado.

Nada más, le agradezco su cordialidad. Al final la ley saldrá, porque es necesaria, en beneficio de los discapacitados, pero créame que lamento que haya vuelto a pasar algo a lo que nos tienen acostumbrados al menos en este final de legislatura: que les han entrado las prisas para que quede todo bien armonizado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Díaz Sol.

El señor DÍAZ SOL: Gracias, señor presidente.

Intervengo para fijar la posición de mi grupo respecto del veto que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*. Considero que el debate al que hemos asistido en este momento, así como el que tuvo lugar en comisión, demuestran que no ha habido esa voluntad de consenso de la que hablaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino que, por el contrario, hemos ido hacia atrás. En el trámite del Congreso de los Diputados no se presentó ninguna enmienda de totalidad, pero en pro del consenso hemos conseguido que en el Senado se haya presentado un veto por parte de un grupo parlamentario, lo que quiere decir que hay una fuerte resistencia respecto del proyecto.

Cuando se habla de consenso —y a ello hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* en su primera intervención— primero habría que ver cómo se elaboró la ley de integración social de los minusválidos. Dada mi edad, lamentablemente, me tocó estar presente en aquel debate y ser ponente socialista. Aquella fue una ley que se aprobó con un gran nivel de consenso; no se aceptaron todas las propuestas de todos los grupos, pero sucedió algo parecido a lo que sucedió con la Constitución, es decir, que aunque no estábamos completamente satisfechos con cómo había salido, todos nos vimos representados en ella, motivo por el que la misma ha durado 20 años y sigue haciéndolo. Este proyecto de ley es un complemento de la LISMI, y por tanto, se demuestra que cuando se elabora una ley con afán integrador ésta perdura en el tiempo, pues recoge una representación de todas las sensibilidades, habiéndose aportado lo mejor de cada grupo para que los sectores con problemas de integración en la sociedad se vean cuando menos ayudados.

En este caso no ha sido así. Esta ley no viene con consenso; se han aceptado muy pocas enmiendas; las transaccionales han sido escasas; ha habido grandes ausencias, como el tema de la inversión de la carga de la prueba, y hay cuestiones que están tan absolutamente inconcretas, tan tratadas por compromiso, que produce una profunda decepción. Al Grupo Parlamentario Socialista le produce una profundísima decepción este proyecto de ley, comenzando por el famoso tema de la sección dedicada a infracciones y sanciones, porque cuando se aplaza a dos años vista el planteamiento del sistema de infracciones y sanciones implícitamente se está diciendo que la ley no se va a cumplir en sus términos hasta entonces, cuando realmente existan las sanciones para quien no cumpla con lo que en ella se dispone. No se tratan los temas laborales, no se tratan los problemas educativos y sanitarios, no se tratan los problemas de accesibilidad a muchos sectores que ni si quiera han recibido la mínima atención por parte del Gobierno.

¿Y ello por qué sucede, señorías? Pues porque se anuncia el proyecto de ley antes de las elecciones municipales y autonómicas, se aprueba a final de Legislatura, es decir,

antes de unas elecciones generales, y en definitiva los defectos de que pueda adolecer la ley desaparecen ante el poder mediático del Gobierno, que por cierto ejerce con mucha eficacia, dando la sensación de que hemos elaborado un proyecto de ley maravilloso, algo que no se cree nadie. Nadie puede aceptar una redacción según la cual las medidas de acción positiva «podrán ser»... ¿Cómo se puede decir esto? Las medidas de acción positiva no podrán ser nada, sino que tendrán que ser algo, tienen que ser medidas definitivas que ayuden a la gente. Pero, como digo, dado que ahora su líder es gallego, ha hecho de ello una bandera empleando términos como el «podrán ser» o «podrán consistir»... o no. Se va a producir un tremendo lío porque las personas no van a saber a qué atenerse hasta que el Gobierno eche a andar, después de dos años y, por tanto, estamos hablando de plazos larguísimos.

La verdad que la presentación de este proyecto de ley ha sido tan precipitada que a mi grupo parlamentario le parece que ustedes deberían haber sido más flexibles en relación con las posiciones expresadas por las distintas fuerzas políticas.

Mi grupo parlamentario va a apoyar el veto únicamente como medida de protesta ante un proyecto de ley que es un acto fallido y, durante el debate de las enmiendas, iremos decidiendo qué posición adoptar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora San Baldomero.

La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señorías, señor presidente, creo que su posición ante este veto ha sido la de «sostenella y no enmendalla»; creo que es una patalleta, un lamento, y muestra la angustia y el malestar de sus señorías, de manera que aprovechan la percha que les ha proporcionado Convergència i Unió con la presentación de este veto.

Es su derecho al pataleo, señorías, porque ¿acaso saben sus señorías si esta ley se ha llevado y debatido en la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas? No se han preocupado de enterarse.

¿Sus señorías saben que no se trata de grandes gestos sino que es una ley que va a atender a las personas con nombres y apellidos, vivan en la ciudad o en el campo?

Recuerdo que mientras fui directora general de Asuntos Sociales en La Rioja, se me ocurrió decir en un pueblo que había que rebajar las aceras porque una persona había sufrido un accidente y se había quedado en silla de ruedas, y el alcalde se rió de mí. Señorías, eso ha cambiado en estos veinte años; no ha cambiado la arquitectura constitucional pero ha cambiado la sociedad, ha cambiado la percepción hacia las personas diferentes, a las que antes se excluía y ahora se les incluye en la sociedad.

Lo siento, esta ley está destinada a tres millones y medio de personas y, por ello, les reto a que se atrevan a decir a la cara a alguna persona con discapacidad que van a votar en contra de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Señorías, votamos la propuesta de veto al proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es la propuesta de veto número 1.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 65; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.

La sesión se suspende hasta mañana, a las nueve y media.

Eran las veintidós horas.